

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL CUAUTITLÁN IZCALLI
LICENCIATURA EN DERECHO INTERNACIONAL



*LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL CASO 12.287 CRUZ ÁVILA MONDRAGÓN EN TRÁMITE ANTE LA
COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS AÑOS 2003 A
2013*

TESIS

Presentada por:

CLAUDIA CRUZ VELÁZQUEZ

Dirigida por:

DRA. EN D. LILIANA ANTONIA MENDOZA GONZÁLEZ

Cuautitlán Izcalli, Estado de México Octubre 2016



UAEM

Universidad Autónoma
del Estado de México

Oficio No. UAPCI/DA/DEP/093/2016

Cuautitlán Izcalli, Estado de México a 10 de octubre de 2016

DR. ROLANDO HEREDIA DOMINICO
SUBDIRECTOR ACADÉMICO DE LA UAP
CUAUTITLÁN IZCALLI
P R E S E N T E



**ASUNTO: VOTO APROBATORIO ASESOR
Y REVISORES DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN,
Y AUTORIZACIÓN PARA IMPRESIÓN.**

Los que suscriben, por este medio manifestamos que el trabajo de investigación en la modalidad de TESIS titulado "LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CASO 12.287 CRUZ ÁVILA MONDRAGÓN EN TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS AÑOS 2003 A 2013" de la alumna CLAUDIA CRUZ VELÁZQUEZ, con número de cuenta 1028087, de la Licenciatura en Derecho Internacional; cumple con los requisitos y cualidades que corresponden a esta opción de evaluación profesional.

Por lo anterior, **OTORGAMOS** nuestro **VOTO APROBATORIO** en términos del Reglamento de Evaluación Profesional de la Universidad Autónoma del Estado de México; asimismo, manifestamos que estamos de acuerdo en la impresión del mismo.

Sin otro particular, nos reiteramos a sus órdenes.

ATENTAMENTE
PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO

"2016, Año del 60 Aniversario de la Universidad Autónoma del Estado de México"

ASESOR

DRA. LILIANA ANTONIA MENDOZA GONZÁLEZ

REVISOR

MTRA. VIRGINIA MARTÍNEZ CAMPOS

REVISOR

MTRO. SALVADOR MANCILLA VÁZQUEZ

C.C.P. MTRO. EN FIN. ROBERT HERNÁNDEZ MARTÍNEZ.- JEFE DE LA UNIDAD DE EVALUACIÓN PROFESIONAL
DRA. LILIANA ANTONIA MENDOZA GONZÁLEZ.- JEFA DE LA UNIDAD DE DOCENCIA DE LA LICENCIATURA EN DERECHO INTERNACIONAL
CLAUDIA CRUZ VELÁZQUEZ.- ALUMNA INTERESADO.
ARCHIVO RHD/RHM/mdbr*



U.A.P. CUAUTITLÁN IZCALLI
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA



www.uaemex.mx

Av. Prolongación Islas s/n, Col. Atlanta 2ª, Sección, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54740
Tel. (0155) 11 13 40 60 y 11 13 40 62 Ext. 103 y 104 Conmutador 7211

E-mail: duapci@gmail.com



@UAP Cuautitlan Iz.



UAP Cuautitlán Izcalli http://www.uaemex.mx/duapci/

DEDICATORIAS

A mi Jehová Jireh

A mi esposo y compañero de vida

A mis padres

A mis hermanos y familia

A mi asesora de tesis

AGRADECIMIENTOS

A mi Jehová Jireh, por su infinita misericordia y puedo decir con toda seguridad “Yo puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece (filipenses 4:13)”.

A mi esposo, Lic. José de Jesús Rivas López, por su amor, comprensión, bendiciones y apoyo para culminar este proyecto y continuar con los otros más que tenemos. ¡Te amo!

A mi mamá Angélica Ma. Velázquez López, por tu esfuerzo, apoyo incondicional que me brindaste y porque juntas iniciamos este proyecto.

A mi padre José Cruz Reyes y hermanos Mauricio Cruz Velázquez y José Cruz Velázquez por motivarme a seguir adelante.

A mi familia Velázquez por su motivación y apoyo.

A mi asesora de tesis, maestra y coordinadora de la licenciatura Dra. Liliana Antonia Mendoza González, por todo su apoyo y comprensión.

A la coordinadora de la UAPCI de la generación 2010-2015 Dra. Eva Martha Chaparro Salinas y a los maestros de asignatura por su apoyo y conocimiento brindado durante la carrera.

Al Coordinador de la UAPCI Dr. José Mauro Victoria Mora, por el apoyo brindado para concluir este proceso de titulación.

ÍNDICE

RESUMEN	11
SUMMARY	12
INTRODUCCIÓN	13
CAPÍTULO I	17
PRECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS	17
1.1 Antecedentes Internacionales de los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia.....	17
1.1.1 Momentos claves del surgimiento de los Derechos Humanos	18
1.1.2 Los Derechos Humanos en los inicios del Estado Constitucional	20
1.1.2.1 El Estado Absolutista al Estado Constitucional	20
1.1.2.2 Principales textos sobre la protección de los Derechos Humanos antes del constitucionalismo	21
1.1.2.2.1 La Petición del Derecho (1628).....	21
1.1.2.2.2 Cuerpo de Libertades de Massachusetts (1641)	22
1.1.2.3 Principales textos normativos de los Derechos Humanos en el marco constitucional	23
1.1.2.3.1 La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos (1789).....	23
1.1.2.3.2 La Carta de Derechos de los Estados Unidos de Norte América (1791)	24
1.1.3 Surgimiento del Sistema Universal de los Derechos Humanos	25
1.1.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos	26
1.1.3.2 Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos.....	27
1.1.4 Surgimiento de los Sistemas Regionales de los Derechos Humanos ...	28

1.1.4.1	Sistema Regional Europeo.....	28
1.1.4.2	Sistema Regional Interamericano	29
1.1.4.3	Sistema Regional Africano.....	30
1.1.5	La Procuración de Justicia: El origen de la figura del Procurador.....	31
1.1.5.1	Época Antigua: Roma	31
1.1.5.2	Época Media: Feudalismo.....	31
1.1.5.3	Época Moderna: Reinos de España.....	32
1.2	Surgimiento de los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia en México	33
1.2.1	El origen de los Derechos Humanos en el sistema normativo mexicano	33
1.2.1.1	Constitución de Apatzingán 1814.....	33
1.2.1.2	Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824...	34
1.2.1.3	Las Siete Leyes Constitucionales de 1836	35
1.2.1.4	Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 ...	37
1.2.1.5	Leyes de Reforma de 1859	37
1.2.1.6	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ...	38
1.2.1.7	Reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos	39
1.2.2	Antecedentes de la procuración de justicia en México	42
1.2.2.1	La Procuración de Justicia en la Nueva España	42
1.2.2.2	La Procuración de justicia en el México Independiente	43
1.2.3	Antecedentes del Sistema Penal en México.....	46
1.2.3.1	Sistema Penal Inquisitivo	46
1.2.3.2	Sistema Penal Mixto	47
1.2.3.3	Sistema Penal Acusatorio-Adversarial y Oral.....	48

1.2.3.3.1	Figura del Ministerio Público en el nuevo Sistema Penal	51
1.2.3.3.2	Breve análisis del papel del Policía en este Sistema Penal	53
1.2.3.3.3	El Rol de los Peritos en el Nuevo Sistema Penal	56
1.2.3.3.4	La Actuación del Protocolo de Estambul en la Procuración de Justicia en México.....	57
1.3	Antecedentes de la desaparición forzada.....	58
1.3.1	La desaparición forzada y su vinculación con el crimen de Lesa Humanidad	58
1.3.2	Precedentes de la protección a personas contra la desaparición forzada	59
1.3.2.1	Sistema Universal	59
1.3.2.2	Sistema Interamericano	61
1.3.2.3	Sistema Mexicano	63
1.4	El surgimiento de la prohibición de la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos	66
1.4.1	Sistema Universal.....	66
1.4.2	Sistema Interamericano.....	67
1.4.3	Sistema Mexicano	68
1.5	Antecedentes de la Procuración de Justicia en las violaciones de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la CIDH	69
CAPÍTULO II		75
LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS.....		75
2.1	Marco conceptual	75
2.1.1	Disposiciones Generales acerca de los Derechos Humanos	75
2.1.2	¿Qué se entiende por Procuración de Justicia?	77

2.2	El sistema interamericano en la procuración de justicia en las violaciones de los Derechos Humanos	77
2.2.1	Organización de los Estados Americanos	77
2.2.2	Comisión Interamericana de los Derechos Humanos	81
2.2.2.1	Estructura.....	81
2.2.2.2	Funciones.....	81
2.2.2.3	Competencia	82
2.2.2.4	Procedimiento	83
2.2.2.5	Resoluciones.....	83
2.2.2.6	Medidas cautelares	84
2.2.2.7	Soluciones amistosas	84
2.3	Procuración de justicia en México	85
2.3.1	Marco jurídico constitucional de la procuración de justicia en materia de los Derechos Humanos.....	85
2.3.2	Elementos constitucionales en protección a los Derechos Humanos....	86
2.3.2.1	Bloque constitucional	86
2.3.2.2	Control de convencionalidad (artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)	89
2.3.2.3	Interpretación conforme	90
2.3.2.4	Principio Pro Persona	91
2.3.3	Procuraduría General de la República y Procuradurías Estatales.....	92
2.4	Procuración de justicia en las violaciones de los Derechos Humanos en el Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón	93
2.4.1	Violación a los Derechos Humanos en el Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón	94
2.4.2	Convención Americana de Derechos Humanos	94

2.4.3	Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas	101
2.4.4	Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura	103
CAPÍTULO III		105
MARCO METODOLÓGICO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CASO 12.287 CRUZ ÁVILA MONDRAGÓN		105
3.1	Paradigma de la investigación	105
3.2	Tipo de investigación	106
3.3	Participantes en el estudio	106
3.4	Métodos de investigación	107
3.4.1	Métodos teóricos	107
3.4.2	Método cuantitativo	109
3.4.3	Método cualitativo	109
3.4.4	Métodos empíricos	110
3.5	Técnicas de investigación	110
CAPÍTULO IV		112
DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROBLEMA		112
4.1	Situación actual de la Procuración de Justicia de los Derechos Humanos	112
4.2	Actividades en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015	112
4.3	Reportes de los Censos Nacionales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía	116
4.3.1	Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE) 2014	116
4.3.2	Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015	116
CAPÍTULO V		121

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	121
5.1 Resultados del Estudio sobre la Procuración de Justicia en las Violaciones de los Derechos Humanos en los Casos en trámite ante la CIDH	121
5.1.1 Cuestionario aplicado a Peritos	121
5.1.2 Cuestionario aplicado a Organizaciones No Gubernamentales en materia de Derechos Humanos.....	128
5.1.3 Entrevista a un Servidor Público de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación	130
5.2 Recomendaciones para la Procuración de Justicia en la Violación a los Derechos Humanos del Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos	132
CONCLUSIONES.....	134
REFERENCIAS.....	136
Anexo 1: Reforma Constitucional en materia Penal (2008).....	147
Anexo 2: Conclusiones de la Jornada de Diálogo sobre la Efectividad de los Mecanismos de Búsqueda/Localización de Personas Desaparecidas.....	154
Anexo 3: Acuerdo A/057/2003.....	163
Anexo 4: Formato de Encuesta para Peritos.....	188
Anexo 5: Formato de Encuesta para Organizaciones No Gubernamentales	190
Anexo 6: Formato de Entrevista para el Servidor Público de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.....	191

RESUMEN

En un Estado democrático es necesario garantizar el cumplimiento de la ley y el respeto absoluto de los derechos fundamentales. Adoptar estos paradigmas no ha sido fácil, debido a que han implicado conflictos entre sí. Tal es la situación que enfrenta el Estado mexicano con las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de servidores públicos.

Estas situaciones suelen presentarse en el proceso de impartición de justicia (principalmente en la procuración de justicia), donde elementos policiales, agencias del ministerio público y servicios periciales incurrir desde una omisión de una garantía hasta participar en el delito de alguna violación de los derechos de las personas.

La procuración de justicia es un deber del Estado consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que establece una serie de derechos para la impartición de justicia. Sin embargo, México es parte de los organismos internacionales en materia de derechos humanos tanto del sistema universal como del sistema interamericano.

Su participación ha contribuido al fortalecimiento del sistema procesal mexicano. Ante esto, las víctimas tienen el derecho a que su caso sea llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como primer paso, siempre y cuando hayan agotado los recursos internos o los supuestos establecidos en las convenciones, respetando de esta manera, la soberanía del Estado y los derechos de las personas.

Durante este proceso, cuando el caso es admisible ante la CIDH, se puede establecer en cualquier momento, un acuerdo de solución amistosa. Donde ambas partes, establecen una serie de compromisos referentes a la manera en que el Estado debe de subsanar los derechos violados de las víctimas así como erradicar las prácticas de estas acciones como es el caso de la tortura y desaparición forzada.

En caso de incumplimiento, las víctimas podrán cancelar este acuerdo y solicitar a la Comisión que su caso se ha llevado ante la Corte Interamericana. Cabe mencionar que, la participación de las organizaciones no gubernamentales ayudan el proceso del caso y orientan en todo momento a las víctimas.

SUMMARY

In a democratic State is necessary to ensure compliance with the law and the absolute respect for human rights. Adopt these paradigms not has been easy, since have involved conflicts between themselves. Such is the situation faced by the mexican State in the constant violations of human rights by public servants.

These situations often arise in the process of implementation of the law (principally in the procurement of justice), where elements police, agencies of Ministry Public and services expert incur from an omission of a warranty to participate in the crime of any violation of them rights of the people.

The procurement of justice is a duty of the State enshrined in the Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, which establishes a series of rights for the provision of the law. However, México is part of the international agencies in the field of human rights both of the universal system as in the inter-American system.

Their participation has contributed the strengthening of the Mexican justice system. As a result, victims have the right that his case be brought before the Inter-American Commission on Human Rights as a first step, always and when they have exhausted domestic remedies or the assumptions established in the conventions, respecting this way, the sovereignty of the State and the rights of the people.

During this process, when is the case admissible before the IACHR, can be set at any time, a friendly settlement agreement. Where both parties, establishing a series of commitments concerning the way in which the State must correct the violated rights of the victims as well as to eradicate the practices of these actions as in the case of torture and enforced disappearance.

In case of non-compliance, victims may cancel this agreement and ask the Commission that his case has been brought to the Inter-American Court. It is worth mentioning that the participation of non-governmental organizations to help the process of the case and directed at all times to the victims.

INTRODUCCIÓN

Los Derechos Humanos son consecuencia de la dignidad intrínseca al ser humano. En donde la finalidad es preservar una esfera de libertad que nos protege del poder del Estado y son disfrutados por todos sin distinciones. De ahí que, la sistematización de los Derechos Humanos a través de documentos legales del derecho internacional y nacional como son en Convenciones, Pactos, Acuerdos o Declaraciones, Constituciones y leyes, representan el compromiso de los distintos Estados por reconocer y garantizar los derechos de sus ciudadanos.

En caso de incumplimiento se someterá a una instancia a nivel nacional estableciendo responsabilidad por violación de derechos humanos. Sin embargo, algunos casos se llevarán a instancias internacionales cuando estas agoten sus recursos internos o cuando lo prevea la ley.

En México, los Derechos Humanos se establecieron en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, con la reforma del 10 de junio de 2011 se modificó la denominación del Capítulo I por la de Derechos Humanos y sus Garantías. Además, se incorporó el reconocimiento del goce de estos derechos recogidos en tratados internacionales adoptados por el Estado mexicano, así como las garantías para su protección.

Destaca que en el artículo 1º, párrafo segundo, se constituyó un enunciado de interpretación de tales derechos mencionando que: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). En este párrafo se incorpora la interpretación de las normas relativas a derechos humanos bajo el principio pro persona.

Igualmente, se consagró a nivel constitucional la obligación del Estado de respetar y garantizar los derechos, a través del artículo 21, párrafo VIII de la Constitución, la cual establece como derecho fundamental la seguridad pública:

... es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la

investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Entorno a este derecho, no solo se limita en la prevención sino que, incluye la persecución e investigación de los delitos cometidos. Es decir, la prevención del delito, la procuración, administración y ejecución de sanciones que conlleva.

Referente a lo anterior se justifica el planteamiento a la problemática siguiente ¿Cómo contribuir en la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos del caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que permita la disminución de la impunidad en materia de tortura y desaparición forzada?

Se precisa entonces como objeto de estudio la procuración de justicia en las violaciones de los derechos humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón.

Constituyen como preguntas de investigación las siguientes:

1. ¿Cuáles han sido los acontecimientos históricos respecto a la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón?
2. ¿Qué referentes teóricos existen sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón?
3. ¿Qué metodología debe tener la investigación respecto a la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón?
4. ¿Cómo se aplica actualmente la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos?

5. ¿Qué acciones se deben aplicar para lograr la correcta procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón?

Para contribuir a la solución del problema planteado, se establece como objetivo general de la investigación: La elaboración de un conjunto de recomendaciones jurídicas sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón, en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Como objetivos específicos los siguientes:

1. Examinar los acontecimientos históricos que se han aplicado en la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón.
2. Analizar los referentes teóricos sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón.
3. Identificar los métodos y técnicas de investigación.
4. Diagnosticar la situación actual de la procuración de justicia del Caso. 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
5. Determinar las acciones que debe tener la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón.

La investigación está estructurada en cinco capítulos que se describen a continuación:

En el Capítulo primero, se abordaron los precedentes históricos sobre la procuración de justicia en materia de Derechos Humanos y en particular del caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión Interamericana o por sus siglas CIDH), donde se examinó en el ámbito internacional y nacional el surgimiento de la procuración en la defensa de los derechos humanos y los antecedentes del caso.

Con respecto al Capítulo segundo, se analizaron los referentes teóricos sobre la procuración de justicia en materia de derechos humanos donde se desarrolló la estructura de la procuración de justicia tanto en el sistema jurídico mexicano como en

el sistema interamericano. Así como, las violaciones de los derechos humanos en el caso antes citado.

En el Capítulo tercero comprende el marco metodológico, se identificaron los métodos y las técnicas que se utilizaran para el desarrollo de la investigación en la procuración de justicia en la violación de los derechos humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón. Desde la perspectiva del paradigma mixto (cuantitativo-cualitativo).

Por otra parte, el Capítulo cuarto es referente a la situación actual sobre la procuración de justicia en las violaciones de los derechos humanos del caso antes mencionado. Donde se estudiara a partir de los datos estadísticos de la Comisión Interamericana así como los reportes de los Censos Nacionales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante los años 2014-2015.

Finalmente, el Capítulo quinto refiere la presentación de resultados de los instrumentos de la investigación. Así como las sugerencias de acuerdo a lo establecido en el objetivo general de la investigación: La elaboración de un conjunto de recomendaciones jurídicas sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón, en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

CAPÍTULO I

PRECEDENTES HISTÓRICOS SOBRE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el presente capítulo se examinarán los momentos históricos que dieron origen a la normatividad de los Derechos Humanos, así como el objetivo principal de los instrumentos jurídicos y la necesidad de la figura de un Procurador. Asimismo, se identificarán las épocas del surgimiento del Procurador en diversas etapas, tanto en el ámbito nivel nacional como internacional.

Posteriormente, se desarrollarán los antecedentes de la procuración de justicia del Caso 124.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Además, se describirán los antecedentes de las principales violaciones a los Derechos Humanos del caso antes citado, las cuales son la Desaparición Forzada, la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes.

1.1 Antecedentes Internacionales de los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia

Los intentos de establecer los Derechos Humanos en las grandes civilizaciones de la historia forjaron precedentes en la creación de organismos internacionales para la defensa de estos derechos. Asimismo, una serie de instrumentos jurídicos que permitieron establecer principios y derechos rectores para la vida cotidiana del ser humano.

La procuración de justicia, surge como consecuencia de las constantes violaciones a los Derechos Humanos, momentos que, contribuyeron al fortalecimiento de instrumentos jurídicos tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, pese a los avances jurídicos en defensa de los derechos humanos, los crímenes de desaparición forzada y tortura siguen presentándose en diferentes partes del mundo.

En México, ha sido una de las problemáticas en los siglos XX y XXI. Como es el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón, el cual forma un precedente de las constantes violaciones a los Derechos Humanos en materia de tortura y desaparición forzada.

Problemática que, se delimita en los errores de la procuración de justicia a nivel de la investigaciones ministeriales.

1.1.1 Momentos claves del surgimiento de los Derechos Humanos

El Cilindro de Ciro (539 a. C.)

En el año 539 a. C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia, donde liberó a los esclavos, declaró que todas las personas tenían el derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial. Estos y otros decretos fueron grabados en un cilindro de barro cocido en lenguaje acadio con escritura cuneiforme.

Conocido hoy el Cilindro de Ciro como el primer documento de los derechos humanos en el mundo. Está traducido en los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas a los primeros cuatro artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. (Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, 2015)

La Difusión de los Derechos Humanos

Desde Babilonia, la idea de los derechos humanos se difundió rápidamente por la India, Grecia y por último a Roma. Es aquí, donde surge el concepto de *ley natural* o *ius natural*, donde la ley romana se basaba en ideas racionales derivadas de la naturaleza de las cosas.

En Roma cuya fundación trascendente es el Derecho, se recibió la influencia del estoicismo y esta es muy clara en la filosofía y la jurisprudencia romana. El Derecho Romano tuvo una división que recogía la herencia griega con el *ius naturale*, el *ius gentium* y el *ius civile*. Los romanos llegaron entonces a la idea de comunidad universal y a extender la ciudadanía. (Erwin, 2004, p. 12)

Se entiende que de las mayores aportaciones de la civilización Romana, fue el establecimiento de un sistema jurídico, sin olvidar que muchos de los pensamientos y forma de aplicar la normativa fue absorbida por la doctrina filosófica, el estoicismo.

Quienes tendían a la creencia platónica de que todo hombre vive en la sociedad que merece.

Las doce tablas las explica de una gran manera Alejandra Verlussconni La *Ley de las Doce Tablas* (Lex Duodecim Tabularum), es el más antiguo Código de Derecho Romano. Fue redactado entre los años 451 y 450 a.C., y tomó como fuente el Derecho oral existente en aquel momento. Sus autores fueron 10 magistrados denominados decenviros, y se inscribió sobre tablas de bronce o madera que fueron colocadas en el principal foro romano. (Derecho Romano, 2015)

Dicho código de derecho romano, nace con la idea de reunir varias normativas de la época en un solo cuerpo legal, de la misma manera se publica este código con el fin de que la población completa entienda lo que se está legislando en el momento. Sin embargo el aporte principal de las Doce Tablas al desarrollo de los Derechos Humanos, fue lo relativo a la protección del patrimonio en general debido a que dichas leyes fueron impulsadas por los Patricios.

La Carta Magna

En 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes y tradiciones antiguas con que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. (Martínez Turcio & Burgos Fetzner, 2008, p. 25)

Entre ellos estaba el derecho de la iglesia a estar libre de la intervención del gobierno, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades y que se les protegiera de impuestos excesivos. Estableció el derecho de las viudas que poseían propiedades para decidir no volver a casarse, y establece principios de garantías legales e igualdad ante la ley. También contenía disposiciones que prohibían el soborno y la mala conducta de los funcionarios. (Pacheco Gómez, 2000, p. 21)

Considerada ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna, la Carta Magna fue un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. Asimismo, fue la influencia primitiva

más significativa que condujo a la ley constitucional actual en el mundo de habla inglesa.

1.1.2 Los Derechos Humanos en los inicios del Estado Constitucional

En los siglos XVII y XVIII, surge el movimiento de la constitucionalización de los derechos, específicamente entre la transición del Estado Absolutista al Estado Constitucional. Debido a que, se caracterizó por la concentración de poder en los elementos de territorio, orden jurídico y soberanía.

Si ya antes de los siglos XVII y XVIII se había producido una cierta intuición acerca de lo que entonces iban a ser considerados como derechos naturales, lo que aún no se había hecho era ni una sistematización, ni una fundamentación abstracta (ajena a coyunturas históricas), ni sobre toda una utilización realmente operativa de estos derechos desde un punto de vista estrictamente jurídico, habida cuenta de que se había hecho uso de estos derechos básicamente desde los campos exclusivos de la Teología o la Filosofía, con escasas repercusiones prácticas en los ámbitos del Derecho y de la Política. (Santamaría Ibeas, 2001, p. 8)

Los Derechos Humanos comienzan a tener interés para el derecho entre los siglos XVII y XVIII, la cual subyacen los precedentes sobre la posición de los individuos frente al Estado de manera jurídica. Asimismo, hicieron entrar en crisis este modelo para construir al Estado de derecho.

1.1.2.1 El Estado Absolutista al Estado Constitucional

La historia de los Derechos Humanos está ligada al surgimiento de esta forma de gobierno. “El Estado constitucional surge como respuesta a los excesos del Estado absolutista que se consolida en Europa durante el siglo XV y al descontento de su población” (Perry, 2002, p. 11). En términos generales, la opresión que existió en esta época, era necesario un cambio en la forma de organización del poder y como representación de un nuevo sistema de relaciones entre gobernantes y gobernados.

El surgimiento del constitucionalismo moderno se debe al pensamiento de la Ilustración y al cambio de paradigma que dicho pensamiento introduce respecto al papel del Estado y al lugar de las personas dentro de la organización estatal. (Carbonell, 2005, p. 31) Es entonces que, el surgimiento del constitucionalismo se debe al pensamiento de la ilustración y al cambio que este originó respecto al papel del Estado y al lugar de las personas dentro de la organización estatal.

La defensa de la persona frente al Estado “se produce al inicio del constitucionalismo como en la forma de controlar el poder y con el fin de preservar la libertad” (Carbonell, 2005, p. 35). Para ello es necesario que cada Estado contemple una regulación básica y unitaria, como lo es una Constitución de manera escrita. “El tener un texto supremo de carácter escrito es una novedad histórica que aporta el siglo XVIII y que no existía durante el feudalismo” (Matteucci, 1998, p. 25). Debido a que, se regía por normas consuetudinarias, es decir aquellas leyes que establecían a través de la práctica constante.

1.1.2.2 Principales textos sobre la protección de los Derechos Humanos antes del constitucionalismo

Como precedente del Estado constitucional sobresalieron textos jurídicos que contemplaban los inicios de la protección de los Derechos Humanos. Entre los textos principales sobre la protección de estos Derechos, son el Cuerpo de Libertades de Massachusetts y la Petición del Derecho. Cabe resaltar que, esta regulación

1.1.2.2.1 La Petición del Derecho (1628)

En 1628 surge este documento, en la cual se enumeran una serie de derechos personales e individuales y de carácter patrimonial. Dicho instrumento plasma facultades en la legislación y por ende “crea un avance de gran importancia en el camino de cimentar la creación de los derechos humanos” (Amnistía Internacional, 2015). La Petición del Derecho, es producto de las continuas luchas entre la Corona, el rey Carlos I, y el Parlamento, por Sir Edward Coke líder de la resistencia del Parlamento. Se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y hace valer cuatro principios:

1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento.
2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada (reafirmación del derecho de habeas corpus, del latín, "que tengas el cuerpo", derecho que determinaba un plazo límite para resolver si se arresta a un detenido.
3. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos.
4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. (Petition of Rights, 1628)

El contenido de la petición presenta diversos aspectos, que pueden considerarse como originales dentro de la historia de los documentos de derechos fundamentales. En estos principios se mezclan distintos tipos de peticiones. En primer lugar la que tiene que ver con el papel del Parlamento en la aprobación de los impuestos. En segundo lugar, se incluyen aspectos relacionados con la seguridad y libertades personales.

1.1.2.2.2 Cuerpo de Libertades de Massachusetts (1641)

Es un texto que considera principios básicos de la organización moderna del Estado, como el principio de legalidad, el de no discriminación, la libertad de trabajo, la necesidad de indemnizar en caso de expropiación, el derecho a ser defendido por un abogado en una causa penal. Incluso el derecho de acceso a la información pública gubernamental. Cabe destacar que, la primera parte de este texto establecía el principio de legalidad y otros derechos al señalar que:

No se quitara la vida a ningún hombre, ni el honor en el buen nombre de un hombre será difamado; nadie será arrestado, reprimido, desterrado, desmembrado, ni castigado de cualquier forma; nadie será privado de su mujer o hijos; ni los bienes ni las propiedades de nadie serán confiscadas; ni se verá perjudicado de cualquier otro modo por la ley, o por actos de la Autoridad, a menos que sea así en virtud de alguna ley expresa del país autorizando a ello, aprobada por una General Court y suficientemente

publicada, o en caso de carencia de una ley para el caso concreto por la palabra de Dios. (Grau, 2009, p. 241)

De lo anterior, es preciso señalar que varios de los derechos antes mencionados se encuentran establecidos en las Constituciones y/o Declaraciones de hoy en día. Sin embargo, es relevante la protección por actos de Autoridades, así como la administración y procuración de justicia a todo hombre de manera universal.

1.1.2.3 Principales textos normativos de los Derechos Humanos en el marco constitucional

Durante el Estado Constitucional, se crearon diversos documentos jurídicos entre los cuales destacan la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos y la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Textos jurídicos que representan los inicios constitucionales de un Estado.

En este sentido, el estudio de estos ordenamientos simbolizan los ideales en el movimiento de la Revolución Francesa y en la constitución de los derechos fundamentales de los Estados Unidos. De igual manera, asentó las bases jurídicas en la protección y defensa de estos derechos.

1.1.2.3.1 La Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos (1789)

En 1789, el pueblo de Francia abolió la monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la primera República Francesa. “La Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos como el primer paso para escribir la constitución de la Republica de Francia” (Martínez Turcio & Burgos Fetzner, 2008, p. 16). Porque suponía que un nuevo orden político y social de normas generales y formales se transformaría en una organización vital en las relaciones sociales.

La Declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que “el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre, tiene sólo aquellos límites que aseguran a los demás

miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos” (Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos, 1789).

Por lo tanto, la Ley es como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir sólo acciones perjudiciales para la sociedad. Cabe mencionar que, esta Declaración solo garantizaba tres derechos referentes a la propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Debido al suceso de la revolución que se suscitaba en esa época, ya que eran los derechos que no se habían contemplado.

1.1.2.3.2 La Carta de Derechos de los Estados Unidos de Norte América (1791)

El título de este rubro se refiere a la Constitución nacional escrita más antigua en uso y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones, y los derechos básicos de los ciudadanos. “Las primeras diez enmiendas a la Constitución (la Carta de Derechos), entraron en vigor el 15 de diciembre de 1791” (National Archives, 2015). La cual limitó los poderes del gobierno federal de Estados Unidos y protegieron los derechos de todos los ciudadanos, residentes y visitantes en territorio estadounidense.

La Carta de Derechos protege la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, el derecho de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Entre las protecciones legales que brinda, la Declaración de Derechos le prohíbe al Congreso pasar ninguna ley respecto al establecimiento de religión y le prohíbe al gobierno federal privar a cualquier persona de la vida, libertad o propiedad sin el debido proceso legal.

En casos criminales federales se requiere de una acusación por un gran jurado, por cualquier delito capital, o crimen reprobable, garantiza un juicio público rápido con un jurado imparcial en el distrito en el cual ocurrió el crimen y prohíbe el doble enjuiciamiento. Esta Declaración establece los primeros precedentes de las garantías y principios del debido proceso. Como son la el acceso a los tribunales de justicia, a un juicio justo y público, y a la independencia e imparcialidad de los jueces, así como

al principio *non bis in ídem*, que significa que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hecho.

De lo anterior, esta Carta recoge un concepto clave en la historia de los derechos fundamentales: el debido proceso legal. De ahí que, han permitido a la Corte Suprema de Estados Unidos a desarrollar jurisprudencia de como tutelar este derecho. En México, este derecho tiene similitud con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, donde refiere a las formalidades esenciales del procedimiento, y en el primer párrafo del artículo 16, en cuanto prevé los requisitos que debe reunir un acto de autoridad para ser constitucionalmente válido.

1.1.3 Surgimiento del Sistema Universal de los Derechos Humanos

Como precedente del surgimiento del Sistema Universal de los Derechos Humanos tenemos la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto armado fue el causante de la creación de un sistema universal para la protección del ser humano. Debido a que, hubo una serie sucesos en la que la sociedad fue víctima de múltiples agresiones a sus derechos, la cual la comunidad internacional tuvo la necesidad de intervenir, creando así este sistema.

La Segunda Guerra Mundial se había librado violentamente de 1939 a 1945, y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas humeantes. Millones de personas murieron, millones más quedaron sin hogar o morían de hambre. Las fuerzas rusas se acercaban, rodeando los restos de la resistencia alemana en la bombardeada capital de Alemania, Berlín. En el Pacífico, los infantes de Marina de Estados Unidos todavía estaban luchando con las fuerzas japonesas atrincheradas en islas como Okinawa. (Erwin, 2004, p. 20)

En respuesta a la problemática anterior, en abril de 1945, delegados de cincuenta naciones se reunieron en San Francisco, con el objetivo de crear un organismo internacional denominado la Organización de las Naciones Unidas, con el fin de promover la paz y evitar guerras futuras. De igual manera, se procede a crear una serie de instrumentos con la finalidad de proteger los derechos de todas las personas, de ahí que deriva el término universal.

1.1.3.1 Declaración Universal de los Derechos Humanos

El Acta Constitutiva de la nueva organización de las Naciones Unidas entró en vigor el 24 de octubre de 1945. Los ideales de la organización se establecieron en el preámbulo al Acta Constitutiva que propusieron: “Nosotros, la gente de las Naciones Unidas, estamos decididos a proteger a las generaciones venideras del azote de la guerra, la cual dos veces en nuestra vida ha producido un sufrimiento incalculable a la humanidad”. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948)

La filosofía de los derechos humanos comenzó con la Ilustración, en el Contrato Social de Rousseau, en la que buscaba una forma de asociación, en la cual “cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes” (Rousseau, 1999, p. 21). Esta obra tuvo gran impacto en la sociedad, debido a que proyecta principalmente la libertad e igualdad de los hombres bajo un Estado instituido por medio de un contrato social.

Este contrato social describe la forma de gobierno actual del Estado mexicano en cuanto al ejercicio de la democracia y la soberanía que residía solo en el pueblo, lo que el autor denominaba voluntad general. Estos ideales ejercieron posteriormente una acción decisiva en la evolución del pensamiento político y moral, tal es el caso del movimiento de la Revolución Francesa en el que adoptó el lema de inspiración de Rousseau: Igualdad, Libertad y Fraternidad.

En este sentido, el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante Declaración Universal) de 1948 está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo.

Cabe mencionar que, el fascismo (en Italia) y nazismo (en Alemania) son ideologías y movimientos políticos que representaban la misma línea autoritaria con líderes de una ideología totalitaria, política excluyente y militarización de la sociedad. En este sentido, el pueblo y la raza fueron factores fundamentales, por el cual se rechazaban el pluralismo, cualquier consulta electoral era totalmente controlada. No concebían

un orden jurídico internacional y se pronunciaron contra las organizaciones internacionales, negando principios como el de la solución pacífica de controversias y la inviolabilidad de los tratados.

La Constitución de dicha carta fue hecha en un comité presidido por Eleanor Roosevelt (diplomática y defensora estadounidense por los derechos humanos así como primera dama del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt) y compuesto por miembros de 18 países. “La Carta fue redactada por el canadiense John Peters Humphrey y revisada luego por el francés René Cassin” (Pigrau Solé, 2009, p. 21). El texto final es pragmático, resultado de numerosos consensos políticos, de manera tal que pudiera ganar una amplia aprobación.

1.1.3.2 Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos

Los Pactos de Nueva York o Pactos Internacionales de Derechos Humanos son dos tratados internacionales sobre derechos humanos adoptados en por la Asamblea General de las Naciones Unidas. “El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El primero entró en vigor el 23 de marzo de 1976; el segundo, el 3 de enero de 1976” (Sepúlveda, 2006, p. 529).

Desde la aprobación de la Declaración Universal se estableció la necesidad de un tratado internacional que completase y diera un valor jurídico plenamente vinculante a los derechos reconocidos en ella. Enseguida la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emprendió la tarea de la elaboración del Pacto, que resultó sumamente ardua y complicada debido a la confrontación internacional de la Guerra Fría. (García Sanz & Acebal Monfort, 2009, p. 63)

Finalmente, ante tal conflicto, se enviaron dos instrumentos diferenciados, uno consagrado a los derechos civiles y políticos y otro a los derechos económicos, sociales y culturales, por consiguiente produjo indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Los proyectos de Pacto fueron presentados a la Asamblea General para el debate en 1954, no siendo aprobados hasta 1966 y entrarían en vigor en 1976, cuando fueron 35 Estados los que ratificaron o se adhirieron a cada uno de ellos. (García Sanz & Acebal Monfort, 2009, p. 64)

1.1.4 Surgimiento de los Sistemas Regionales de los Derechos Humanos

Los sistemas regionales surgen después de los mecanismos de protección establecidos en el sistema universal de los Derechos Humanos. Mediante el cual, estos sistemas desarrollaron una serie de instrumentos internacionales. Asimismo, se dividen en tres regiones, las cuales son: el sistema regional europeo, interamericano y africano. Todos ellos incluyen en su método de protección órganos judiciales específicos de carácter internacional. Además, cuentan con textos de alcance general así como convenios de estos mismos derechos en el ámbito regional.

1.1.4.1 Sistema Regional Europeo

Los conflictos políticos ocurridos en Europa Central y Europa del Este, a partir de 1989, y el impulso dado a la creación de un sistema económico unificado, han marcado el camino para un debate sobre la posibilidad de un sistema europeo unitario de derechos humanos.

Sin embargo, el Sistema Regional Europeo surge a través del Consejo de Europa, el cual fue creado en 1949 con el propósito de promover y proteger los Derechos Humanos y la democracia en Europa. Asimismo, en sus inicios de constitución, elaboró el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante CEDH).

Este convenio abierto en 1950 a la firma de 15 Estados que entonces componían el Consejo, es importante por tres razones principales:

- Los derechos y las libertades de cada persona son garantizados por los Estados signatarios (<<Estados Partes>>).
- Por primera vez, un tratado internacional sobre derechos humanos fue dotado de un mecanismo concreto de control de los derechos que garantiza.
- Los parlamentos y otros órganos legislativos o judiciales nacionales disponen así de una sólida referencia en materia de derechos humanos a la hora de elaborar o interpretar las leyes. (Taylor, 2009, pág. 180)

En un principio se crearon como órganos independientes la Comisión Europea de Derechos Humanos y un primer Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Con el objetivo de “proteger los derechos garantizados por el CEDH y resolver la acumulación creciente de casos” (Taylor, 2009, p. 181). De ahí que, en el año 1993, el Tribunal fuera el primero en constituirse.

Desde 1950, el CEDH ha sido modificado y completado 14 veces por otros tantos Protocolos Facultativos (Taylor, 2009, p. 181). Entre sus protocolos destacan la Carta Social Europea de 1961 con su protocolo adicional de 1988 y la Carta revisada en 1996, la cual garantizan una serie de derechos sociales fundamentales. En este mismo sentido, se adoptaron convenios como: el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura de 1987 y el Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales para el Consejo de Europa de 1995. Asimismo, se fundó en 1993 la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia.

1.1.4.2 Sistema Regional Interamericano

El sistema interamericano de protección de los Derechos Humanos se desarrolla en el marco de la Organización de los Estados Americanos (en adelante OEA). “En sus 60 años de funcionamiento, el sistema ha tenido numerosos logros en la promoción y defensa de los Derechos Humanos de la región” (Dulitzky, 2009, p. 194). La OEA desempeño un papel protagónico cuando en América Latina predominaban regímenes autoritarios, identificando y denunciando las graves y sistemáticas violaciones que ocurrían.

Su acción contribuyó a la apertura de espacios en la sociedad civil y creó un clima propicio para el regreso de la plena vigencia de las libertades públicas. El informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina en 1979 es uno de los ejemplos paradigmáticos del rol del sistema interamericano en esos años. (Dulitzky, 2009, p. 194)

Como principales instrumentos interamericanos de Derechos Humanos se encuentran: la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, los Protocolos Adicionales a la Convención Americana de 1988, la Convención

Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura de 1985, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas de 1996, entre otras.

Cabe señalar que, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre estableció el sistema inicial de protección que los Estados Americanos consideran adecuado a las actuales circunstancias sociales y jurídicas (Dulitzky, 2009, p. 195). Además que, es el primer acuerdo internacional sobre Derechos Humanos, anticipando la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

1.1.4.3 Sistema Regional Africano.

El sistema africano de Derechos Humanos es el sistema regional más reciente. En 1981, la Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la Organización de la Unidad Africana adoptó la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, que “es el documento guía del sistema y el cual se encuentra en vigor desde 1986” (Alcaide Fernández, 2009, p. 203).

El sistema africano gira en torno a la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981 (que se ha complementado con dos Protocolos, uno para el establecimiento de una Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1998, y otro sobre los derechos de las mujeres en África, de 2003) mantiene un impulso en la lucha por su legitimidad y efectividad en un contexto a menudo hostil (dictaduras, violaciones masivas de los Derechos Humanos, crisis económicas, etc.), donde la protección de los Derechos Humanos a duras penas concita el apoyo y la cooperación de los Estados y este sistema regional, como el universal, no es en sí una panacea. (Alcaide Fernández, 2009, p. 202)

La particularidad de la Carta Africana es su reconocimiento de los derechos colectivos. Dicho tratado considera que existe una estrecha interrelación entre los derechos individuales y los de los pueblos. Otras características distintivas son la inclusión del derecho al desarrollo y de obligaciones individuales, así como sus cláusulas limitantes las cuales restringen los derechos en un sentido amplio.

1.1.5 La Procuración de Justicia: El origen de la figura del Procurador

Como precedente de la procuración de justicia surge de la figura del procurador. Debido a las funciones y actividades que realizaba en diferentes épocas de la historia, principalmente en la Antigua Roma, durante el Feudalismo y en los reinos de España, ya que eran civilizaciones más estructuradas en cuanto a su sistema procesal.

1.1.5.1 Época Antigua: Roma

En esta época, dos figuras constituyen la representación procesal romana. El Cognitor era aquel representante del dominio en el proceso, mientras que el Procurator, tenía otros cometidos más amplios en lo que respecta a su actuación fuera del proceso, similar a lo se conoce hoy en día como la figura del ministerio público.

Además, el Procurator es un representante más evolucionado, posiblemente surgido durante la vigencia del procedimiento formulario, no requería para su nombramiento palabras solemnes, así como ni la presencia y conocimiento del adversario. Incluso puede darse el caso de que actúe de manera espontánea sin conocimiento del representado. (Virtudes González, 2005, pp. 42-48)

El Procurator tenía la función de administrador general o particular de patrimonios ajenos. Ambas figuras coincidieron en el tiempo si bien el Cognitor precedió al Procurator Romano. El primer Procurator fue el *Procurator Omnium bonorum*, es decir, el administrador de patrimonios ajenos. El agradecimiento y la confianza eran las claves esenciales para ocupar este puesto, debido a que era el que adoptaría las decisiones sobre la administración del patrimonio del señor. (Arranz Hernández, 2015)

1.1.5.2 Época Media: Feudalismo

En esta época se da el fenómeno de que la justicia sea impartida por el señor a su siervo. Sin embargo, la lucha burguesa logró que el derecho evolucionara por escrito, plasmándose en constituciones. De ahí que, se firmó la Carta Magna en el año 1215,

la cual estableció en el artículo 3º que: “Ningún hombre libre será prendido o hecho prisionero o desposeído o proscrito, o de cualquier modo destruido ni se le llevará a prisión, excepto tras un juicio legal de sus iguales y de acuerdo con las leyes del país” (Pacheco Gómez, 2000, p. 14). En este precepto, instituye la figura de la procuración de justicia. Sin embargo, en esa época quien ejercía esa procuración recaía en la persona que tenía el poder absoluto.

...es el príncipe territorial quien primordialmente ejerce las funciones de procurador de justicia; todos los siervos y los extranjeros que penetran a sus dominios están sometidos a su jurisdicción; el señor feudal debe garantizar la seguridad de los súbditos y proteger a quienes transitarán por su territorio, a él se le encomienda la salvaguarda de la paz pública. (Benítez Treviño, 1994, p. 35)

Como se menciona anteriormente, es el Príncipe quien ejerce la figura del procurador de justicia. En este sentido, es quien otorga seguridad a sus habitantes y extranjeros dentro de su territorio. También tenía el poder de imponer los derechos que debían tener, limitando así las atribuciones de las personas.

1.1.5.3 Época Moderna: Reinos de España

Durante la Edad Moderna “el Rey era la fuente de toda jurisdicción, y ésta era ejercida territorialmente a través de sus representantes: consejos, chancillerías y audiencias, corregidores, alcaldes, mayores y alcaldes ordinarios” (González Gilarraz, 1996, p. 20). Todos estos órganos conformaban la justicia ordinaria, la cual era potestad delegable por el Rey en favor de señores, obispos, priores, inquisidores y magistrados de los tribunales especiales y de personas aforadas, lo que permitía distinguir instancias judiciales.

En la base de la jerarquía judicial se situaban los alcaldes ordinarios, máxima autoridad de las villas que no eran cabeza de partido, con amplia libertad de actuación y prerrogativas. Los requisitos para poder ser alcalde eran de índole física e intelectual: no ser sordo, ciego, mudo, enfermo crónico, loco ni imbecil, pero nada se decía respecto a que supieran leer y escribir. (López Díaz, 2007, p. 14)

Por tanto, los alcaldes ordinarios, habitualmente iletrados, solían acudir a la asistencia de un asesor, el cual podía ser el alcalde mayor del partido o un procurador de la villa.

1.2 Surgimiento de los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia en México

La Procuración de Justicia en México nace a raíz de la conquista, en la época colonial, donde se vulneraron sus Derechos Humanos. De ahí que, la necesidad de establecer en un orden normativo, los derechos fundamentales y sobre todo garantizarlos. Los derechos humanos dentro del territorio nacional van a tener su formación u origen cuando se empieza a ver las condiciones tan drásticas que tenían los indígenas en dicha época, sobre todo en las llamadas Encomiendas.

Los indígenas estaban en situaciones caóticas, inhumanas, con múltiples limitaciones como el “no usar la misma vestimenta que los españoles, armas ni montar a caballo, aunque al momento de trabajar eran equiparados con los animales” (Herrera Ortiz , 1993, p. 14). Bajo esta situación era necesario exigir un trato digno así como el reconocimiento a sus derechos.

1.2.1 El origen de los Derechos Humanos en el sistema normativo mexicano

Antes de la independencia de México, en España, buscó constituir un Estado de Derecho, bajo la forma de monarquía constitucional. En la “Nueva España se conocieron y discutieron algunos de sus postulados, los cuales, con variantes, forman parte tanto de la Constitución de Cádiz, del 19 de marzo de 1812, jurada en la Nueva España el 30 de septiembre del mismo año” (González & Castañeda, 2011, pp. 13-14). Como resultado, surgieron diversos instrumentos jurídicos que marcaron la ruta para la actual Constitución.

1.2.1.1 Constitución de Apatzingán 1814

La Constitución de Apatzingán es la obra del Congreso de Chilpancingo. Está influida por el pensamiento político francés y por la Constitución española de Cádiz, pero “las aspiraciones que reflejaba fueron motivadas por la conciencia que sus autores tenían

de las profundas desigualdades sociales y económicas de la sociedad colonial” (Museo de las Constituciones, 2015).

En materia de Derechos Humanos, la Constitución de 1814 es el primer texto constitucional de México en incorporar una declaración de derechos humanos. Como ejemplo tenemos que en el artículo 4o. establece los derechos a: “la libertad, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen” (Bustamante, 1844, pp. 158). Sin embargo, restringe la libertad de manifestación de ideas y de prensa cuando la Constitución se atacada, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos.

1.2.1.2 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824

La Constitución de 1824 se estructura siguiendo la sistemática de la Constitución de Cádiz y establece un Estado Federal conforme a los principios constitucionales norteamericanos. El federalismo se adaptó a la realidad de “las provincias antes rebeldes. Pero también se reconoció la religión católica como de Estado y se mantuvieron los fueros militar y eclesiástico” (Museo de las Constituciones, 2015).

La Constitución se promulgó el 4 de octubre de 1824. En ella se establece que la “Nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y de cualquier otra potencia” (Bustamante, 1844, p. 77). Bajo este rubro, se buscó la libertad de la sociedad así como la separación con España, de ahí que se denominó como una Constitución Federal y no un solo Estado monárquico.

Además, que “la religión de la Nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra” (Bustamante, 1844, p. 77). Sin embargo, aún se limitaba el derecho a la libertad de creencias, debido a que, los conquistadores solo reconocían ese tipo de religión.

La Constitución de 1824 estableció un régimen de responsabilidades para reaccionar contra sus transgresores. Señalaba que “todo funcionario público, sin excepción de clase alguna, antes de tomar posesión de su destino, deberá prestar juramento de guardar esta Constitución y la Acta Constitutiva” (Bustamante, 1844, p. 85). Así como, “el Congreso dictará todas las leyes y decretos que crea conducentes, a fin de

que se haga efectiva la responsabilidad de los que quebranten esta Constitución o la Acta Constitutiva” (Bustamante, 1844, p. 86)

La Constitución federal de 1824 “no contiene un catálogo de derechos humanos sino siguiendo el sistema de Cádiz, los delega a los estados” (Museo de las Constituciones, 2015), consignando los básicos en la sección séptima del título V que establece las “Reglas a las que se sujetará en todos los estados y territorios de la federación la administración de justicia” (Bustamante, 1844, p. 94); en otras partes de la Constitución se encuentran dispersos otros derechos como limitaciones a los poderes legislativo y ejecutivo.

1.2.1.3 Las Siete Leyes Constitucionales de 1836

En este momento histórico, resulta determinante la figura de Antonio López de Santa Anna, “político cercano al pensamiento conservador, quien derogó la legislación anterior” (Presidentes.mx, 2015). Sin embargo, adoptó una estructura republicana y centralista, y promulgó las siete Leyes Constitucionales de 1836.

El sexto Congreso ordinario, convocado conforme a la Constitución de 1824, se encontraba atado a poderes limitados por el texto de aquella para iniciar el proceso de reforma constitucional, sobre todo por la inalterabilidad declarada de la forma de gobierno que preservaba el federalismo. Sin embargo, por presión de los centralistas extendió sus facultades, sin fundamento legal, para convertirse en Congreso Constituyente. Emitió así las llamadas Bases para la (sic) nueva Constitución que dan fin a la de 1824 y fundamentan la Constitución “dispersa”, fragmentada en “Siete Leyes Constitucionales” de 1836. (Museo de las Constituciones, 2015)

Durante las dos décadas siguientes, los constantes desórdenes, el lento desarrollo económico y los intentos de reforma liberal, motivaron que el Congreso expidiera las Siete Leyes Constitucionales de 1835 y 1836 que pusieron fin al sistema federal y establecieron el centralismo. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006, p. 7)

En la primera ley, integrada por quince artículos, se hace una completa declaración de derechos humanos. De ellos destacan los relacionados con el proceso judicial en

donde se completan como en aquella con limitaciones concretas al Legislativo y al Ejecutivo y reglas específicas de administración de justicia.

La segunda ley, que consta de veintitrés artículos, crea el Supremo Poder Conservador. Se le atribuyeron facultades como el “declarar la nulidad de los actos de cualquiera de los otros tres Poderes cuando fueran contrarios a la Constitución, suspender a los mismos si amenazaban la paz pública y ordenar al Presidente la remoción de sus ministros” (Museo de las Constituciones, 2015).

La tercera ley, que contiene cincuenta y ocho preceptos, deposita el Poder Legislativo en un Congreso integrado por dos Cámaras: la de diputados y la de senadores. “Para acceder a los cargos se establecen mínimos de propiedad y renta. La Cámara de diputados es electa; la de senadores se integra por los demás poderes” (Museo de las Constituciones, 2015).

La cuarta ley, con 34 artículos, estableció el Poder Ejecutivo presidencial, el cual dura ocho años en su cargo y puede ser reelecto. Es designado por los poderes establecidos. Tiene el veto suspensivo frente al Congreso. De igual manera, se constituyó el consejo de gobierno a través de los ministerios de interior, guerra y marina, relaciones exteriores y Hacienda.

La quinta ley, a través de sus 51 disposiciones, conforma el Poder Judicial con una Corte central y tribunales departamentales a semejanza de la última organización de las audiencias coloniales. “Establece previsiones sobre administración de justicia que son en realidad derechos humanos en los procesos” (Museo de las Constituciones, 2015). La sexta ley crea departamentos en lugar de los estados a cargo de gobernadores propuestos por las juntas departamentales.

Finalmente, la séptima ley se conformaba de 6 artículos, otorgando al Congreso la posibilidad de resolver las dudas que se suscitará en la interpretación de normas constitucionales así como sus reformas. Además, en seis años contados desde la publicación de la Constitución, no se podrá hacer alteración en ninguno de sus artículos.

1.2.1.4 Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857

La Constitución de 1857 reafirma decisiones políticas fundamentales de la Constitución Federal de 1824. Su originalidad reside, en la reforma de las relaciones Estado-Iglesia, así como en la construcción de un sistema de defensa de la Constitución. Para evitar el caudillismo que caracterizó la vida pública mexicana de las primeras décadas de vida independiente. Los “mecanismos de defensa ordinaria y extraordinaria de la Ley Fundamental se activaron exitosamente en las convulsiones militares que desgarraron a los mexicanos durante la Guerra de Reforma, la Intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano” (Museo de las Constituciones, 2015).

La Constitución de 1857, “refleja con claridad la filosofía política del liberalismo mexicano al reconocer los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos” (Museo de las Constituciones, 2015). La Ley Fundamental limita el ejercicio de los poderes públicos y reconoce la preeminencia del poder del Estado como organización de los ciudadanos sobre cualquier otra institución. Asimismo, se introduce en 1857, un complejo mecanismo de defensa extraordinario de la Constitución ante peligros de gran magnitud como invasiones de potencias extranjeras y golpes internos de Estado que implican el desconocimiento de la Ley Fundamental. (Museo de las Constituciones, 2015)

Este mecanismo consiste, por una parte, la posibilidad de la suspensión de los derechos individuales y el otorgamiento de poderes extraordinarios al presidente de la República, que en ambos casos deben ser aprobados por el Congreso de la Unión. Por otra parte, en la defensa militar del orden constitucional desde los Estados de la Federación, a través de la Guardia Nacional, que se organiza en cada uno de ellos bajo el mando de los gobernadores.

1.2.1.5 Leyes de Reforma de 1859

El presidente Benito Juárez expidió el paquete legislativo conocido como las Leyes de Reforma. Mediante el cual, se establecieron y fijaron los términos políticos y jurídicos de la relación entre Iglesia-Estado. Con el fin de crear un modelo de

organización social en la que la libertad sería el principal derecho garantizado por el Estado.

En medio del fragor de la guerra el gobierno de Juárez, desde Veracruz, dio a conocer un manifiesto a la Nación el 7 de julio de 1859. En éste delineó las medidas que consideraba indispensables para poner un término definitivo a esta guerra sangrienta y fratricida”, así como para “desarmar de una vez a esta clase (el clero) de los elementos que sirven de apoyo a su funesto dominio. (Museo de las Constituciones, 2015)

Este movimiento se caracterizó por la decisión política de separar las cuestiones del Estado y de la Iglesia. A partir de esto, surgieron las denominadas Leyes de Reforma: “La Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos, Ley de Matrimonio Civil, Ley Orgánica del Registro Civil o Ley sobre el Estado Civil de las Personas y la Ley sobre Libertad de Cultos” (Museo de las Constituciones, 2015). Estas leyes perfeccionaron las facultades que ya no tenían en su poder la iglesia.

1.2.1.6 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

El 5 de febrero de 1917 fue promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el presidente constitucionalista Venustiano Carranza, como consecuencia de los movimientos revolucionarios de 1910. Este documento continúa vigente, aunque a lo largo de la historia ha sido reformada en diversas ocasiones.

Esta Constitución logró hacer realidad grandes principios de justicia social, añadiéndoselos artículos 3º, 27, 123 y 130. En cuanto a lo político Carranza propuso reforzar el Poder Ejecutivo, suprimir la vicepresidencia, establecer la no reelección, dar mayor autonomía al Poder Judicial y mayor soberanía a los Estados creando municipios libres. Esta Constitución cambió los preceptos institucionales, su estructura social y económica, siendo considerada la primer Constitución liberal-social del mundo a principios del siglo XX. (Rabasa, 2000, p. 105)

Dicho ordenamiento constituye nuestra Ley Suprema y da fundamento a las leyes vigentes en nuestro país. Asimismo, dio origen al constitucionalismo social, que prevalece hasta nuestros días, el cual la ley fundamental de los pueblos no se limita

a establecer las bases de la organización política de los estados y a reconocer y proteger los derechos el hombre.

1.2.1.7 Reforma constitucional de 2011 en materia de Derechos Humanos

Hasta febrero de 2012 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución Mexicana) había sido “reformada por 201 decretos desde su promulgación en 1917, lo cual implicó realizar aproximadamente 600 reformas a sus actuales 136 artículos” (Pelayo Molle, 2012, p. 11). Dichas modificaciones se realizaron principalmente en materia económica, política, social, cultural, ambiental, administrativa, laboral, comunicación, hacendaria, energética, judicial, educativa y de transparencia en administración gubernamental. En consecuencia de las fuerzas políticas que se suscitaron en el Estado mexicano.

Dentro de estas reformas, en 2011 se publicó un total de ocho decretos por medio de los cuales se modificó la Carta Magna. Si bien, todas las modificaciones a la Constitución son relevantes, ciertas reformas poseen una mayor trascendencia sobre otras. (Brito & Carbonell, 2011, p. 40)

En México, había transitado hacia el último tercio del sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa; en esa fecha el gobierno mexicano había cumplido 12 años de haber aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su vez había firmado y ratificado la mayoría de los tratados de derechos humanos, tanto del sistema interamericano como del sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas. (Pelayo Molle, 2012, p. 13)

Cabe mencionar que, México tenía seis casos contenciosos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CoIDH), donde se le había sido declarado como responsable internacionalmente de violaciones a derechos humanos. Ante esto, el Estado mexicano ha reconocido la competencia de estos organismos interamericanos, así como las recomendaciones derivados de los casos en contención.

Los temas de “los Casos eran y siguen siendo especialmente sensibles: uno se relaciona con una situación de violencia estructural en contra de las mujeres en

Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro tienen que ver con violaciones a derechos humanos por parte del Ejército y la falta de idoneidad del fuero militar para conocer de esos asuntos; y uno más, el primero, es concerniente a la falta de recursos internos en materia electoral” (Pelayo Molle, 2012, p. 25). De lo anterior, es un claro ejemplo de recomendaciones dirigida específicamente a una Entidad Federativa.

En paralelo con lo que sucedía en el sistema interamericano, “a nivel nacional se habían llevado a cabo procesos de apertura constitucional y de debate en torno a la necesidad de incorporar a nivel de la Constitución los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales” (Caballero Ochoa, 2011, p. 108). En consecuencia, de las constantes violaciones a estos derechos y la necesidad de reconocerlos de manera constitucional.

Dentro de estos procesos, se ubica la creación de los organismos autónomos de protección a los derechos humanos, a partir de 1990, la reforma al Poder Judicial de 1994 y la creación del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, la relevancia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN), en materia de control de constitucionalidad a través de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales.

Igualmente, el que surgieran nuevas instituciones de garantía de los derechos, como el Instituto Federal Electoral, ahora denominado Instituto Nacional Electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

Este proceso de democratización, en parte promovido por estas instituciones y por la sociedad, “provocó que la intensidad y la atención sobre el tema de los derechos aumentaran y con ello también se incrementó el contexto de exigencia para que el Estado los protegiera de una manera más adecuada” (Córdova Vianello, 2011, p. 72). Al mismo tiempo, en la comunidad internacional se presentaban diversas denuncias violatorias a los Derechos Humanos en contra del Estado.

En este contexto de innegables avances, el número de denuncias por violaciones y por incumplimiento de los derechos fundamentales se multiplicó. Las vulneraciones en materia de derechos humanos que

habían aquejado a la sociedad mexicana, entre ellas el estado de marginación y discriminación en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos y comunidades indígenas; la violencia generalizada en contra de las mujeres; la práctica de la tortura en la procuración de justicia; y la práctica sistemática de la desaparición forzada en ciertos periodos de la historia nacional, empezaron a tener una mayor difusión y tratamiento no sólo a nivel internacional sino también nacional. (Córdova Vianello, 2011, p. 73)

En adición a lo anterior, la inseguridad ha tenido efectos perversos en la protección de los derechos. “En los últimos tiempos, la lucha en contra del narcotráfico ha marcado, en gran parte, el debate en torno a los derechos humanos en México cometidas tanto por autoridades como por particulares” (Córdova Vianello, 2011, p. 73). En la mayoría de los casos se detecta una situación de impunidad generalizada. Bajo estas circunstancias, surge la necesidad de respetar los derechos a nivel constitucional e internacional.

A partir de las situaciones descritas, “surge la necesidad de entender la primacía de los derechos consagrados constitucionalmente en conjunción con lo establecido en los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado” (Castilla Juárez, 2011, p. 124). Por ello que, la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011 modificó la denominación del Capítulo I, Título Primero, y 11 artículos: 1º; 3º; 11; 15; 18; 29; 33; 89; 97; 102, apartado B; y 105, fracción II, inciso G.

Esta reforma se ocupa de aspectos como el impulso del respeto a los derechos humanos por medio de la educación que imparte el Estado, el trato que deberá garantizárseles a las personas migrantes y extranjeras, a quienes se encuentren sujetos al sistema penitenciario, pasando por las reformas más acotadas y precisas en cuanto al procedimiento a seguir en materia de suspensión de derechos, principios sobre política exterior, la investigación de violaciones graves a derechos humanos, y los planteamientos de inconstitucionalidad por la vulneración de tales

derechos consagrados en los tratados internacionales. (Pelayo Molle, 2012, p. 16)

La reforma de 2011 determinó diversos aspectos entre los cuales destaca la promoción y defensa de los derechos humanos por parte de las autoridades del Estado mexicano. En cuestión del sistema penitenciario, se precisa los derechos en su procedimiento a seguir de todas aquellas personas en su proceso legal.

1.2.2 Antecedentes de la procuración de justicia en México

La procuración de justicia en México ha sido un tema en el que la sociedad ha exigido a sus gobernadores, tiene como antecedentes la época de la Nueva España. Sin embargo, existen precedentes en civilizaciones más antiguas, en la época prehispánica, Medina Limón, (2001) afirma:

En nuestro país la justicia siempre ha ocupado un lugar y un sentido dentro del sistema u orden jurídico, podemos recordar que en la época prehispánica, en lo que respecta a la cultura maya, existió un órgano conocido con el nombre Batab, que era el encargado de impartir justicia; en la cultura azteca se tuvo presente a la asamblea del barrio o consejo de ancianos, quienes conocían de la problemática de la comunidad y aplicaban su sabiduría al caso concreto con base a su derecho y costumbres. (p. 328)

Si bien es cierto, la justicia ha sido un punto importante en el sistema de gobierno, la procuración también era necesaria para la solución de problemas que existían en la comunidad. Sin embargo, en la época prehispánica no tuvo transcendencia debido a la conquista de México. De ahí que surge un nuevo sistema de impartición de justicia en la Nueva España.

1.2.2.1 La Procuración de Justicia en la Nueva España

Como consecuencia de la conquista de México, se transformó la cultura y con ello las leyes del pueblo conquistado. “Así fue como por primera vez en 1521 es fundado, por Hernán Cortés, el primer ayuntamiento peninsular, conocido como la Villa Rica de la Veracruz, la cual tenía se instauro el nuevo régimen en el que el jefe del ejército era

el jefe político” (Medina Limón, 2001, p. 328). Hernán Cortés emprendió la labor de transculturación, instaurando un régimen legal basado en las ordenanzas que provenían de España.

Es menester señalar que en 1527 en la real audiencia, que era el órgano político de gobierno de la Nueva España, se anunció la llegada de los primeros juristas a tierra conquistada, cuya función era implementar el sistema legal de impartición de justicia con base en las leyes del antiguo continente; entre dichos juristas quiero destacar el nombre de don Luis Marín, quien de manera directa había sido enviado a la Nueva España por la Corona a instaurar el orden jurídico que iba a sustituir al del pueblo conquistado. (Medina Limón, 2001, p. 328)

De ahí que, se presentan los inicios de un sistema normativo de impartición de justicia dentro de órgano de la estructura de gobierno, en ese entonces, de La Nueva España. Sin embargo, seguía teniendo el control quien tenía el poder político, y solo recaía en una persona.

1.2.2.2 La Procuración de justicia en el México Independiente

A consecuencia del movimiento independentista, se crearon documentos que consagrarían elementos de impartición de justicia. De igual manera, instituyeron órganos que tendrían la finalidad de procurar, administrar y dar solución a la problemática presentada. Tal como afirma Medina Limón, (2001):

En 1810, don Ignacio López Rayón da a conocer un documento conocido con el nombre de Elementos constitucionales, en el cual se consignó, en sus artículos 16 y 21, la creación del Poder Judicial como el órgano encargado de impartir justicia. No quiero pasar por alto la Constitución de Cádiz, ya que ésta fue el instrumento reivindicador de la clase criolla de la Nueva España. En dicha Constitución, jurada en España en 1812, se señaló en el título V, la creación de los tribunales en lo civil y en lo criminal. (p. 329)

Cabe señalar que, a raíz de los inicios de los movimientos independentistas, surgieron elementos constitucionales que se establecieron como artículos que hoy

en día en la constitución siguen. Asimismo, se creó un Poder Judicial, el cual tenía como responsabilidad el impartir justicia a través de los Tribunales en materia civil y criminal.

Es menester referirme al pensamiento de don José María Morelos y Pavón, que con sus Sentimientos de la Nación declara formalmente la independencia de la Nueva España respecto de la Corona española; además, en dicho documento se consagra, en su artículo 5o., la creación de los tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Sin duda alguna, este pensamiento es producto del movimiento de ilustración francés liberal. (Museo de las Constituciones, 2015)

Como precedente histórico, el documento Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón es pieza clave en la creación de las primeras disposiciones constitucionales. Debido a que, se establece la división de poderes en el sistema de gobierno, permitiendo una forma de gobierno democrático la cual ya no dependía de un poder absoluto.

Referente a la impartición de justicia, el 22 de octubre de 1814 se estableció el “Decreto constitucional para la libertad de la América mexicana señalaba en su capítulo II, artículo 44, la creación Del Supremo Tribunal de Justicia” (Medina Limón, 2001, p. 330). Esta instauración del órgano judicial, contribuía a un mejoramiento en el proceso así como el reconocimiento de los derechos de las personas ante una institución.

Consumado el movimiento de independencia con la firma del Tratado de Córdoba, en 1821, se empieza a gestar el nuevo Estado mexicano. “Hacia 1822 se implantó de nueva cuenta el sistema imperialista, y se emite el “Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano”, el cual ya contenía, en su sección V, capítulo I, la creación del Poder Judicial, contando con tribunales de primera y segunda instancia, creando el Supremo Tribunal de Justicia” (Medina Limón, 2001, p. 331).

Sin embargo, “tras arduas luchas intestinas se reinstala el Congreso Constituyente de 1822, con un pensamiento federalista que tuvo una influencia, sin duda alguna, de Estados Unidos, y es como en abril de 1824 se promulga la “Constitución de los

Estados Unidos Mexicanos”, llamada Constitución Federal” (Museo de las Constituciones, 2015). En ella se contenían el principio de división de poderes y consignaba al Poder Judicial, el cual recaía en los tribunales previamente establecidos por la Constitución mexicana, es decir, en la Corte Suprema de Justicia y la creación de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito.

Hacia 1836 se promulgan las “Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana” (Museo de las Constituciones, 2015), que consignaba, en su sección V, artículo 1, la creación del Poder Judicial y que éste lo asumiría la Corte Suprema de Justicia o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el Supremo Poder Conservador ejerció su potestad sobre el Poder Judicial.

En 1855 se convocó al congreso constituyente, donde se hicieron adiciones a la Constitución. Se enmarcó el Poder Judicial, creando así la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de distrito y de circuito. (Museo de las Constituciones, 2015)

La Suprema Corte se compondría de un procurador general, además de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios y un fiscal. Respecto al Procuración General, le correspondería a los tribunales de la federación conocer (Medina Limón, 2001, p. 332):

- a) De toda controversia que se suscitara sobre el cumplimiento y aplicación de las leyes federales.
- b) De las que versen sobre el derecho marítimo.
- c) De aquellas en que la federación fuere parte.
- d) De las que se susciten entre dos o más estados.
- e) De las que se susciten entre un estado y uno o más vecinos de otro.
- f) De las del orden civil o criminal que se susciten a consecuencia de los tratados celebrados con las potencias extranjeras.
- g) De los casos concernientes a los agentes diplomáticos y cónsules.

En dicho documento constitucional se hizo hincapié en que todos “los juicios se seguirían a petición de la parte agraviada, principio que rige al juicio de amparo, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico que determinase una ley” (Medina Limón, 2001, p. 332). Las sentencias que emitiesen dichos tribunales

federales sólo se ocuparían de los individuos particulares, limitándose a protegerlos y ampararlos.

En la Constitución de 1917, en su capítulo IV, consagró al Poder Judicial, encomendándole la impartición de justicia. Dicho Poder se auxilia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “en los tribunales colegiados en materia de amparo y unitarios en materia de apelación, y en juzgados de distrito” (Medina Limón, 2001, p. 333).

1.2.3 Antecedentes del Sistema Penal en México

Los precedentes del Sistema Penal en México radica en dos ejes principales: el Sistema Penal Inquisitivo Mixto y el Sistema Penal Acusatorio-Adversarial y Oral. Estos procesos jurisdiccionales se han realizado a consecuencia de las constantes violaciones al debido proceso que comprende la procuración de justicia. Es por ello que, se hará un breve análisis que dieron origen a estos sistemas penales.

1.2.3.1 Sistema Penal Inquisitivo

En la historia de México, después de la conquista del Imperio Azteca por los españoles, se adoptaron las primeras leyes de esta región. En este parámetro, imperaba el sistema de enjuiciamiento inquisitivo. “Tuvo vigencia en nuestro país en su expresión más radical con el Tribunal del Santo Oficio, mejor conocido como la Santa Inquisición” (Aguirre Beltrán, 1981, p. 320). En este sistema, la persecución penal pública de los delitos estaba a cargo del inquisidor, quien al mismo tiempo ejercía las funciones de acusar y defender.

Cabe señalar que, el último periodo de la historia de México donde imperó el sistema inquisitivo fue entre los años 1886 a 1917, con la “dictadura del General Porfirio Díaz Morí, y que feneció con el triunfo de la Revolución Mexicana y el surgimiento de la actual Constitución” (Cruz Barney, 2004, p. 156). Durante esta etapa, se desarrollaba un marco de proceso penal excesivamente formal, riguroso, discontinuo y secreto.

Al respecto, en este sistema penal la búsqueda de la verdad se justificaba en cualquier medio empleado. Permitiendo, prácticas de tortura crueles basado en la

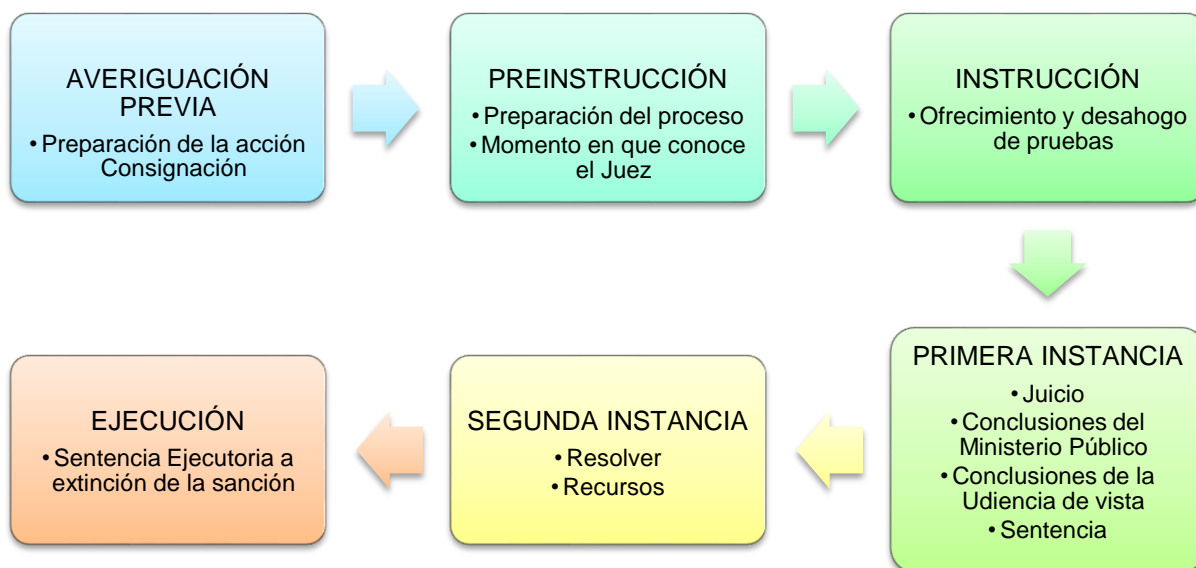
hipótesis de la culpabilidad del sujeto, a quien no se le reconocía el derecho a la defensa, pues si era culpable no merecía tal derecho y si era inocente no importaba.

1.2.3.2 Sistema Penal Mixto

Posteriormente, México continuó con un esquema de justicia inquisitivo mixto, es decir, con rasgos inquisitivos y acusatorios. En este sentido, “en el año de 1901, se crea en México la figura jurídica del Ministerio Público y de la Procuraduría General de Justicia, como un órgano autónomo dependiente del Poder Ejecutivo, delegándole la investigación y persecución de los delitos” (Fix Zamudio, 2004, p. 64). Al respecto, este cambio en el sistema penal es con el fin de dar oportunidad a los individuos a tener una defensa participativa que mediara las fuerzas públicas

Este sistema inquisitivo mixto entró en su apogeo con la aparición del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal el día diecisiete de septiembre de mil novecientos treinta y uno, segmentó el procedimiento penal en tres fases, una inicial, a la que se le llamo Averiguación Previa, la etapa de pre proceso o término constitucional y la de juicio; se crea la Institución del Ministerio Público como encargado de la investigación y persecución de los delitos detentando el monopolio del ejercicio de la acción penal. (Cruz Barney, 2004, p. 287)

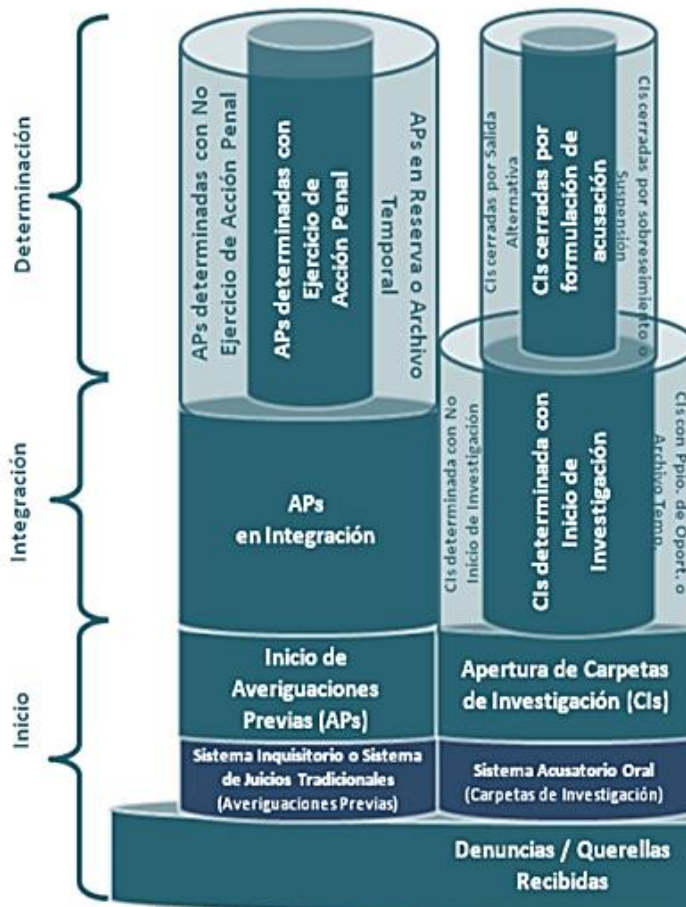
Si bien es cierto que, este sistema se le asignaba al Juez solo la función de juzgar. Con respecto a la persecución y averiguación de los delitos, quedaba exclusivamente a cargo del Ministerio Público. Esto con la finalidad de garantizar que los jueces no buscaran las pruebas y no tendrían así el ejercicio penal como un monopolio. En siguiente esquema, se expondrá el Sistema Penal Mixto (Inquisitivo-Acusatorio):



1.2.3.3 Sistema Penal Acusatorio-Adversarial y Oral

Desde el año 2008, se tiene aprobada por parte del Congreso de la Unión, la reforma penal (ver anexo 1) donde se cambia el Sistema Inquisitivo Mixto por un Sistema Penal Acusatorio-Adversarial y Oral. En este sentido, “la reforma al sistema de justicia penal en México, es una realidad, aunque muchas personas no estén muy de acuerdo con la misma. Policías investigadores peritos, agentes del ministerio público, jueces y abogados tienen un gran reto, frente a dicho sistema” (González Obregón, 2008, p. 25). Al respecto, el cambio principal es que, ahora los juicios serán predominante orales, dejando la cuestión escrita en una proporción menor respecto del sistema anterior. Tal como se muestra en el siguiente diagrama:

Etapas para caracterizar el proceso de Procuración de Justicia



(Instituto Nacional de Estadística y Geografía , 2011, p. 54)

El propósito de la reforma, es “regular el sistema procesal penal acusatorio en nuestro derecho mexicano, así como aplicar diversas modificaciones al sistema penitenciario y de seguridad pública” (Constantino Rivera, 2009, p. 44). Lo anterior, con el fin de dotar al Estado de elementos suficientes que permitan combatir, entre otros, la procuración de justicia en forma pronta, clara y expedita. Como principales disposiciones de esta reforma se indican las:

- Establecer un estándar de pruebas para librar una orden de aprehensión.
- Señalar un concepto constitucional de delincuencia organizada y las excepciones en su tratamiento procesal.
- Crear la figura y establecer las facultades de los jueces de control.
- Señalar mecanismos alternativos de solución de controversias.

- Precisar los requisitos para el auto de vinculación a proceso.
- Establecer las bases jurídicas para el sistema procesal acusatorio, fortaleciéndose los principios de presunción de inocencia, derechos de la víctima, cargas procesales, acción privativa.
- Fijar un régimen transitorio en lo que se legisla respecto del nuevo sistema. Procesal penal acusatoria en la Federación y las Entidades Federativas.

Cabe mencionar que, “el sistema procesal penal acusatorio se encuentra previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (González Obregón, 2008, p. 32). Asimismo, las reformas aprobadas en los artículos constitucionales antes mencionados, prevé su aplicación en un plazo de hasta ocho años para que, tanto la Federación como los Estados, expidan y establezcan las modificaciones u ordenamientos legales necesarios para poder estar en condiciones de incorporar este sistema procesal penal. En este sentido, las garantías que prevé este nuevo sistema penal son las siguientes:

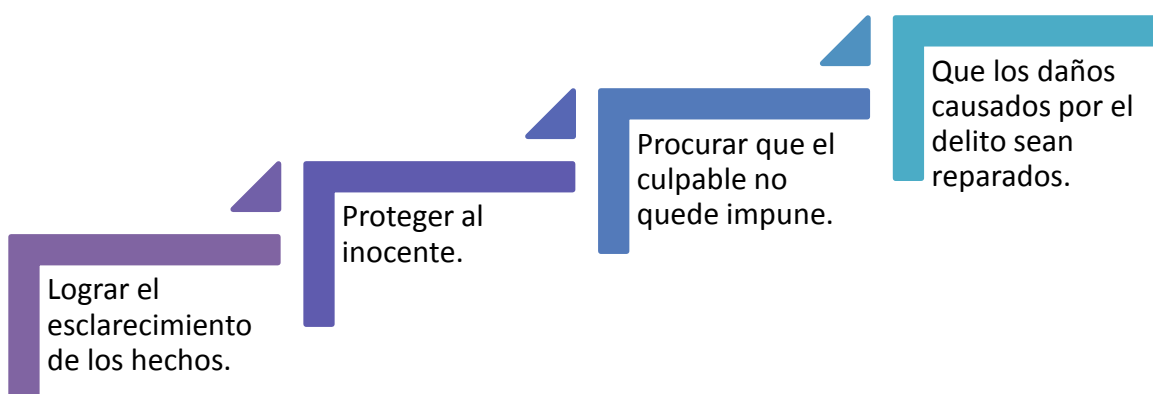
- En este sistema acusatorio no se dicta una sentencia condenatoria firme, permitiendo así la presunción de inocencia.
- Existe una defensa material y técnica, así como se procura en todo momento la legalidad en la obtención de la prueba, no pudiendo aceptarse de ninguna manera alguna prueba cuya fuente de obtención fue por medio de cualquier medio ilícito.
- El imputado es un sujeto de derechos, titular de garantías frente al Estado.
- La sentencia se fundamenta en las pruebas producidas en el juicio oral y público.
- Se garantiza la existencia de un tribunal imparcial al haber una separación en las facultades de investigar, acusar y juzgar; es imposible delegar funciones, toda resolución, audiencia y demás trámites obligatoriamente los tiene que hacer el juez.
- El imputado tiene acceso a las pruebas.
- La investigación constituye sólo una etapa y es preparatoria a juicio, la cual carece de valor probatorio y es informa.
- El procedimiento es predominantemente oral y existe libre valoración de la prueba.

- La finalidad del procedimiento es un instrumento de solución de conflictos y permite otras respuestas diferentes a las coercitivas, como las salidas alternativas, para lograr una respuesta adecuada que resulta más conveniente socialmente para las partes.
- La víctima se convierte en actor importante y tiene derecho a participar directamente en el proceso.

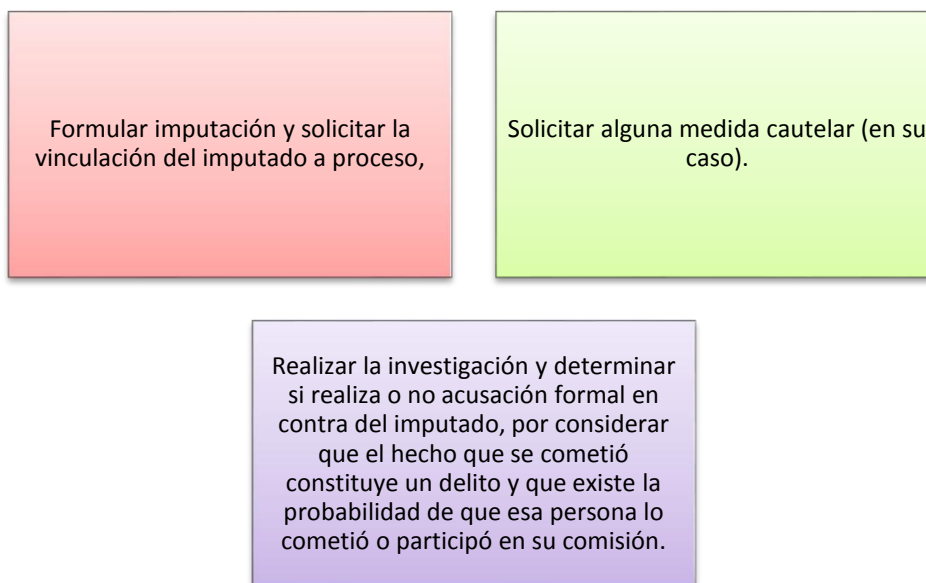
1.2.3.3.1 Figura del Ministerio Público en el nuevo Sistema Penal

En este nuevo sistema de justicia penal, la figura del Ministerio Público es una parte importante, debido a que tiene a su cargo la investigación de los delitos, quien hace coordinación con los elementos de la policía. Además, tiene el ejercicio de la acción penal. Lo anterior se establece en el artículo 21 constitucional.

De igual manera, el Ministerio Público debe estar enfocado a cumplir con los principios y fines del Proceso Penal Acusatorio, contemplados en el apartado A del artículo 20 Constitucional, que establece lo siguiente:



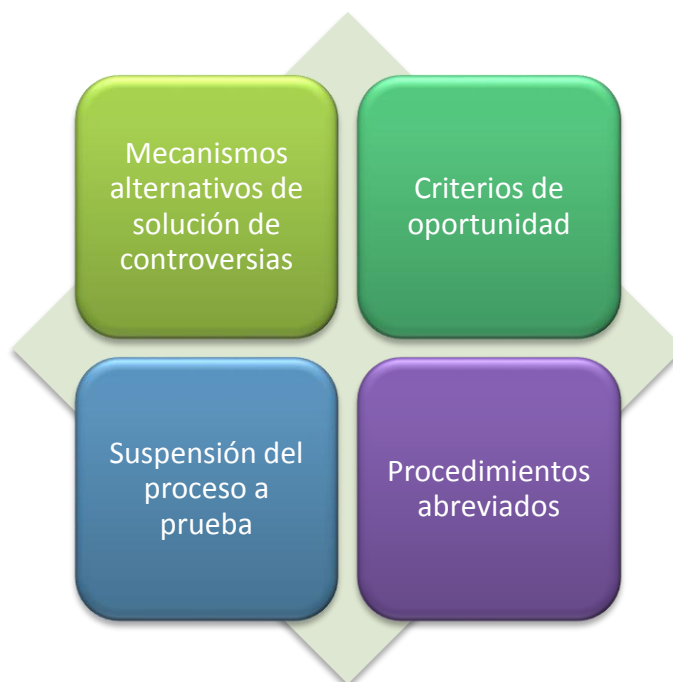
En la fase de investigación formalizada tiene la representación del Estado para:



El proceder del Ministerio Público en el nuevo sistema de justicia penal, se debe alinear con los principios de:



Deberá de utilizar todas las herramientas que el Sistema Penal Acusatorio-Adversarial y Oral contemplan para lograr los fines de este proceso, como son:



Las competencias y principios mencionados anteriormente, son trasladados al ámbito de la procuración de justicia, y en particular a la función ministerial, se traducen en una serie de capacidades que le permiten al Ministerio Público realizar un trabajo eficaz para producir los resultados deseados de esta Institución.

1.2.3.3.2 Breve análisis del papel del Policía en este Sistema Penal

En relación con el presente estudio, el papel que desempeñan los elementos de la policía, es fundamental, debido a que son ellos los primeros que actúan en la investigación del delito, y por ende son unos de los auxiliares en la procuración de justicia bajo este nuevo sistema penal.

Conforme al nuevo texto constitucional, cualquiera que sea la adscripción de un cuerpo policial, estos tienen la función de auxiliar al Ministerio Público en la práctica de sus investigaciones y en su caso al Tribunal. En el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo tercero se determina que se entenderá por Policía:

Los cuerpos de Policía especializados en la investigación de delitos del fuero federal o del fuero común, así como los cuerpos de seguridad pública de los fueros federal o común, que en el ámbito de sus respectivas

competencias actúan todo bajo el mando y la conducción del Ministerio Público para efectos de la investigación, en términos de lo que disponen la constitución, este Código y demás disposiciones aplicables. (Código Nacional de Procedimientos Penales, 2014)

Los cuerpos policiacos, como se observa, estará reglamentado por el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás acuerdos entre autoridades. Asimismo, el importante papel que realizan los elementos de seguridad, debido a que, son ellos los que arribaran primero al lugar de los hechos y tendrá contacto con los indicios.

La policía investigadora será la “entidad profesional y técnica que materialmente llevara a cabo la indagación de hecho bajo la dirección y vigilancia del Ministerio Público” (Maldonado Sánchez, 2009, p. 43). Todas las policías legítimamente creadas y existentes en México tendrán facultades y obligaciones, estas se encuentran previstas en el artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Básicamente son las siguientes:

Recibir denuncias	Realizar detenciones	Realizar actos de investigación
Preservar el lugar de los hechos	Emitir informes y documentos necesarios para la investigación	Ubicar, identificar y entrevistar testigos
Proporcionar atención a víctimas e informar sobre sus derechos	Proteger testigos	Cumplir con los mandatos del juez y ministerio público.

Al igual que el Ministerio Público, la actuación policial en la investigación de los delitos, necesita que los elementos de la policía tengan un estricto apego los principios de:



En este sentido, la actuación de los elementos policiales debe estar acorde a las garantías constitucionales que asisten a las persona detenidas en cualquier etapa del periodo de custodia. En el Código Nacional de Procedimiento Penales establece estos derechos, en su artículo 152.

- I. EL derecho a informar a alguien de su detención;
- II. El derecho a consultar en privado con su defensor;
- III. El derecho a recibir una notificación escrita que establezca los derechos establecidos en la fracciones anteriores y las medidas que debe tomar para la obtención de asesoría legal;
- IV. El derecho a ser colocado en una celda en condiciones dignas y con acceso a aseo personal;
- V. El derecho a no estar detenido desnudo o en prendas íntimas;
- VI. Cuando, para los fines de la investigación sea necesario que el detenido entregue su ropa, se le proveerán prendas de vestir, y

VII. El derecho a recibir atención clínica si padece una enfermedad física, se lesiona o parece estar sufriendo de un trastorno mental. (Código Nacional de Procedimientos Penales, 2014)

Cabe destacar que, los derechos de las personas detenidas antes citado, son las que mayor presenta violaciones. Por ende, genera una situación de vulnerabilidad en el sistema penal mexicano. Aunado a esto, el trabajo en equipo con el Ministerio Público así como las procuradurías, refuerzan el estado de derecho del proceso de la persona.

1.2.3.3.3 El Rol de los Peritos en el Nuevo Sistema Penal

Las pruebas periciales en un sistema penal son necesarias en las investigaciones del delito. El rol que desempeñan los peritos en este sistema son relevantes ya dictaminan la dirección que toma la investigación. En este parámetro, se definirá a estos entes:

Los peritos son personas que cuentan con una experiencia especial en un área del conocimiento, derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. Lo que distingue al perito de un testigo cualquiera es que el perito es llamado al juicio para declarar algo en lo que su experticia es un aporte para el mismo y que le permite dar opiniones y conclusiones relevantes acerca de diversas cosas. (Gómez Cotomer, 2008, p. 56)

Los peritos se caracterizan por tener conocimiento especializado, así como en valorar correctamente un hecho o circunstancia relevante del caso. También, comparecen en juicio para aportar dicha noción que se encuentra más allá de la comprensión del juzgador y que es considerado necesario para decidir el caso. Además, la experiencia que se le atribuye es lo que hace que las opiniones y conclusiones que él entregue en su dictamen sean admitidas.

1.2.3.3.4 La Actuación del Protocolo de Estambul en la Procuración de Justicia en México

El Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, mejor conocido como Protocolo de Estambul. Este instrumento fue “preparado por un grupo de expertos representantes de 40 organizaciones e instituciones, y presentado a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de 9 de agosto de 1999” (Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, 2016). En este sentido, los rasgos sobresalientes de este protocolo sirven como guía para documentar la tortura y reunir evidencias que permitan probarla en una investigación.

En el sistema penal mexicano, el Estado adopto y adecuo el Protocolo de Estambul para efectos de la valoración y diagnóstico de la tortura por medio del Acuerdo A/057/2003 del Procurador General de la República (ver anexo 3), con el objetivo de garantizar una procuración de justicia apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos, el cual establece:

...las directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. (Acuerdo A/057/2003 , 2003)

Cabe señalar que, este protocolo se podrá implementarse también en el ámbito local y en otros Estados. Cabe resaltar que, este instrumento no es de carácter obligatorio. Sin embargo, es una medida legal y administrativa para reforzar la prevención al saber que con su aplicación es posible contar con evidencia que le demuestre y en su caso se sancione.

1.3 Antecedentes de la desaparición forzada

La desaparición forzada ha sido utilizada como un método represivo por personas que han tenido cierto poder público en un Estado. La denominación a esta práctica surge en América Latina en los años setenta. Sin embargo, tiene precedentes en el crimen de Lesa Humanidad. Esta transgresión surge a raíz de un conflicto armado, conocido como la Segunda Guerra Mundial.

Posteriormente, el Sistema Universal de los Derechos Humanos junto con sus sistemas regionales, en específico el sistema interamericano, crean un conjunto de instrumentos jurídicos para protección a personas contra la desaparición forzada. Atendiendo así, a los casos que ya se manifestaban en Latinoamérica.

1.3.1 La desaparición forzada y su vinculación con el crimen de Lesa Humanidad

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, los líderes de la comunidad internacional asumieron conciencia de las graves violaciones de los Derechos Humanos que tuvieron lugar durante la contienda, principalmente contra la población civil. Asimismo, la necesidad de contar con instrumentos jurídicos que permitieran establecer responsabilidades por los crímenes internacionales.

De esta manera, por el Acuerdo de Londres de 1945, se creó un Tribunal Penal Militar Internacional de Núremberg (en adelante Tribunal de Núremberg). “Este tribunal reconoció tres categorías de crímenes internacionales, los crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad” (Lillian Goldman Law Library, 2015).

En el artículo 6, inciso c) del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg, se definían como delitos contra la humanidad aquellos por asesinato, exterminación, esclavitud, entre otros actos contra la humanidad cometidos de forma generalizada y sistemática contra civiles antes y durante la guerra.

Durante el desarrollo de los juicios y finalmente en las sentencias, el Tribunal de Núremberg “fue sentando importantes principios jurídicos que más tarde fueron ratificados por la Asamblea General de las Naciones Unidas y hoy forman parte del

Derecho Internacional de los Derechos Humanos” (Hormazábal Malarée, 2009, p. 121). Lo anterior, significa un derecho que regula la responsabilidad de los Estados por las violaciones de los Derechos Humanos, y aun derecho penal internacional para la persecución de las responsabilidades individuales de los autores de los delitos. Posteriormente, surge el término de desaparición forzada en América Latina.

La vinculación de la desaparición forzada con el crimen de Lesa Humanidad fue reconocida por la Resolución 666 (XIII-0/83) de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, de 1983. En esta resolución se describía que “la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad” (Organización de los Estados Americanos, 1983, p. 72).

1.3.2 Precedentes de la protección a personas contra la desaparición forzada

La desaparición forzada de personas es una de las violaciones a derechos humanos que mayor atención han atraído en el derecho internacional en los últimos años, debido a las adversas consecuencias que ocasiona a las víctimas y sus familiares. Al respecto, se han desarrollado complejos procesos de creación de normas e instituciones que han tenido como fin explicar este fenómeno.

La dinámica del derecho internacional de los derechos humanos ha llevado a que por medio de la interacción entre los sistemas de derechos humanos de Naciones Unidas (en adelante Sistema Universal) y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante Sistema Interamericano), se haya construido en poco tiempo nuevo paradigma jurídico en torno a esta problemática, que incluso ha llegado a impactar la forma de concebir al derecho penal en los niveles nacionales e internacionales.

1.3.2.1 Sistema Universal

Al momento en que los primeros instrumentos sobre derechos humanos fueron redactados y aprobados, la práctica de la desaparición forzada no había sido identificada como un crimen que impactara en la responsabilidad de la comunidad internacional.

Si bien, “durante la década de los años cincuenta las Naciones Unidas comenzó a reconocer las implicaciones legales y fatídicas de la desaparición forzada de personas respecto de los derechos de las personas” (Méndez & Vivanco, 1990, p. 512). No fue sino en los años setenta en que la comunidad internacional a través de la Asamblea General comenzó a analizar el problema de manera independiente de otras violaciones a los derechos humanos.

De lo anterior existe el antecedente a partir de las desapariciones forzadas ocurridas en Guatemala, Chile, Argentina y México (conocida como la guerra sucia) durante los años setentas, que fueron parte de una política gubernamental de represión extendida.

La primera iniciativa para acatar este problema fue impulsada por los Estados de Canadá y del Reino Unido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la asistencia del Secretario General de la Organización. Asimismo, se convirtió en la “Resolución 33/173, adoptada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1978” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1978, p. 166). Si bien, esta resolución no era un instrumento de carácter judicial, se convirtió en la primera condena política mundial a esta práctica.

La Resolución 33/173 convocó a los gobiernos a destinar los recursos necesarios para la búsqueda de personas desaparecidas, a la aplicación de la ley y al respecto a los derechos humanos de las personas. Además, caracterizó este crimen como una “situación continua de grave y flagrante violación a los derechos humanos” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979, p. 224). De ahí que esta resolución requiriera de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que abordara esta problemática, con el fin de realizar recomendaciones en este asunto.

Lo anterior, se observa dos importantes problemas a resolver; primero, la necesidad de definir qué actos debían ser considerados como desaparición forzada, y segundo, la determinación de los mecanismos del Comité. Como primer mecanismo temático creado fue la creación del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o

Involuntarias destinado a lidiar con este tipo específico de violación a los derechos humanos ocurrido a escala global.

Posteriormente, en 2001, con el fin de redactar un instrumento normativo vinculante en materia de desaparición forzada de personas, en el Sistema Universal se creó un Grupo Especial de Trabajo en el que participaron Estados miembros y observadores de organizaciones de la sociedad civil.

Dicho trabajo dio como resultado la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La cual adoptó “la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de diciembre de 2006, entrando en vigor el 23 de diciembre de 2010. México firmó esta Convención Internacional el 6 de febrero de 2007” (Naciones Unidas, 2015).

La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es un “instrumento internacional jurídicamente vinculante, que busca prevenir este fenómeno y reconocer el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, la verdad y a una reparación” (Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas , 2007).

Al respecto, este instrumento refleja un paso decisivo en la materia de Derechos Humanos que marca un punto importante en los esfuerzos iniciados por las Naciones Unidas para prevenir y condenar este delito. De igual manera, recopila en su texto, la discusión que se ha llevado en los últimos años a nivel internacional y nacional, complementando el corpus juris internacional en materia de desaparición forzada.

1.3.2.2 Sistema Interamericano

La práctica de la desaparición forzada ha extendido como un fenómeno sistemático y generalizado en muchos países de esta región. Como precedente de la protección a personas contra esta problemática en el sistema interamericano surge cuando comienza con la redacción de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

En 1987, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (en adelante OEA) requirió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en

adelante Comisión Interamericana o por sus siglas CIDH) que redactara como primer borrador de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. En este sentido, se solicitó en el Comisión Interamericana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1986-1987. La cual, la Comisión Interamericana produjo dicho boceto donde consulto con varias Organizaciones No Gubernamentales.

Posteriormente, “la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Consejo Permanente de la OEA estableció un grupo de Trabajo que paso varios años examinando el proyecto de la CIDH. En 1992, presenta una versión preliminar a la Asamblea General de la OEA” (Brody & González, 1997, p. 366). Cabe resaltar que, los trabajos, ideas y principios de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas han sido retomados en otros instrumentos internacionales, como es el Estatuto de Roma, que incluye este crimen en su artículo 7.

La influencia de la Comisión Interamericana ha sido un pilar para el mejoramiento de los estándares de derechos humanos y democracia en los países del continente. A la par de la CIDH, el sistema interamericano ha sido complementado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Como primer proceso contencioso decidido en la CoIDH fue el Caso Velásquez Rodríguez:

En Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró un patrón de violaciones procesales que incluyeron la desaparición de Manfredo Ángel Velásquez Rodríguez. Este patrón consistía en el secuestro de personas que eran usualmente consideradas peligrosas a raíz de sus actividades políticas, utilizando el ejército y la policía para conducirlos a centros de detención ilegales y clandestinos. Estas detenciones eran seguidas de la negación sistemática de cualquier conocimiento de la detención o del destino de las víctimas. (Caso Velasquez Rodríguez vs Honduras, 1988, p. 147)

En el Caso anterior, la Corte Interamericana determino que el Estado hondureño había violado de forma continua, en perjuicio de la víctima, los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto a la

Libertad personal, integridad personal, derecho a la vida y violando consecuentemente la obligación general de respetar los derechos.

Cabe mencionar que a partir de este Caso, la CoIDH determinó un marco probatorio de dos pasos en situaciones de desaparición forzada de personas. El primero está basado en los hechos, la cual es necesario demostrar la existencia de una práctica reiterada. En cuanto al segundo, sucede una vez que la existencia de esta práctica extendida ha sido demostrada, es necesario que la misma tenga correspondencia con el caso concreto para determinar si el proceso corresponde.

A partir del Caso Velásquez Rodríguez, la Corte Interamericana ha dictado sentencias condenatorias en diversos casos de desaparición forzada de personas. Cabe mencionar que, desde la entrada en vigor de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la jurisprudencia de la CoIDH se ha visto enriquecida.

1.3.2.3 Sistema Mexicano

La desaparición forzada de personas en México es una práctica que surgió en los décadas de los sesenta. Es a partir de aquí ha existido una grave violación a los derechos humanos. Entre 1969 y 1988 en el marco de la “lucha contrainsurgente que desplegó el Estado mexicano en contra de movimientos insurgentes y organizaciones sociales, período conocido como “Guerra Sucia”, se registraron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas por motivos políticos” (González H. , 2016).

Otra etapa donde se realizan desapariciones forzadas es en los años 1994 al 2000. A raíz de la aparición pública de movimientos sociales armados como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (1994) y el Ejército Popular Revolucionario (1996). Desde el 2006 México vive un contexto marcado por la política de seguridad impulsada por el gobierno federal, la cual se expresa en la llamada “guerra contra el narcotráfico” (Olivares Alonso, La Jornada, 2013).

Resultado de esta política de seguridad, tal como lo indican los diversos informes de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, es el incremento de la violencia estatal, la militarización, la paramilitarización y los ataques

en contra de defensores y defensoras de derechos humanos y de la población en general.

En el Informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su misión a México 18 al 31 de marzo de 2011, se menciona que “organizaciones de derechos humanos tenían documentadas hasta el 2010, alrededor de 3000 desapariciones forzadas en el país” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2012, p. 10).

Sin embargo, a partir las 2011 organizaciones de derechos humanos y organizaciones sociales comenzaron a mencionar que el “número de desapariciones forzadas podía ascender a 10 mil e incluso se ha llegado a hablar en el 2012 de hasta 30 mil desapariciones forzadas, sólo en el período del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012)” (Olivares Alonso, 2013).

Recientemente, la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Así como, los jóvenes desaparecidos en Tierra blanca, Veracruz. De estas evidencias, se sigue manifestando la falta de procuración de justicia en la omisión del debido proceso en la investigación de algún delito.

Respecto a los precedentes en la protección de la desaparición forzada de personas, el 27 de noviembre de 2001, el Presidente Vicente Fox decretó la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Hechos Probables Constitutivos de Delitos Federales Cometidos Directa o Indirectamente por Servidores Públicos en Contra de Personas Vinculadas con Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (en adelante Femosp).

La Femosp costó a los mexicanos 300 millones de pesos del erario público, reportando como resultado un “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana”, hoy disponible en línea solamente en el portal de The George Washington University. Además, ninguno de los servidores públicos señalados por la sociedad civil como responsables de los delitos de desaparición forzada cumplió sentencia en la cárcel. Luis Echeverría, ex presidente acusado de la muerte de entre ciento cincuenta y trescientas personas, recibió como único castigo la prisión domiciliaria. Por su parte,

personajes como Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, ex titulares de la DFS, murieron en libertad, aun cuando eran acusados de genocidio, homicidio y desaparición forzada. (Olivares Alonso, 2014)

La fiscalía representaba la oportunidad para que el Estado mexicano demostrara que el castigo a responsables de crímenes del pasado era parte de la transición democrática. Sin embargo, la intención de esta fiscalía era de impedir la intervención directa de la sociedad civil organizada para esclarecer los hechos del pasado.

Cabe resaltar que, como precedente de protección a personas de desaparición forzada, el Caso Radilla, donde el 23 de septiembre de 2009, la CoIDH condena al Estado mexicano por diversas violaciones graves de derechos humanos. Además, señala al “Ejército mexicano como responsable de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco” (Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, 2009, p. 82).

Este caso ha sido importante y trascendental en el ámbito jurídico del país, de ahí que se haya otorgado rango constitucional a los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales en los que México es parte. Asimismo, ha tomado las recomendaciones realizadas por la comunidad internacional en materia de Derechos Humanos. De ahí que lo conducente se haya adoptado en 2013 tanto en la Ley General de Víctimas como en la nueva Ley de Amparo. De igual manera, a través de estas leyes, el Estado garantiza el derecho a la verdad, justicia y reparación del daño.

Por otra parte, en el año 2012 se realizó la Jornada de Diálogo sobre la Efectividad de los Mecanismos de Búsqueda/Localización de Personas Desaparecidas en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el “Caso 12.791 Jesús Ángel Gutiérrez Olvera” (ver anexo 2), como seguimiento a los acuerdos establecidos en los casos en trámite ante la CIDH. En este dialogo, se destacó la impunidad del caso ante instancias federales y estatales, así como la violación a los derechos humanos de integridad, seguridad personal, libertad y dilación en la procuración de justicia.

De igual manera, se reiteró que la desaparición forzada es un acto que afecta de manera grave la esfera de derechos de las personas víctimas directas e indirectas. El

adecuado tratamiento de este tipo de violaciones implica la garantía y protección del Estado mexicano del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Debido que se trata de un acto continuo, y este únicamente cesa al momento de encontrar a la persona o sus restos y la sanción de los responsables de la violación de los Derechos Humanos.

En este contexto, en el año 2013 se emitió un informe en el marco del 149º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de la Desaparición Forzada de Personas en México. En este apartado, se determina la situación del Estado mexicano en el contexto de esta práctica entre los años 2006 al 2012. Además, establece la negligencia por parte de las autoridades en la procuración de justicia en estos casos.

1.4 El surgimiento de la prohibición de la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos

La práctica de la Tortura y otros tratos crueles e inhumanos ha existido desde civilizaciones antiguas a raíz de que el hombre descubrió que por medio del dolor y el sufrimiento de otros, podía conseguir ciertos beneficios. Dentro de los grandes desafíos en la comunidad internacional es la erradicación de la tortura en todas sus manifestaciones. Para las Naciones Unidas fue un reto asumido al poco tiempo de su fundación. De ahí que, como primer texto jurídico internacional que prohíbe esta acción se encontrase en su artículo 5 de la Declaración Universal.

1.4.1 Sistema Universal

Como se menciona anteriormente, la Declaración Universal fue uno de los primeros instrumentos legales de aplicación universal que garantizaban a todas las personas sobre la protección suficiente contra la tortura y los malos tratos. A partir de aquí, se crean diversos instrumentos jurídicos en la lucha contra la tortura, como es la Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Trato o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1975, el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de 1979 y la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas de 1987.

La Declaración sobre la Protección de Todas las Personas Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975, cuya finalidad fue “desarrollar el artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de y el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1975, p. 95). Debido a que en estos artículos proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.

Posteriormente, en 1979 se crea el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, en la cual en su artículo 5 dispone que ningún funcionario de esta naturaleza podrá infringir, instigar o tolerar actos de tortura. Esta ley fue aprobada por la resolución 34/169 de 17 de diciembre de 1979. Sin embargo, el alcance y obligatoriedad tanto de la Declaración como el Código era, hasta cierto punto limitada, debido a que requerían para su cumplimiento de la voluntad política de los Estados.

En el año 1984, se aprueba en la Asamblea General, la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas, en vigor el 27 de junio de 1987 (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1984, p. 212). Esta Convención se convirtió en el primer instrumento internacional vinculante exclusivamente dedicado a la lucha contra la tortura.

1.4.2 Sistema Interamericano

Como surgimiento de la protección contra la Tortura en el sistema interamericano se adoptó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Que tiene como precedente de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Esta Convención Interamericana fue adoptada en 1985 y entró en vigor el 28 de febrero de 1987. Al firmar la Convención, “los Estados acuerdan adoptar una legislación nacional que siga las directrices explicadas por este tratado, haciendo ilegal cualquier forma de tortura bajo cualquier circunstancia” (Secretaría de Asuntos

Jurídicos de la OEA, 1985, p. 49). De ahí que, esta Convención sea un instrumento vinculante y previniendo y castigando todo tipo de tortura y malos tratos.

1.4.3 Sistema Mexicano

La práctica de la tortura en México se ha presentado desde los inicios de la civilización mexicana, la cual se presentó en la época de la conquista durante la intervención de la religión a la comunidad indígena. Sin embargo, en el marco legal de protección de esta práctica se localiza en la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos.

El contenido que emana de la Carta Magna en las disposiciones aplicables en la materia; como la Ley General de Víctimas, la Ley Federal para la Prevención y Sanción de la Tortura, el Código Penal Federal (artículo 215 f XII y XIII), la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley de la Policía Federal, entre otras. (Meneses, 2013, pp. 3-4)

Ahora bien, derivado de los acuerdos internacionales sobre los derechos humanos, en específico en materia de tortura, que ha firmado el Estado mexicano está obligado a cumplir el contenido de todos y cada uno de esos tratados al ser suscritos. Asimismo, debe armonizar el contenido de su marco jurídico en apoyo a la erradicación de la tortura.

...ya que en su conjunto prohíben el uso de ella como método de investigación o de obtención de confesiones o informes, ello tomando en cuenta que la práctica de la tortura tiene mayor aplicación durante la detención de las personas y puesta a disposición del representante social. (Gudiño Pelayo, 1995, p. 20)

De tal forma que los mayores índices de tortura se producen en el contexto de la procuración de justicia. Debido a que le dan pleno valor probatorio a las confesiones con violencia, originando el encarcelamiento de personas inocentes o mediante procesos viciados. En este sentido, el 18 de junio de 2008 se publicaron en el Diario

Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad pública.

Es la propuesta de cambio más importante al sistema de justicia penal; prevista en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17 párrafo tercero, cuarto y sexto; 18,19, 20, 21 párrafo séptimo, 22, fracciones XXI y XXIII del apartado B del artículo 123, de la Constitución, cuya vigencia entrará en vigor en el año 2016, según lo establecido en el artículo segundo transitorio de las reformas citadas. (Meneses, 2013, p. 6)

Derivado de ello, el 5 de marzo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales cuyas disposiciones son de orden público y de observancia en toda la República Mexicana. El objetivo de este Código, es de “establecerse las normas a aplicarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de conductas ilícitas” (Olson, 2014). Es decir que, se deberá transformar la justicia y la forma en la cual se procesan los delitos en México.

Dentro de ese marco, se realiza la visita a México del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el periodo de abril a mayo de 2014. Donde expone en su informe que, la tortura es generalizada en el Estado mexicano, y se presenta desde la detención hasta la puesta a disposición ante la autoridad judicial, es decir, en la procuración de justicia.

También reconoce que, México transita actualmente en un periodo de importantes cambios constitucionales, legislativos, institucionales y de políticas públicas en lo relativo a los Derechos Humanos. Asimismo, la participación activa de las organizaciones no gubernamentales en la defensa de sus derechos.

1.5 Antecedentes de la Procuración de Justicia en las violaciones de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la CIDH

De acuerdo al Informe N° 80/03 de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos menciona que el día 1 de febrero de 1999 los CC. Cruz Ávila Mondragón y Misael Labra Domínguez fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de

Chihuahua, cuando presuntamente intentaban robar una escalera. Lo cual, los policías remitieron a las víctimas a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (en adelante PGJC), en donde fueron torturados y después solo dejaron en libertad al C. Misael Labra Domínguez. Mientras que Cruz Ávila Mondragón se encuentra desaparecido.

A pesar, de los recursos interpuestos por los familiares de la víctima, las autoridades de Chihuahua no realizaron las investigaciones y sanciones correspondientes. Debido que, el Estado mexicano argumenta en el Informe N° 80/03 que:

- Los C.C. Cruz Ávila Mondragón y Misael Labra Domínguez fueron enviados a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la PGJC, donde ambos presentaron una detención de 36 horas y no habiendo queja formal no se integró en una averiguación previa. Por lo que, ambas personas fueron puestas en libertad el día 3 de febrero 1999.
- El C. Misael Labra Domínguez incurre en múltiples contradicciones y omisiones en sus declaraciones, en afirmar que el salió el día 2 de febrero de 1999 y que regreso a preguntar por Cruz Ávila Mondragón. Además que, señala haber visto cuando golpeaban a su compañero. Por lo cual explica el Estado mexicano que esto no pudo ser posible, debido a que tenían que cumplir un arresto de 36 horas y que ambos estaban separados en celdas distintas.
- Sostiene que Labra Domínguez omitió indicar que tanto él como el señor Ávila Mondragón estaban intoxicados en el momento de su arresto, donde la encargada de examinar a los detenidos de la Dirección de Seguridad Pública de Chihuahua, informo que ambos no presentaban lesión alguna, pero se encontraban intoxicados con barbitúricos (sedantes), esto de acuerdo con el Comunicado enviado a la Comisión Interamericana el día 30 de agosto de 2000.

De lo anterior, el Estado mexicano no ha comprobado el registro de ingreso y salida de los C.C. Cruz Ávila Mondragón y Misael Labra Domínguez de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la PGJC. Debido que, el Estado mexicano

argumenta en el Informe 80/03 haber extraviado la papeleta de registro así como sus pertenencias, lo cual existe un procedimiento administrativo contra el funcionario responsable de la pérdida del registro correspondiente a las pertenencias del señor Ávila Mondragón.

Sin embargo, el 23 de febrero y el 20 de abril de 1999 presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua. Misma que constato en su recomendación de diciembre de 1999 las deficiencias de la indagatoria y su efecto negativo sobre el esclarecimiento de los hechos.

En cuanto a los recursos interpuestos, en el Informe 80/03 hace mención del comunicado enviado a la CIDH el día 16 de mayo del 2000, donde indica que el Estado mexicano no ofrece recurso alguno con la capacidad de resolver un caso de desaparición forzada como el de Cruz Ávila. Los peticionarios alegan que los mecanismos que podrían intentarse en este tipo de casos son el amparo y la denuncia penal. Por lo que los peticionarios realizaron este último en la PGJE de Chihuahua, donde inició una averiguación previa la cual no había producido ningún resultado hasta la fecha de presentación de la petición ante la CIDH.

Posteriormente, el 16 de mayo de 2000 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante por sus siglas CIDH), recibió una denuncia presentada por los representantes de la víctima: la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. "COSYDDHAC" y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional "CEJIL", en la cual se argumentaba la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Estado) por la privación arbitraria de libertad, tortura y desaparición forzada de Cruz Ávila Mondragón, hechos que habrían sucedido a partir del 1º de febrero de 1999. Los representantes imputan igualmente responsabilidad internacional al Estado Mexicano por la falta de investigación y sanción de los hechos denunciados.

De acuerdo a las constancias del expediente, durante el periodo transcurrido desde febrero de 1999 hasta la fecha de presentación de la denuncia ante la CIDH, los representantes hicieron varias gestiones para impulsar la investigación de dicho asunto. Asimismo, el 20 de julio de 1999 se presentó una solicitud de medidas

cautelares a la Comisión Interamericana para garantizar la vida e integridad física del señor Ávila Mondragón.

También en un comunicado del Estado mexicano a la Comisión Interamericana el día 18 de enero de 2002 menciona que las actuaciones de las autoridades ministeriales del Estado de Chihuahua dentro de la averiguación previa 11/99 se encuentra todas y cada una de ellas señaladas en autos, con el único fin de determinar la verdad histórica de los hechos, que es el objetivo y la obligación del Ministerio Público en la etapa de la averiguación previa.

Por otra parte, todo proceso legal en un órgano internacional deberá agotarse los recursos internos, es decir, en las instancias judiciales tanto estatales como federales. Sin embargo, ambas partes del presente caso coinciden en que estos recursos no han sido concluidos en México, esto conforme al artículo 46(1) de la Convención Americana.

Artículo 46

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá:

- a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos;
- b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva;
- c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y
- d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición.

De lo anterior, bajo este precepto no podría ser admisible el caso de estudio. Sin embargo, la misma norma jurídica prevé excepciones, la cual existe controversia

entre el Estado y los peticionarios respecto a la aplicabilidad de lo estipulado en el artículo 46(2) de la Convención antes citada, donde no se aplica la regla del agotamiento de los recursos internos.

Artículo 46

...2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:

- a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
- b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y
- c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

La CIDH estableció que a efectos de admisibilidad que se ha verificado un retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados. En consecuencia, la CIDH aplico la excepción al agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna prevista en el artículo 46(2) (c) de la Convención Americana.

Artículo 46

...2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando:

- ...c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

En el mismo tenor la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la invocación de las excepciones a la regla de agotamiento de los recursos internos previstas en el artículo 46(2) se encuentra estrechamente ligada a la determinación de posibles violaciones a ciertos derechos consagrados en la Convención

Americana, tales como el debido proceso y la protección judicial establecido en los artículos 8 y 25 de esta misma Convención.

Hasta la fecha de admisión del presente informe, no se tiene conocimiento que hubiera concluido el procedimiento en la jurisdicción interna. A criterio de la CIDH, con base en lo expuesto por los representantes, la petición fue presentada dentro de un plazo razonable en los términos del artículo 32(2) de su Reglamento.

Por consiguiente, el 22 de octubre de 2013 la CIDH declara admisible el presente caso en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos del señor Cruz Ávila Mondragón protegidos en los artículos 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana, en conexión con los artículos 1(1) y 2 de dicho instrumento internacional; así como de los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

El 28 de noviembre de 2008, los familiares de la víctima y los representantes de estas y el Estado mexicano suscribieron el Acuerdo de Solución Amistosa de conformidad con los artículos 48.1.f de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 41 del Reglamento de la CIDH. Donde se establece que la Comisión, en cualquier etapa del caso, se pondrá a disposición de las partes iniciar un proceso de diálogo que permita a los Estados y a las presuntas víctimas entrar en negociaciones con el fin de llegar a una solución.

En síntesis, los precedentes históricos sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos data en la época de las grandes civilizaciones donde los intentos de establecer las bases de estos derechos. No obstante, esta diligencia retoma después de los conflictos armados, donde se estableció el Sistema Universal de Derechos Humanos con sus sistemas regionales: Europeo, Africano e Interamericano. A todos ellos, se crean una serie de instrumentos que garantizan, protegen y promueven estos derechos, formando el corpus iuris internacional.

Lo anteriormente expuesto, se realizó el estudio de la procuración de justicia en México en el Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la CIDH, bajo los ejes temáticos de la Desaparición Forzada y Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes.

CAPÍTULO II

LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el presente capítulo se analizará los referentes teóricos de la procuración de justicia y los Derechos Humanos. Asimismo, se examinará la estructura del sistema interamericano y el nacional así como los instrumentos jurídicos. Posteriormente, se indagará en la procuración de justicia del Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón a través del marco jurídico Estatal, así como la Fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las Organizaciones Civiles. Además, se determinará las principales violaciones de Derechos Humanos del caso antes citado.

2.1 Marco conceptual

Es necesario delimitar el marco conceptual del problema de investigación. En este sentido, se analizarán las disposiciones generales entorno a dos temas: los Derechos Humanos y la Procuración de Justicia. Se creé que es importante desarrollar un breve análisis respecto a esto tópicos, debido a la situación actual al sistema de impartición de justicia en México.

2.1.1 Disposiciones Generales acerca de los Derechos Humanos

La noción de los Derechos Humanos se entiende en la protección de la dignidad de la persona frente al Estado. Si bien es cierto que, el poder público debe ejercerse al servicio del ser humano, no puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona. En la actualidad, la protección y defensa de estos derechos la procurado tanto el sistema universal con sus sistemas regionales, como el sistema mexicano. Con respecto al entendimiento estos derechos, se ha adoptado la definición establecida por la Organización de las Naciones Unidas, en la cual determina lo siguiente:

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.
(Oficina del Alto Comisionado, 2015)

En relación con la definición anterior, cuando se habla de los Derechos Humanos se entiende que son propios de la persona y que de ahí se desprenden una serie de características, como son la universalidad, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles e indivisibilidad. Cabe resaltar que, el reconocimiento y formalización en el derecho positivo es indispensable para su protección eficaz.

La defensa de los derechos humanos de ninguna manera es la defensa sólo aquello que el estado quiere conceder a la sociedad civil, sino que, por el contrario, los desposeídos ven sus necesidades como “derechos” que el estado está violando. Por tanto, los derechos humanos son precisamente lo contrario de lo que quiere el estado: son subversivos cuando se convierten en la reivindicación de mejores formas de vida.
(Correas, 2003, p. 107)

A lo anterior, el autor refiere que la defensa y protección de los Derechos Humanos está a cargo del Estado. Sin embargo, este no determina los derechos que el desee, sino que, se relacionan con lo que demande la sociedad y cree que es necesario en protegerlos. Como ya se mencionó en el capítulo anterior, estos derechos surgieron a partir de las atrocidades cometidas a la población en los conflictos armados, de ahí que se creara el Sistema Universal de los Derechos Humanos.

Es entonces que, las características de los Derechos Humanos se aplican a toda persona existente en el mundo (universalidad). Así como, no se pueden enajenar ni nadie puede ser despojado de ellos (inalienables). No se pueden renunciar ni transferir a otra persona (irrenunciables). También, no prescriben porque esta determinados para toda la vida humana (imprescriptibles). Finalmente, no se pueden dividir debido a que están interrelacionados, la negativa de algún derecho afecta el otro (indivisibles).

2.1.2 ¿Qué se entiende por Procuración de Justicia?

La procuración de justicia en el contexto actual es un reto frente a la sociedad, debido a que se ha presentado múltiples violaciones durante el proceso de investigación del delito por parte de servidores públicos, que son garantes en la procuración, administración y defensa de los Derechos Humanos. Esta procuración consiste en:

La procuración de justicia implica la tarea de asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas, y al no estar circunscrita únicamente al ámbito penal y a la persecución de delitos, en múltiples aspectos defiende los intereses de la sociedad y de los grupos sociales desprotegidos. (De Pina Vara, 2010, p. 168)

Es decir, existe la figura de un procurador, quien tiene la tutela, representación y reiteración en la acción cotidiana, en cuanto al compromiso indeclinable de actuar conforme a la ley, con lo cual obtiene el reconocimiento social que merece quien está al servicio de la justicia.

2.2 El sistema interamericano en la procuración de justicia en las violaciones de los Derechos Humanos

El sistema Interamericano está integrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos, cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA.

2.2.1 Organización de los Estados Americanos

En este apartado se estudiará la estructura, funciones y competencia la Organización de los Estados Americanos (en adelante la OEA). Destacando la participación del Estado Mexicano en esta organización así como la procuración en las violaciones de los Derechos Humanos.

Estructura

Los Estados americanos consagran en esta Carta la organización internacional que han desarrollado para lograr “un orden de paz y de justicia, fomentar su solidaridad, robustecer su colaboración y defender su soberanía, su integridad territorial y su independencia” (Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1949). La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes órganos:

Asamblea General

La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización de los Estados Americanos y está compuesta por las delegaciones de todos los Estados Miembros, quienes tienen derecho a hacerse representar y a emitir su voto. Tiene como atribuciones principales las que establece en el artículo 45 de la Carta de la OEA y son las siguientes:

- a) Decidir la acción y la política generales de la Organización, determinar la estructura y funciones de sus órganos y considerar cualquier asunto relativo a la convivencia de los Estados americanos;
- b) Dictar disposiciones para la coordinación de las actividades de los órganos, organismos y entidades de la Organización entre sí, y de estas actividades con las de las otras instituciones del sistema interamericano;
- c) Robustecer y armonizar la cooperación con las Naciones Unidas y sus organismos especializados;
- d) Propiciar la colaboración, especialmente en los campos económico, social y cultural, con otras organizaciones internacionales que persigan propósitos análogos a los de la Organización de los Estados Americanos;
- e) Aprobar el programa-presupuesto de la Organización y fijar las cuotas de los Estados miembros;
- f) Considerar los informes de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y las observaciones y recomendaciones que, con respecto a los informes que deben presentar los demás órganos y entidades, le eleve el Consejo

Permanente, de conformidad con lo establecido en el párrafo f) del artículo 91, así como los informes de cualquier órgano que la propia Asamblea General requiera;

g) Adoptar las normas generales que deben regir el funcionamiento de la Secretaría General, y

h) Aprobar su reglamento y, por dos tercios de los votos, su temario. La Asamblea General ejercerá sus atribuciones de acuerdo con lo dispuesto en la Carta y en otros tratados interamericanos. (Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1949)

Comité Jurídico Interamericano

El Comité Jurídico Interamericano es uno de los órganos por medio de los cuales la OEA realiza sus fines, esto de acuerdo en el Capítulo XIV de la Carta define su composición, atribuciones y funciones de la siguiente forma: “Sirve de cuerpo consultivo de la Organización en asuntos jurídicos; promueve el desarrollo progresivo y la codificación del derecho internacional; y estudia los problemas jurídicos referentes a la integración de los países para el desarrollo del Hemisferio” (Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1949).

Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los órganos del Sistema Interamericano, responsables de la promoción y protección de estos derechos. Además de, realizar investigaciones, proponer soluciones amistosas, elaborar y emitir recomendaciones. Cabe señalar que, el procedimiento internacional consta de dos etapas, la primera se realiza ante la Comisión y la segunda en la Corte IDH.

Secretaría General

La Secretaría General es el órgano central y permanente de la Organización de los Estados Americanos. Cabe mencionar que, un secretario general será elegido por la Asamblea General para un período de cinco años y no podrá ser reelegido más de una vez ni sucedido por una persona de la misma nacionalidad. Tiene la atribución de ejercer funciones que establece la Carta de la OEA, como las siguientes:

- Transmitir ex officio a los Estados miembros la convocatoria de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y de las Conferencias Especializadas;
- Asesorar a los otros órganos, según corresponda, en la preparación de los temarios y reglamentos;
- Preparar el proyecto de programa-presupuesto de la Organización, sobre la base de los programas adoptados por los consejos, organismos y entidades cuyos gastos deban ser incluidos en el programa-presupuesto y, previa consulta con esos consejos o sus comisiones permanentes, someterlo a la Comisión Preparatoria de la Asamblea General y después a la Asamblea misma;
- Proporcionar a la Asamblea General y a los demás órganos servicios permanentes y adecuados de secretaría y cumplir sus mandatos y encargos. Dentro de sus posibilidades, atender a las otras reuniones de la Organización;
- Custodiar los documentos y archivos de las Conferencias Interamericanas, de la Asamblea General, de las Reuniones de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, de los consejos y de las Conferencias Especializadas;
- Servir de depositaria de los tratados y acuerdos interamericanos, así como de los instrumentos de ratificación de los mismos;
- Presentar a la Asamblea General, en cada período ordinario de sesiones, un informe anual sobre las actividades y el estado financiero de la Organización, y
- Establecer relaciones de cooperación, de acuerdo con lo que resuelva la Asamblea General o los consejos, con los Organismos Especializados y otros organismos nacionales e internacionales.

Organismos Especializados

El Capítulo XVIII de la Carta de la OEA define los Organismos Especializados como “organismos gubernamentales establecidos por acuerdos multilaterales, con determinadas funciones en materias técnicas de interés común para los Estados americanos” (Carta de la Organización de los Estados Americanos, 1949).

Actualmente existe los siguientes organismos; Organización Panamericana de Salud, Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, Comisión Interamericana de Mujeres, Instituto Panamericano de Geografía e Historia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

2.2.2 Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

En este apartado se determinará la estructura, funciones y competencia de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Asimismo, se analizará el procedimiento, resoluciones, medidas cautelares y soluciones amistosas que surgen a través del proceso del Caso ante la CIDH.

2.2.2.1 Estructura

La Comisión se integra por siete miembros independientes que deben ser personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de derechos humanos. Son elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. Los Miembros de la Comisión o comisionados son elegidos por cuatro años y sólo pueden ser reelegidos una vez.

La directiva de la CIDH está compuesta por un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, quienes deben cumplir las funciones señaladas en el Reglamento de la CIDH. Por su parte, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH está compuesta por un secretario ejecutivo y por lo menos un secretario ejecutivo adjunto, y por el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el cumplimiento de las instrucciones de la directiva de la CIDH o del presidente.

2.2.2.2 Funciones

De acuerdo con la Convención Americana, la CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos. Por ello que en el artículo 41 de Convención expone las funciones y atribuciones de la CIDH, de las cuales cabe destacar las siguientes:

- Estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América.

- Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos.
- Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de sus funciones.
- Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos.

2.2.2.3 Competencia

Dentro de su mandato la CIDH está autorizada a recibir y tramitar comunicaciones individuales, preparar informes sobre países, y llevar a cabo visitas in loco (se refiere aquellas visitas para observar la situación general de los derechos humanos en un país, o para investigar una situación particular). A pesar de lo anterior, las quejas o peticiones individuales son la función de mayor impacto.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 44 de la Convención Americana y el artículo 23 del Reglamento de la CIDH, cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la OEA, puede presentar ante la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos por parte de un Estado miembro de la OEA.

En el artículo 45 de la Convención Americana se señala que todo Estado parte puede reconocer la competencia de la Comisión para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la Convención. Asimismo, en el artículo 46 se exponen los requisitos para la admisión de una petición y en el artículo 47 los criterios para declarar una petición inadmisibile.

2.2.2.4 Procedimiento

La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los derechos que se consagran en los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos, procederá conforme a lo establecido en el artículo 30 de su Reglamento.

Una vez admitida una petición, la CIDH con base en el artículo 38 de su Reglamento solicitará al Estado información al respecto, misma que deberá enviar dentro de un plazo de dos meses (con posibilidad de prórroga al considerarse las circunstancias de cada caso).

Después verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación; posteriormente la CIDH analizará el asunto planteado, para lo que podrá pedir mayor información al Estado de considerarlo pertinente y en caso de considerarlo oportuno, propondrá que se llegue a una solución amistosa.

De no llegarse a una solución, y dentro del plazo fijado por el Reglamento de la Comisión, ésta redactará un informe preliminar en el que expondrá los hechos y sus conclusiones. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas.

2.2.2.5 Resoluciones

La CIDH podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, un informe definitivo sobre la cuestión sometida a su consideración. Siempre y cuando si el asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la CIDH por la Comisión o por el Estado interesado. Al emitir la resolución, la Comisión formula recomendaciones pertinentes y fija un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para cumplir con dichas recomendaciones.

Transcurrido el periodo fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. Sin embargo, se ha discutido sobre el carácter de obligatoriedad de las recomendaciones para el Estado que las recibe. En este punto, la diferencia entre

una recomendación emitida por un órgano no jurisdiccional (CIDH) y una sentencia por un órgano jurisdiccional (Corte IDH), radica en que la primera carezca de fuerza jurídica. No obstante, las funciones de la Comisión así como los informes y recomendaciones que emite son de gran valor y necesarios para que el Estado las tome en cuenta.

2.2.2.6 Medidas cautelares

En caso de gravedad y urgencia, como estar en peligro la vida, la integridad personal, la salud o cualquier derecho de los establecidos en los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos, consideradas “situaciones de emergencia”, la CIDH, a petición de cualquier persona o entidad de la sociedad civil o motu proprio, tiene la facultad de pedir a cualquier Estado miembro de la OEA la adopción de “medidas cautelares” a fin de evitar daños irreparables a las personas que se encuentren bajo su jurisdicción.

La solicitud deberá ser enviada a la sede de la CIDH (Washington, D.C.) por cualquier medio, incluyendo correo electrónico, telegrama o fax. Una vez recibida la solicitud, la CIDH la estudiará y decidirá si existen argumentos suficientes para otorgar las medidas cautelares o no. (El artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece lo referente a las medidas cautelares).

2.2.2.7 Soluciones amistosas

Mediante el sistema de peticiones individuales se establece un procedimiento cuya finalidad es determinar la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los derechos humanos. También prevé la posibilidad de que en cualquier etapa del examen de una petición o caso sea posible llegar a una solución amistosa del asunto, fundada en el respeto a los derechos humanos establecidos en el artículo 48.1.f) de la Convención Americana y el artículo 40 del Reglamento de la Comisión.

Es de resaltar que, si esta solución no constituye una decisión sobre el fondo del asunto planteado ante la Comisión, el acuerdo de carácter voluntario al que lleguen las partes puede incluir la aceptación y el reconocimiento público de responsabilidad

por parte del Estado. Asimismo, permite generar espacios de diálogo, donde estos pueden alcanzar acuerdos que establecen medidas de reparación beneficiosas para las presuntas víctimas de la situación denunciada y muchas veces la sociedad en su conjunto.

Por otra parte, para el Estado, el arreglo amistoso permite concluir la controversia, demostrar su compromiso de respeto y garantía de los derechos humanos y el cumplimiento de buena fe de las obligaciones asumidas en la Convención Americana y otros instrumentos regionales de protección de los derechos humanos.

En adición a lo anterior, cabe resaltar que la efectividad del mecanismo de solución amistosa reposa de manera principal en dos pilares fundamentales: la voluntad de las partes de llegar a una solución amistosa del asunto y el cumplimiento de las medidas de reparación que contempla el acuerdo de solución amistosa, las cuales deben garantizar el respeto de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos regionales.

2.3 Procuración de justicia en México

En este parámetro, se delimitará el marco jurídico constitucional respecto la procuración de justicia en materia de los Derechos Humanos en donde se determinará los elementos constitucionales en protección de estos derechos así como los artículos constitucionales relacionados a la temática de estudio.

2.3.1 Marco jurídico constitucional de la procuración de justicia en materia de los Derechos Humanos

El marco jurídico constitucional en la procuración de justicia en materia de Derechos Humanos se desglosará a través de los elementos constitucionales como son el Bloque constitucional, control de convencionalidad, parámetro de control de regulación constitucional, la interpretación conforme y el principio pro persona. Además, se analizarán los artículos 16 al 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados a la temática.

2.3.2 Elementos constitucionales en protección a los Derechos Humanos

La Constitución es entendida cómo el eje regulador de un Estado de derecho, cuya finalidad será garantizar a todas las personas por igual sus derechos. Sin embargo, también deben de existir los medios idóneos para garantizar la defensa de la Constitución para conservar la normativa; prevenir su violación, y conservar el orden jurídico.

Para la efectiva protección de los derechos humanos y garantías individuales algunos países de Latinoamérica han incluido en sus Constituciones ciertos elementos como es el bloque constitucional, el control de convencionalidad de acuerdo al artículo 133, el parámetro de control de regulación constitucional, así como la interpretación conforme y el principio pro persona.

2.3.2.1 Bloque constitucional

La reforma constitucional en materia de derechos humanos que entró en vigor en junio de 2011 colocó en el centro de la actuación del Estado mexicano la protección y garantía de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por éste.

Por ello, se trata de una reforma que impacta de manera sustantiva en la labor de todas las autoridades del país, toda vez que deben hacer efectiva la aplicación de la totalidad de las obligaciones reconocidas constitucionalmente. En relación al Bloque Constitucional, Muñoz (2011) manifiesta que:

El Bloque de Constitucionalidad implica incorporar un parámetro de control constitucional, con normas y principios que no están contemplados directa o formalmente en la Constitución, pero que de conformidad con la propia Carta Magna, deben ser considerados con grado constitucional para el control de actos y leyes. El concepto entonces cobra trascendencia, para ampliar la esfera de derechos a ser protegidos por nuestros tribunales, a través de los diversos medios de control constitucional, específicamente, los controles jurisdiccionales de la Constitución. (p.12)

Entendido lo anterior como aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros del control de constitucionalidad. Es por ello que, su finalidad es la añadir otras fuentes jurídicas del derecho constitucional como es la jurisprudencia, costumbre, tratados internacionales, etc., que ofrezcan un marco más amplio de interpretación. En este sentido, es necesario delimitar las funciones del bloque de constitucional: formal, sustancial y hermenéutica.

Contrario a lo sostenido ---o no aceptado---por la SCJN, el artículo 1º constitucional permite concluir que en México existe un *bloque de constitucionalidad*... Ahora bien, asumir esto implica sostener que las normas de derechos humanos reconocidas en el artículo 10. constitucional: i) gozan de jerarquía constitucional por remisión expresa del propio texto constitucional en el primer párrafo de al artículo 10.; ii) forman parte del parámetro de control de regularidad, validez o constitucionalidad en sentido amplio, según se desprende de la interpretación integral del texto constitucional, y iii) constituyen normas jurídicas relevantes para resolver conflictos constitucionales, según la dimensión hermenéutica reconocida en el segundo párrafo del artículo 10. constitucional. (Guerrero Zazueta, 2015, pp. 170-171)

De lo anterior, expone el autor las tres funciones del bloque de constitucionalidad, donde la función formal refiere a que una norma internacional en su proceso de incorporación al derecho nacional, es inferior a la norma constitucional, pero una vez integrada al sistema jurídico respectivo, adquiere para ciertos efectos rango constitucional.

Por otra parte, la función sustancial es la nota característica del bloque que de constitucionalidad es su identificación con el parámetro de control de regularidad constitucional. Es decir que, la Constitución, tratados internacionales y leyes federales integran este bloque, asimismo están dotadas del mismo rango. De igual manera, los criterios jurisprudenciales como parte de este bloque, se analiza la

resolución del expediente Varios 912/2010, mejor conocido como Caso Radilla, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que:

31. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los jueces del país, se integra de la manera siguiente:

- Todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1º y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación;
- Todos los derechos humanos contenidos en Tratados Internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.
- Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecidos en las sentencias en las que el Estado mexicano haya sido parte, y criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado mexicano no haya sido parte. (Varios 912/2010, 2010, p. 33)

Esto permite concluir que la SCJN considera que el bloque de constitucionalidad comprende las interpretaciones de los textos contenidos en criterios jurisprudenciales, ya sean emitidas por el Poder judicial de la Federación o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Igualmente, se refuerza con lo resuelto en la contradicción de Tesis 293/2011:

...la jurisprudencia interamericana se integra en un sistema de precedentes, según el cual todos los criterios interpretativos contenidos en una resolución dictada por la Corte Interamericana con motivo de un asunto de naturaleza contenciosa gozan de fuerza vinculante, sin necesidad de que se siga un procedimiento formal distinto. En este sentido, cada pronunciamiento del tribunal interamericano se integra a la doctrina jurisprudencial interamericana, cuya fuerza vinculante debe entenderse en clave de progresividad, es decir, como un estándar mínimo que debe ser recibido por los Estados que hayan reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana para ser aplicados directamente, en forma armónica con la jurisprudencia nacional, o para ser

desarrollados o ampliados mediante jurisprudencia que resulte más favorecedora para las personas. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, p. 56)

De lo anterior, se reconoce el valor de la jurisprudencia como una auténtica fuente normativa, diferente a los enunciados que se aplican para resolver un asunto. De igual manera, el carácter vinculante de esta emitida por la Corte IDH. Con independencia de la participación del Estado mexicano en el litigio que haya dado origen a los precedentes.

Con respecto a la función hermenéutica del bloque de constitucionalidad, se utilizan como criterios relevantes para la solución de conflictos constitucionales. Pues las normas de este bloque no se encuentran jerarquizadas entre sí, de modo que los eventuales diferencias que surjan entre ellas deberá resolverse mediante técnicas como la ponderación.

2.3.2.2 Control de convencionalidad (artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

La Reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 tiene como principal objetivo la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, con todo lo que ello supone: recepción de los tratados e incorporación de los mismos al derecho interno con rango constitucional. También el reconocimiento del derecho derivado de los propios tratados y de la jurisprudencia de las jurisdicciones internacionales que han sido reconocidas por el Estado mexicano, entre otras muchas cuestiones. La firma de un tratado significa que el Estado parte asume una serie de obligaciones, como lo señala Hitters, (2009) siguientes:

- Derogación de normas que se opongan a lo que dispone el tratado, la cual refiere a la armonización del sistema jurídico interno respecto al internacional.
- Realización de un diagnóstico respecto de los derechos regulados por los tratados internacionales, a fin de determinar con la mayor precisión posible en qué punto se encuentra el país al momento de firmar el tratado.

- Reorganización de las competencias de las autoridades para que en todos los niveles de gobierno existan medidas de prevención de violaciones de derechos. Asimismo, la capacidad de investigación, sanción y reparación de tales violaciones cuando se hayan producido.

Básicamente, el control de convencionalidad es consecuencia directa del deber de los Estados de tomar las medidas que sean necesarias para que los tratados internacionales que han firmado se apliquen adecuadamente. Es por ello que, este control representa un mecanismo procesal orientado a la revisión de la validez material de una norma de derecho interno, frente a un parámetro de regularidad convencional establecido en estos tratados y fuentes jurídicas que desarrollan su contenido y alcance.

2.3.2.3 Interpretación conforme

La reforma al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha introducido formalmente en el texto constitucional lo que se conoce como interpretación conforme. El segundo párrafo de dicho artículo establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

La interpretación conforme es la actividad que consiste en buscar explicaciones de varios textos, por lo menos de dos, que sean compatibles entre sí. En otras palabras, su objetivo consiste en identificar una o más interpretaciones conformes como resultado de dicha acción. Para Konrad Hesse es:

La idea que subyace en la interpretación conforme se basa en la idea de mantener el orden de valores de la Constitución a través de la interpretación de las leyes ordinarias. El principio de interpretación conforme encuentra sus raíces en el de la Unidad del Orden Jurídico; para mantener este orden, las leyes deben ser interpretadas de acuerdo con la Constitución y el derecho anterior adecuado a la nueva situación constitucional (interpretación en el tiempo, dinámica). Mientras los jueces

tengan el poder de decidir, la concretización de la Constitución a través del legislador debe ser contrastada a la luz de la Constitución. (Díaz Ricci, 2007, p.66)

La interpretación conforme no sólo presenta la cuestión sobre el contenido de la norma a analizar, sino también la cuestión sobre el contenido de la Constitución a la luz de la cual esa ley debe ser contrastada. Tal como se señala en la contradicción de Tesis 293/2011, el Pleno de la SCJN estableció que la interpretación conforme y el Principio pro persona son “dos herramientas interpretativas cuya aplicación resulta obligatoria en la interpretación de las normas de derechos humanos” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, pp. 34-35). Es decir que, es obligatorio para los jueces nacionales que se enfrenten a la necesidad de interpretar una norma de derechos humanos a considerar en dicha interpretación al catálogo de derechos humanos que ahora reconoce el texto constitucional.

2.3.2.4 Principio Pro Persona

Es un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que requiere su vinculación con la violación de un derecho humano para su efectividad. El segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución, que entró en vigor el 11 de junio de 2011, establece: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917)

Tal derecho es un principio de interpretación pro persona que implica que las normas relativas a derechos humanos se interpreten de acuerdo con la propia Constitución y con los tratados internacionales. Favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas, constituyendo así, una herramienta hermenéutica para lograr la efectiva protección de los gobernados en relación, siempre, con un derecho humano que se alegue vulnerado.

2.3.3 Procuraduría General de la República y Procuradurías Estatales

En el sistema de procuración de justicia en México, recae principalmente en el órgano dependiente del poder ejecutivo, es la Procuraduría General de la República (en adelante PGR). Quien representa esta institución es un Procurador y junto con el Ministerio Público así como los elementos de la policía y peritos, recae esta obligación, que es garantizar el debido proceso y salvaguardar los Derechos Humanos. Tal como lo señala en su portal:

La Procuraduría General de la República es el órgano del poder Ejecutivo Federal, que se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos. (Gob.mx, 2016)

Lo anterior, refleja el compromiso que tiene con la sociedad en la investigación y persecución del delito. Con respecto a las procuradurías estatales, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que, las entidades federativas contarán con sus procuradurías y estarán sujetas a la coordinación de la PGR.

Fundamento Constitucional de la Procuraduría General de la República

La procuración de justicia es un ámbito clave para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal. Los principales mandatos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos hacia la Procuraduría General de la República, son los siguientes:

Fundamentos	Consiste
Artículos 21 y 102 constitucionales Artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República	Refiere a la función de investigación y persecución de los delitos federales, así como la atención a las víctimas de los delitos.

Artículos 21 y 102 constitucionales	Establece las directrices para la conducción y la implementación de la política criminal de la Federación, cuyo objetivo es determinar las prioridades en su actuación, así como las estrategias para alcanzarlas y los mecanismos para medir su impacto.
Artículos 102, 105 y 107 constitucionales	Determinan su función como órgano de defensa de los intereses de la sociedad y de la Federación para que no se violen los derechos humanos de los gobernados. Esta defensa es llevada a cabo a través del juicio de amparo, así como de acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, acciones colectivas y la solicitud de ejercicio de la facultad de atracción de los amparos directos por parte de la SCJN.

2.4 Procuración de justicia en las violaciones de los Derechos Humanos en el Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón

La Procuración de Justicia en las violaciones de los Derechos Humanos en el Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón trascendió al ámbito internacional, el cual está en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, su estatus del caso se encuentra en un Acuerdo de Solución Amistosa.

Cabe mencionar que, el caso solo se llevó ante jurisdicción estatal, debido a que las víctimas observaron por parte de la procuración de justicia del Estado de Chihuahua la omisión de su investigación. Por tal motivo deciden presentar por medio de sus

representantes, una petición de admisibilidad ante la CIDH recurriendo a los supuestos del artículo 46(2) de la Convención Americana, declarando admisible el caso.

2.4.1 Violación a los Derechos Humanos en el Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón

De acuerdo al Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón fue detenido el 1o. de febrero de 1999 por elementos de la Policía Municipal de Chihuahua junto con Misael Labra Domínguez, cuando presuntamente intentaban robar una escalera. Fueron remitidos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua, en donde torturaron y posteriormente desaparecieron a Cruz Ávila Mondragón. A pesar de los recursos interpuestos por los familiares de la víctima, las autoridades de Chihuahua no realizaron las investigaciones correspondientes.

Los Derechos alegados por los peticionarios del Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Sin embargo, la CIDH, en su informe de admisibilidad, solo considera violatorios los derechos en los artículos de los primeros dos instrumentos.

2.4.2 Convención Americana de Derechos Humanos

En este instrumento, la parte victimaria considera violatorio los derechos que comprende los deberes de los Estados y los derechos que debe proteger. A esto el Estado mexicano, tiene obligación en la protección de estos derechos, que a continuación se describirá:

- **Obligación de respetar los derechos (artículo 1.1)**

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
(Convención Americana de Derechos Humanos, 1981)

Este artículo es el fundamento sobre la cual descansa el sistema de derechos y libertades de dicho instrumento y el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. La obligación de los Estados Parte de respetar los derechos y libertades ahí contenidos y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna, conlleva en el objeto, fin del tratado y en el entendimiento que deben tener todos los jueces nacionales e internacionales para lograr la plena efectividad de los derechos y libertades que contiene.

- Deber de adoptar disposiciones de derecho interno (artículo 2)

Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1981)

De lo anterior, es preciso resaltar que uno de los deberes convencionales de los Estados es la armonización del Derecho Internacional de los Derechos Humanos con la normatividad interna. Sean legislativas o de otro carácter, para otorgar efectividad a los derechos y libertades previstos en los tratados internacionales.

- Derecho a la vida (artículo 4)

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que

establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito. Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente.

3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido.

4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos.

5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieran menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicara a las mujeres en estado de gravidez.

6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud este pendiente de decisión ante autoridad competente. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1981)

El derecho a la vida que tiene toda persona humana es la condición previa necesaria para la realización y disfrute de todos los demás derechos. En efecto, de no ser respetado y garantizado este derecho, los demás derechos de la persona se desvanecen, ya que se afecta la existencia misma de su titular. Como consecuencia de ello, no son aceptables las restricciones del derecho a la vida que configuran, por tanto, una violación a la Convención Americana y que comprometen la responsabilidad internacional de los Estados partes.

- Derecho a la integridad personal (artículo 5)

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias.
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1981)

En el sistema interamericano se construyen sobre algunos pilares básicos vinculados con la protección de la dignidad del ser humano, como es el derecho de toda persona a su integridad personal. Este proceso de protección, ha evolucionado desde un uso constante de dichas prácticas como forma de sanción, pasando por un uso regulado como forma de obtener confesiones, a los intentos por controlar las formas en que se infligía sufrimiento deliberado a una persona en el proceso de inquisición. De esta forma, este derecho y la prohibición de afectaciones ilegítimas al mismo se reconocen, acepta y protege.

- Derecho a la libertad personal (artículo 7)

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a las seguridades personales.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.
3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a

ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1981)

Se trata de uno de los derechos que ha sido abordado por la jurisprudencia de la Corte IDH. Un número de casos en que este derecho ha sido considerado, guarda conexión con situaciones de secuestro o detención que desembocaron en una desaparición forzada o en la privación de la vida. El análisis de esta clase de vulneraciones de la libertad personal ha estado a menudo vinculado a contextos de violencia generalizada y de violaciones graves a los derechos humanos.

Pero junto a este tipo de casos, la Corte Interamericana ha conocido de otros referidos a privaciones de libertad que se desarrollan dentro de un proceso penal, a menudo bajo la cobertura de la legislación interna pero sin cumplir las exigencias sustantivas o adjetivas de la Convención.

- Derecho a las garantías judiciales (artículo 8)

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

- a) derecho del inculcado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal;
- b) comunicación previa y detallada al inculcado de la acusación formulada;
- c) concesión al inculcado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa;
- d) derecho del inculcado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;
- e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculcado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;
- f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos;
- g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y
- h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

3. La confesión del inculcado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

4. El inculcado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1981)

La extensión y particular complejidad de la sistematización en las garantías judiciales se debe, a que la mayoría de los casos sometidos a la competencia contenciosa de la Corte Interamericana incluye controversias relacionadas con el debido proceso, suspensión de un análisis de las garantías judiciales en relación con los demás derechos reconocidos en la Convención Americana.

- Derecho a la protección judicial (artículo 25)

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. Los Estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (Convención Americana de Derechos Humanos, 1981)

Respecto al contenido, exigencias y alcances del derecho a la protección judicial, reconocido en este artículo de la Convención Americana. Al igual que el artículo 8 de esta misma ley, el artículo 25 consagra el derecho de acceso a la justicia y la correspondiente obligación estatal de garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia para hacer valer sus derechos.

2.4.3 Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas

Bajo este instrumento, las partes examinan que el presente caso incurre en la desaparición forzada. Es por ello que, utilizan algunos preceptos de esta ley que fueron violentados por el Estado mexicano. Tal como se menciona a continuación:

- Artículo I

Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a:

- a) No practicar, no permitir, ni tolerar la desaparición forzada de personas, ni aun en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales;
- b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción a los autores, cómplices y encubridores del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión del mismo;
- c) Cooperar entre sí para contribuir a prevenir, sancionar y erradicar la desaparición forzada de personas; y
- d) Tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesaria para cumplir con los compromisos asumidos en la presente Convención. (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas , 2002)

En este sentido, los Estados Parte de la Convención en cita, refiere a la obligación de no practicar, ni permitir el uso de esta práctica aun cuando estén en conflicto o suspensión de garantías, como es el caso del Estado mexicano en el artículo 29 constitucional. De igual manera, debe establecerse sanciones en contra de los autores, cómplices y encubridores de este delito. Asimismo debe de existir cooperación entre los Estados para la prevención, sanción y erradicación así como crear medidas en las leyes internas para cumplir este artículo

- Artículo III

Los Estados Parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales, las medidas legislativas que fuere

necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas, y a imponerle una pena apropiada que tenga en cuenta su extrema gravedad. Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima.

Los Estados Parte podrán establecer circunstancias atenuantes para los que hubieren participado en actos que constituyan una desaparición forzada cuando contribuyan a la aparición con vida de la víctima o suministren informaciones que permitan esclarecer la desaparición forzada de una persona. (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas , 2002)

En el presente artículo refiere al compromiso de los Estados en tipificar la práctica de la desaparición forzada como delito en los ordenamientos internos en materia judicial. Con el fin de establecer el paradero con vida de la víctima así como el esclarecimiento de la desaparición de la persona.

- Artículo XI

Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos y presentada sin demora, conforme a la legislación interna respectiva, a la autoridad judicial competente.

Los Estados Partes establecerán y mantendrán registros oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme a su legislación interna, los pondrán a disposición de los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con interés legítimo y otras autoridades. (Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas , 2002)

En el caso que nos ocupa, es vital el derecho alegado en este artículo, debido a que el conflicto que se suscita es por la privación de la libertad de la víctima sin una detención oficial así como la falta de registros de los detenidos como el ocultamiento de dicha información a sus familiares y defensores.

2.4.4 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura

Esta Convención constituye parte del corpus iuris interamericano. El propósito de este instrumento es permitir las condiciones en el reconocimiento y respeto de la dignidad inherente a la persona humana. Asimismo que, se aseguren el ejercicio pleno de sus libertades y derechos fundamentales. Es este sentido, las víctimas consideran violatorios estos derechos consagrados en los siguientes artículos:

- Artículo 1

Los Estados partes se obligan a prevenir y a sancionar la tortura en los términos de la presente Convención (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1987). En relación con este precepto, se determina la obligación del Estado mexicano, en cuestión del caso de análisis, a prever y castigar a todo aquel que realice actos de esta práctica.

- Artículo 8

Los Estados Parte garantizarán a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura en el ámbito de su jurisdicción el derecho a que el caso sea examinado imparcialmente.

Asimismo, cuando exista denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en el ámbito de su jurisdicción, los Estados partes garantizarán que sus respectivas autoridades procederán de oficio y de inmediato a realizar una investigación sobre el caso y a iniciar, cuando corresponda, el respectivo proceso penal.

Una vez agotado el ordenamiento jurídico interno del respectivo Estado y los recursos que éste prevé, el caso podrá ser sometido a instancias internacionales cuya competencia haya sido aceptada por ese Estado. (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, 1987)

En términos de este artículo, la Convención establece el deber de los Estados en garantizar que toda persona que denuncie haber sufrido tortura en el proceso de investigación por parte de los encargados en la procuración de justicia, deberán ser examinados de manera imparcial así como proceder de oficio e inmediato. Las

víctimas, podrán solicitar en instancia internacionales, cuando hayan agotado el ordenamiento jurídico interno.

En conclusión, la Procuración de Justicia en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio-Adversarial y Oral en México, es un reto para todos los servidores públicos encargados de investigar, vigilar, proteger y defender los Derechos Humanos. Cabe resaltar que, la comunidad internacional, en particular el sistema interamericano, han realizado una serie de recomendaciones con base a los informes de las relatorías en ejes temáticos de vulneración de estos derechos, como es la práctica de la tortura y desaparición forzada.

CAPÍTULO III

MARCO METODOLÓGICO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CASO 12.287 CRUZ ÁVILA MONDRAGÓN

En este capítulo de la investigación se realiza la presentación del marco metodológico de la procuración de justicia en la violación de los derechos humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón. Desde la perspectiva del paradigma mixto (cuantitativo-cualitativo).

3.1 Paradigma de la investigación

En todas las ciencias sociales, no puede haber un método único. Existen diversos enfoques metodológicos sostenidos o sustentados en ciertos fundamentos que desarrollados con alguna argumentación, pretenden convencer, justificar y legitimar los diversos discursos científicos.

... el tipo de ciencia social que se puede hacer depende de la relación social que se tenga con el mundo social [lo que se traduce] en la función que el investigador le asigna consciente o inconsciente a su práctica y que orienta sus estrategias de investigación: objetos elegidos, métodos empleados, etc. Uno no puede tener como objetivo comprender el mundo social, en el sentido de comprender por comprender. Uno puedo por lo contrario, buscar técnicas que permitan manipularlo, poniendo así la sociología al servicio de la gestión de orden establecido. (Bourdieu, 2008, p. 28)

De lo anterior menciona el autor que, una de las facetas de la labor del investigador es realizar esa actividad con el único objeto de tener una impresión cognoscitiva acerca de lo investigado, sin añadir ningún elemento de manipulación al propio fenómeno.

La ciencia indaga su objeto de estudio utilizando de una manera sistémica y rigurosa, métodos y medios especiales de conocimiento para obtener datos empíricos, confiables y con ello un reflejo de las regularidades esenciales de la realidad. Desde

un paradigma de la investigación que tiene su fundamento metodológico en la concepción científica general sobre la realidad objetiva.

La procuración de justicia en las violaciones de los derechos humanos en el Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón como objeto de investigación ha sido abordada desde el paradigma mixto de la investigación científica cuantitativa-cualitativa en las ciencias sociales.

El paradigma mixto refuerza por un lado, la objetividad de la información que se recopila y procesa, razón por la cual exige el tratamiento estadístico de los datos y la cuantificación de las observaciones para obtener el rigor requerido. Por otro lado, permite establecer relaciones de causa y efecto y crear un juicio propio, debido que la interpretación funge como un proceso de nivel racional que involucra al pensamiento del investigador.

3.2 Tipo de investigación

El tipo de investigación del presente trabajo se desarrolló bajo el enfoque mixto. Debido a que este tipo de enfoque permitió medir y estimar la magnitud de las violaciones de los derechos humanos en los casos de desaparición forzada y tortura en México y que están en trámite ante la CIDH. Así como, enriquecimiento de las muestras y consolidando interpretaciones sobre este tema.

En este mismo parámetro, el enfoque cuantitativo permitió la recolección de datos y análisis con el fin de conocer los porcentajes en la muestra estadística, de cual se desarrollaron tablas y graficas que requirieron el diagnóstico actual de las violaciones de los Derechos Humanos. Asimismo, el enfoque cualitativo facilitó una amplia perspectiva de estos datos, consolidando argumentos e interpretaciones del caso en estudio.

3.3 Participantes en el estudio

La investigación de esta tesis es sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos del caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que permita la disminución de la impunidad en materia de tortura y desaparición forzada.

El objetivo en esta investigación es la elaboración de un conjunto de recomendaciones jurídicas sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón, en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Por tal motivo se realizó la recolección y análisis de datos estadísticos extraídos de diferentes grupos relacionados al tema de investigación, como son las organizaciones civiles, organismos autónomos así como las acciones que ha realizado el Estado mexicano.

Por ello es necesario tener participantes en el estudio, como población de la presente investigación es la procuración de justicia en la violación de los derechos humanos en los casos en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. De ahí que, se seleccionó como muestra no probabilística la procuración de justicia del Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la CIDH.

3.4 Métodos de investigación

Los métodos de investigación son auxiliares y complementarias entre sí de conformidad con el objetivo de la investigación. Bajo este parámetro, se determinó las características de cada uno de estos, con la finalidad de resolver las cuestiones metodológicas del proyecto de tesis a desarrollar.

3.4.1 Métodos teóricos

Este proyecto requirió de métodos teóricos con la finalidad de estructurar la tesis. Como métodos teóricos se utilizaron: la revisión de documentos, método de análisis y síntesis, método descriptivo, método deductivo, método inductivo y método analógico o comparativo.

Método de revisión de documentos

Este método se empleó para sustentar los registros de los antecedentes históricos de la procuración de justicia en las violaciones de los derechos humanos. De acuerdo a lo anterior, se utilizó distintas fuentes de la literatura con el objetivo de identificar la información útil.

Método de análisis y síntesis

El método de análisis y síntesis se aplicó en la presente investigación donde se utilizó la separación de las partes constitutivas de lo referente a la procuración de justicia en los casos de violaciones de los derechos humanos.

Método descriptivo

Este método se aplicó para ordenar los elementos obtenidos de la información recolectada, con base a las observaciones de las conductas realizadas en ciertas investigaciones hechas en la tesis. De acuerdo con lo anterior, permitió obtener ciertas características, factores, procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos.

Método deductivo

Se utilizó para deducir en este proyecto el fenómeno social, la cual se logró precisar recomendaciones para la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos del caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que permita la disminución de la impunidad en materia de tortura y desaparición forzada.

Método inductivo

Se consideró para realizar conclusiones generales de la investigación, a través de presentación de casos en procesos jurídicos, resoluciones jurisdiccionales y jurisprudencia. Asimismo, sirvió de complemento de lo recabado con el método anterior.

Método analógico o comparativo

Consistió en la comparación de la procuración de justicia en México en los casos en trámite ante la Comisión Interamericana con los demás estados del mismo sistema. Permitiendo obtener datos estadísticos así como información de experiencia en el tratamiento de esta problemática.

3.4.2 Método cuantitativo

En el método cuantitativo, que utiliza la recolección y análisis de datos para contestar las preguntas de investigación. Asimismo, los datos estadísticos en la numeración, el conteo y la investigación de campo. El uso de la estadística determina con exactitud los patrones de comportamiento en una población y muestra.

Por consiguiente, en el presente método cuantitativo se apegará a los siguientes lineamientos con base a las características de este enfoque, con el fin de determinar el fenómeno social.

- Se elegirán diversas ideas que se transforman en una o varias preguntas de investigación.
- Medir las variables en un determinado contexto.
- Analizar dichas mediciones obtenidas mediante métodos estadísticos.
- La forma confiable para conocer la realidad es a través de la recolección y análisis de datos.

Con relación al tema de investigación, la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos del caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, se realizó bajo el enfoque cuantitativo. Debido a que se obtuvo y analizo datos meramente estadísticos.

3.4.3 Método cualitativo

El método cualitativo, se utilizó con el fin de reforzar lo obtenido con el anterior método descrito. Esto es que, las aseveraciones de la medición cuantitativa permitieron realizar una descripción más amplia de aquellos casos que se encuentran en trámite ante un órgano internacional, así como el proceso de la procuración de justicia en el sistema penal mexicano. Cabe señalar que, la investigación se apegó a las características principales de este enfoque:

- No consta de un solo método, sino que incluye diversas perspectivas teóricas y métodos en específico de indagación en dependencia del objeto de investigación.
- Se centra en la ciencia social, es decir, tal como la perciben los participantes del estudio.
- Se lleva a cabo en la acción social.

- Empleo de métodos múltiples de recopilación de datos, lo que permite validar la información obtenida.
- Aborda el objeto de estudio en sus relaciones contextuales desde una perspectiva amplia.

3.4.4 Métodos empíricos

Los métodos empíricos permitieron discernir las características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio.

La investigación empírica permitió hacer una serie de investigación referente a la problemática, retomando experiencia de otros autores, para de ahí a partir con sus exploración. También conlleva a efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas.

Método de observación

Entre los métodos empíricos tenemos el método de observación, el cual se utilizó para hacer un registro en forma sistemática de patrones conductuales de las personas, objetos y sucesos. A fin de obtener información sobre el fenómeno de interés, mientras ocurre y como se presenta en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

3.5 Técnicas de investigación

En la investigación científica las técnicas tienen especial aplicación para la comprobación o desaprobación de hipótesis y en la observación de fenómenos socio-jurídicos. Mediante estas, es posible la captura de datos directamente de la fuente donde se generan, lo cual propicia una información directa respecto del objeto de la investigación. Entre las técnicas destacan las de observación científica, recolección, procesamientos, análisis e interpretación de datos y procesos.

Técnica de observación científica

La investigación científica comienza desde el nivel de la observación, la cual sugiere y motiva los problemas así como conduce a la necesidad de la sistematización de los

datos. En referencia al tema, esta investigación científica es meramente jurídica, por lo que permitió suministrar información y delimitar el problema de investigación.

Técnica de encuesta y entrevista

La diversidad de datos, casos y procesos que se presentan en la actualidad, constituyen las fuentes fundamentales para realizar investigación jurídica. En la presente investigación se utilizó las técnicas de encuesta al muestreo de organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos así como los peritos en el proceso de la procuración de justicia. Por otra parte, se realizó una entrevista a experto en la materia de casos en trámite ante la CIDH.

Técnica de captura y sistematización de información

Esta técnica consistió en el registro y sistematización de instrumentos legales y casos en relación al estudio de la investigación. Estos registros jurídicos abarcan recursos tanto nacionales como internacionales. Asimismo, de aquellos registros de procesos y resoluciones jurisdiccionales.

CAPÍTULO IV

DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROBLEMA

Expuesto en los capítulos anteriores, la procuración de justicia en México ha sido un área donde se presenta el mayor número de violación en los Derechos Humanos, tal es el caso de estudio, donde representa esta situación. Sin embargo, el mismo Estado ha implementado acciones para combatir estas deficiencias que se presenta entorno al sistema penal mexicano. A continuación, se realizara un diagnostico actual sobre esta temática de estudio.

4.1 Situación actual de la Procuración de Justicia de los Derechos Humanos

En este rubro se desarrollara una serie de datos estadísticos del sistema interamericano y el sistema mexicano. En este sentido, se utilizaran gráficos de las actividades que realiza la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, así como, el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2014 (en adelante CNPJF 2014) y el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015 (en adelante CNPJE 2015) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (en adelante INEGI).

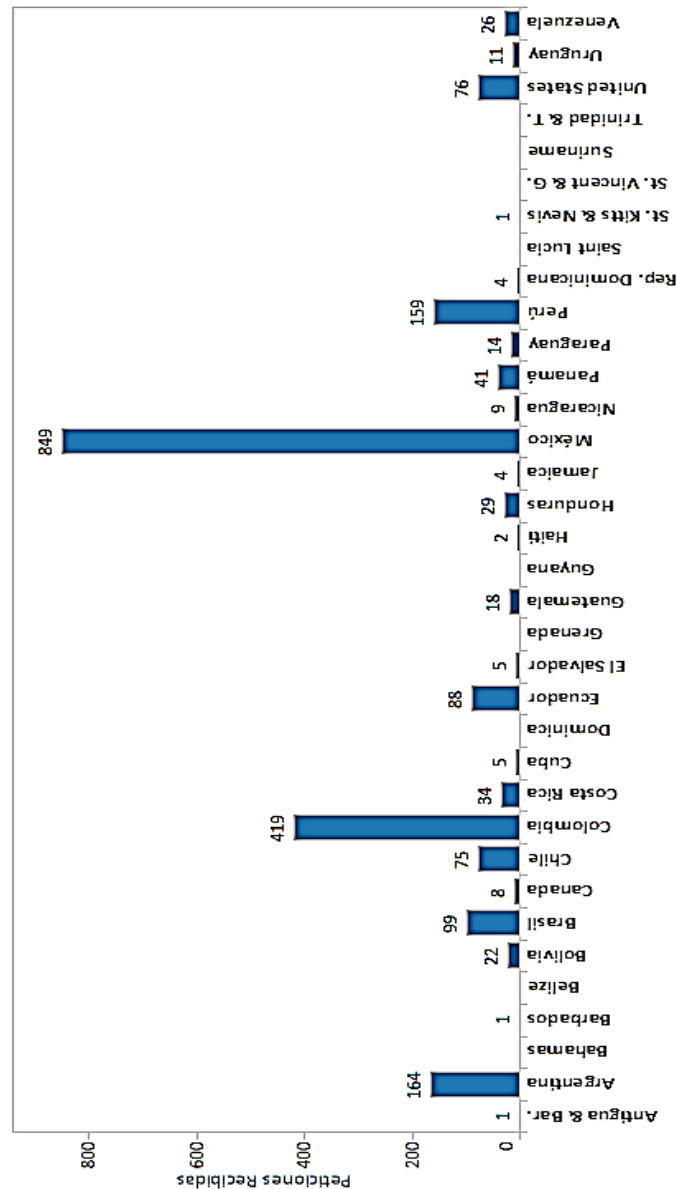
4.2 Actividades en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015

La CIDH observa la situación general de los Derechos Humanos en los Estados Miembros y publica informes especiales sobre la situación en determinado Estado cuando lo considera apropiado. Además, recibe, analiza e investiga peticiones individuales en que se alegan violaciones de estos derechos. En su Informe Anual 2015 resalta lo siguiente:

Seleccione el año:
 2015

 Seleccione Estadística a Visualizar
 Peticiones recibidas

2015: Peticiones recibidas



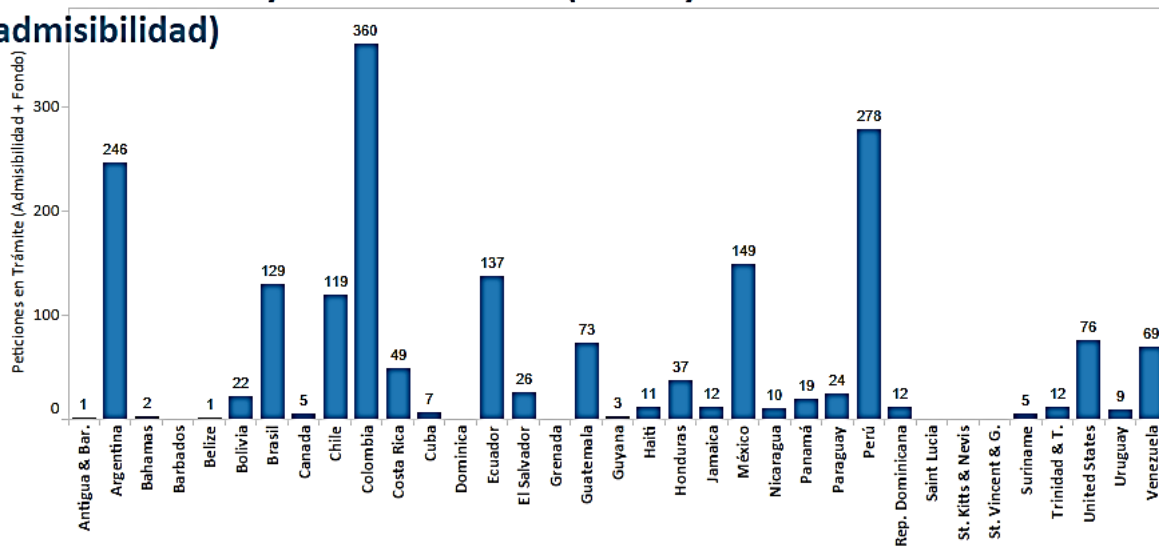
La gráfica anterior, representa las solicitudes que realizan las partes victimarias, las que le denominan peticionarios, para que su caso se ha admitido por la Comisión Interamericana. Cabe señalar, que, el Estado mexicano sobresale con el mayor número de solicitud. Sin embargo, también refleja la ausencia de la procuración y administración de justicia en el sistema penal, así como los casos violatorios a los derechos humanos.

Selecciona Estadística a Visualizar
Petitionen y casos en trámite (fondo y admisibilidad)

Selecciona el año:
2015



2015: Peticiones y casos en trámite (fondo y admisibilidad)



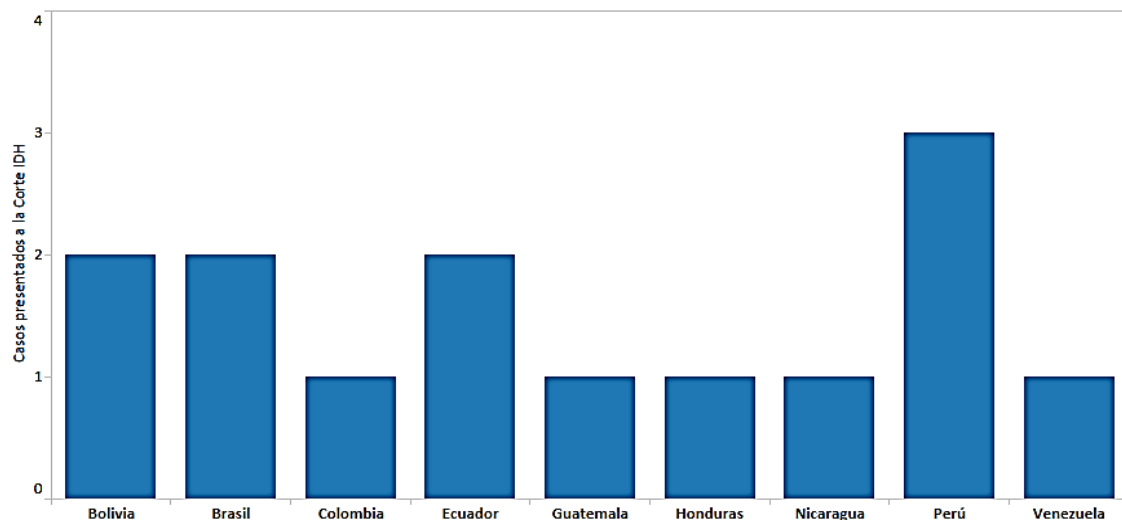
En relación en esta gráfica, el Estado mexicano cuenta con un total de 149 peticiones y casos en trámite, lo cual refiere a que conforma uno de los principales Estados con mayor incidencia en las violaciones a los derechos humanos. Contexto social que experimentó durante estos últimos años, como fue principalmente las desapariciones forzadas en varias entidades federativas y operativos en contra del narcotráfico.

Selecciona Estadística a Visualizar
Casos enviados a la Corte IDH

Selecciona el año:
2015



2015: Casos enviados a la Corte IDH



Cabe resaltar que, México no presentó en este año, casos enviados a la Corte IDH, esto quiere decir que el Estado mexicano ha realizado acciones para el seguimiento y reparación de los daños causados a las víctimas. Asimismo, ha adoptado las recomendaciones por parte de la Comisión. Si bien es cierto, cuando el Estado es omiso al caso señalado por este órgano, lo remite ante la Corte.

En resumen, México ha tenido en aumento casos en trámite ante este organismo interamericano. Se puede decir que, es el Estado miembro más activo en cuestión de violación a los Derechos Humanos. Descripción que no es favorable en la imagen de un gobierno, el que ha realizado diversas reformas constitucionales en materia de estos derechos, así como la adopción de instrumentos que faciliten a los servidores públicos en la procuración de justicia. Como ejemplo, se presenta el siguiente gráfico que muestra en los últimos 10 años la situación en general de casos en trámite así como de peticiones:

Selecciona país:
México



México



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Peticiones recibidas	193	215	168	232	267	273	431	660	500	849
Peticiones pendientes de estudio inicial						1011	1279	1806	2121	2539
Pet. con decisión de no abrir a trámite	54	104	104	172	139	146	135	128	151	280
Pet. con decisión de abrir a trámite	4	4	10	5	29	23	14	10	13	31
Total de decisiones sobre apertura	58	108	114	177	168	169	149	138	164	311
Informes de inadmisibilidad	1	1	0	0	1	2	3	0	1	0
Informes de admisibilidad	4	5	2	1	4	3	3	8	1	5
Peticiones en admisibilidad									101	121
Casos en fondo									29	28
Informes de fondo publicados	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Informes de solución amistosa	0	1	0	1	3	0	1	0	1	1
Peticiones y casos en trámite	72	69	75	76	96	108	115	119	130	149
Decisiones de archivo	0	1	0	4	0	7	2	4	1	4
Casos enviados a la Corte IDH	0	2	1	2	0	0	0	1	0	0
Solicitudes de medidas cautelares			37		55	62	83	85	93	160
Medidas cautelares otorgadas	4	5	5	0	13	6	8	3	6	11

Selecciona estadística a visualizar
Peticiones y casos en trámite

4.3 Reportes de los Censos Nacionales por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es el órgano encargado de realizar los censos. Además, permite recabar información en todas y cada una de las unidades de observación de la población objeto de estudio. En este sentido ofrecen la posibilidad de obtener información con una cobertura total y amplios niveles geográficos.

4.3.1 Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE) 2014

El Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal 2014, el cual tiene por objeto generar información estadística y geográfica de la Procuraduría General de la República. Con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en la materia de procuración de justicia.

4.3.2 Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015

El CNPJE 2015 tiene como finalidad facilitar la correcta interpretación por parte de los usuarios de la información que se genera y así apoyar los procesos de implementación, monitoreo y evaluación de la procuración de justicia. Asimismo, este censo se ha realizado en cuatro ocasiones, alcanzando la totalidad de las unidades de análisis y observación dentro de la población de estudio.

Los gobiernos de los estados, a efecto de poder ejercer las funciones que les han sido encomendadas, se organizan a partir de unidades administrativas que tienen como propósito realizar las tareas pendientes como es el caso de la procuración de justicia. Tal como se señala en el gráfico siguiente:

Módulo 1. Estructura organizacional y recursos

Unidades administrativas en las procuradurías o fiscalías generales de justicia, por entidad federativa 2014

Cuadro 1.1

Entidad Federativa	Total
Estados Unidos Mexicanos	1 098
Aguascalientes	25
Baja California	19
Baja California Sur	21
Campeche	18
Coahuila de Zaragoza	90
Colima	13
Chiapas	50
Chihuahua	25
Distrito Federal	62
Durango	30
Guanajuato	18
Guerrero	93
Hidalgo	20
Jalisco	52
México	49
Michoacán de Ocampo	14
Morelos	35
Nayarit	14
Nuevo León	42
Oaxaca	23
Puebla	62
Querétaro	24
Quintana Roo	63
San Luis Potosí	51
Sinaloa	20
Sonora	18
Tabasco	42
Tamaulipas	22
Tlaxcala	12
Veracruz de Ignacio de la Llave	25
Yucatán	29
Zacatecas	19

Nota: la información se refiere a las instituciones registradas al 31 de diciembre. No se incluyen órganos desconcentrados u organismos descentralizados sectorizados a las procuradurías o fiscalías.

Con relación a lo anterior, se exponen el siguiente tabulador, donde el 53.6 por ciento del total de servidores públicos recibieron algún tipo de capacitación, mientras que el

42 por ciento de personas no la recibieron. En el caso del Estado de Guanajuato, no se especifica alguna condición de evaluación del personal.

**Personal en las procuradurías o fiscalías generales de justicia,
por entidad federativa según condición de capacitación
2014**

Cuadro 1.5

Entidad Federativa	Total	Con capacitación ¹	Sin capacitación ²	No especificado
Estados Unidos Mexicanos	91 882	49 249	38 721	3 912
Aguascalientes	732	587	135	0
Baja California	2 885	1 609	1 258	0
Baja California Sur	1 017	798	219	0
Campeche	738	509	229	0
Coahuila de Zaragoza	2 325	2 325	0	0
Colima	1 187	72	1 095	0
Chiapas	3 725	1 702	2 023	0
Chihuahua	6 013	2 633	3 380	0
Distrito Federal	13 972	13 934	38	0
Durango	980	296	684	0
Guanajuato ³	3 912	*	*	3 912
Guerrero	2 542	1 448	1 094	0
Hidalgo	1 069	829	240	0
Jalisco	12 110	5 268	6 844	0
México	5 324	438	4 888	0
Michoacán de Ocampo	2 073	415	1 658	0
Morelos	1 732	0	1 732	0
Nayarit	1 216	240	976	0
Nuevo León	3 957	3 048	911	0
Oaxaca	2 674	1 049	1 625	0
Puebla	2 305	1 514	791	0
Querétaro	1 638	990	648	0
Quintana Roo	1 397	995	402	0
San Luis Potosí	1 632	594	1 038	0
Sinaloa	2 177	1 381	816	0
Sonora	2 063	954	1 109	0
Tabasco	2 287	2 103	184	0
Tamaulipas	1 883	685	1 198	0
Tlaxcala	510	9	501	0
Vera Cruz de Ignacio de la Llave	3 041	2 297	744	0
Yucatán	1 503	303	1 200	0
Zacatecas	1 323	240	1 083	0

Nota: la información se refiere al personal registrado al 31 de diciembre. No se incluye personal adscrito a órganos desconcentrados u organismos descentralizados sectorizados a las procuradurías o fiscalías.

¹ Se refiere al personal que concluyó y aprobó cursos de capacitación en el Instituto de Formación, Capacitación y/o Profesionalización Policial u homólogo de las procuradurías o fiscalías generales de justicia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

² Se refiere al personal que no tomó, no concluyó o no aprobó cursos de capacitación en el Instituto de Formación, Capacitación y/o Profesionalización Policial u homólogo de las procuradurías o fiscalías generales de justicia, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

³ La Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa determinó esta información como confidencial y reservada.

El censo exploró el proceso completo de la función de la procuración de justicia, tanto en el sistema penal tradicional, como en el nuevo sistema acusatorio-adversarial y oral. En el caso que nos ocupa, se realizaron el conteo de las averiguaciones previas y carpetas de investigación en el año 2014, donde el Ministerio Público abrió un total de 1,580, 134 casos. Tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Módulo 2. Ejercicio de la función de procuración de justicia

**Averiguaciones previas y carpetas de investigación,
por entidad federativa según etapa del proceso
2014**

Cuadro 2.1

Entidad Federativa	Abiertas ¹	Determinadas ²	Cerradas ³	Pendientes ⁴
Estados Unidos Mexicanos	1 580 134	1 039 455	194 163	1 034 367
Aguascalientes	19 337	8 901	0	15 359
Baja California	107 282	44 193	2 533	63 089
Baja California Sur	22 489	14 096	NA	41 158
Campeche	-	-	-	-
Coahuila de Zaragoza	50 181	20 054	96	-
Colima	9 636	7 551	2	4 867
Chiapas	21 462	13 188	1 021	8 274
Chihuahua	58 492	43 836	14 878	44 452
Distrito Federal	179 856	155 039	NA	24 817
Durango	24 924	24 921	3 208	20 498
Guanajuato	93 670	84 487	34 416	43 170
Guerrero	24 409	10 444	-	13 965
Hidalgo	30 675	18 342	452	41 839
Jalisco	91 577	33 549	-	135 568
México	240 833	221 676	96 873	143 960
Michoacán de Ocampo	40 044	16 801	NA	23 243
Morelos	48 544	31 198	31 198	37 390
Nayarit	7 221	8 829	1	2 237
Nuevo León	68 893	33 738	6 698	35 155
Oaxaca	39 884	23 074	-	38 676
Puebla	71 706	63 838	1 444	60 864
Querétaro	36 945	30 695	266	32 201
Quintana Roo	25 643	9 962	-	23 859
San Luis Potosí	15 476	14 379	72	7 245
Sinaloa	32 623	17 230	24	15 371
Sonora	28 431	19 887	NA	13 987
Tabasco	49 363	4 721	103	45 394
Tamaulipas	45 224	25 053	9	35 998
Tlaxcala	7 838	3 191	0	4 647
Veracruz de Ignacio de la Llave ⁵	39 946	11 283	1	28 663
Yucatán	31 374	16 936	500	20 628
Zacatecas	16 156	8 363	368	7 793

Nota: los totales corresponden a la suma de las cifras proporcionadas por las procuradurías o fiscalías generales de justicia que contaron con datos o elementos para responder sobre este tema.

¹ La información se refiere a las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas por el Ministerio Público del fuero común, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, en las que éste haya iniciado las indagatorias respectivas.

² La información se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación determinadas por el Ministerio Público del fuero común entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

³ La información se refiere a las carpetas de investigación cerradas derivadas de aquellas que fueron determinadas por el Ministerio Público del fuero común entre el 1 de enero y el 31 de diciembre.

⁴ La información se refiere a las averiguaciones previas y carpetas de investigación pendientes de concluir por parte del Ministerio Público del fuero común, al 31 de diciembre.

⁵ La Fiscalía General del Estado no contabilizó 6 927 carpetas de investigación abiertas debido a la falta de información relacionada con éstas. NA: no se aplica el tema debido a que la Procuraduría o Fiscalía General de Justicia de la entidad federativa correspondiente reportó que sus

procesos de trabajo se desarrollaron totalmente bajo el sistema inquisitorio o de juicios tradicionales durante el año.

(-): se refiere a las procuradurías o fiscalías generales de justicia que al momento de la aplicación del cuestionario no contaron con datos o elementos para responder sobre este tema.

54

Respecto a los servicios periciales, el CNPJE 2015 menciona que las procuradurías cuentan con instituciones o unidades administrativas con personal encargado de realizar estas funciones. De acuerdo con los datos del siguiente cuadro, establece un total de 7,148 peritos.

**Personal de servicios periciales y/o servicio médico forense,
por entidad federativa según cargo y sexo
2014**

Cuadro 1.16
1a. parte

Entidad Federativa	Total	Oficiales secretarios		Médicos forenses	
		Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
Estados Unidos Mexicanos	7 148	19	25	801	376
Aguascalientes	99	5	1	8	0
Baja California	214	0	0	0	0
Baja California Sur	114	0	0	16	10
Campeche	57	0	0	12	4
Coahuila de Zaragoza	115	0	0	18	2
Colima	98	0	0	12	2
Chiapas	284	0	0	37	24
Chihuahua	464	0	0	54	29
Distrito Federal	674	0	0	25	29
Durango	107	1	8	8	1
Guanajuato	335	0	0	50	31
Guerrero	262	0	0	0	0
Hidalgo	214	0	0	30	9
Jalisco	NA	NA	NA	NA	NA
México	647	0	0	135	87
Michoacán de Ocampo	243	4	0	26	19
Morelos	159	8	12	5	3
Nayarit	141	0	0	18	13
Nuevo León	601	0	0	51	27
Oaxaca	278	1	3	24	8
Puebla	200	0	0	0	0
Querétaro	161	0	0	13	8
Quintana Roo	104	0	0	11	4
San Luis Potosí	75	0	0	11	1
Sinaloa	217	0	0	32	10
Sonora	164	0	0	24	5
Tabasco	273	0	0	64	17
Tamaulipas	179	0	0	21	14
Tlaxcala	63	0	0	4	5
Veracruz de Ignacio de la Llave	279	0	0	53	18
Yucatán	202	0	0	16	7
Zacatecas	125	0	1	23	9

En síntesis, la situación actual de la procuración de justicia se refleja tanto en el sistema interamericano como en el sistema mexicano. Donde se observa que, falta aún realizar acciones en la adopción de protocolos, instrumentos, manuales, entre otros, de estándar internacional. Debido a que, es el área donde se registra el mayor número de violaciones a los derechos humanos. Como es el caso del Ministerio Público junto con sus órganos auxiliares (peritos y elementos policiales).

CAPÍTULO V

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

El presente capítulo se dividirá en dos partes, en la primera se abordará la presentación de resultados de los instrumentos investigación aplicados a tres sectores: el primero lugar está dirigido a los peritos, el segundo a Organizaciones No Gubernamentales como es el caso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COS Y DDHAC) y Organización Interamericana de Derechos Humanos A.C. Finalmente, se realizó una entrevista a servidor público de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

En segunda parte, presentarán las recomendaciones, esto de acuerdo a lo establecido en el objetivo general de la investigación: La elaboración de un conjunto de recomendaciones jurídicas sobre la procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón, en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

5.1 Resultados del Estudio sobre la Procuración de Justicia en las Violaciones de los Derechos Humanos en los Casos en trámite ante la CIDH

En relación con la aplicación de los instrumentos metodológicos en las tres muestras, se determinó que, la procuración de justicia en los casos en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, expone la deficiencia en las actuaciones de los elementos policiales, peritos y agentes del Ministerio Público. A continuación se analizará cada una de las áreas donde se realizó el estudio de la presente investigación.

5.1.1 Cuestionario aplicado a Peritos

Del instrumento metodológico aplicado a los agentes periciales (ver anexo 4), se obtuvo que la mayoría de las preguntas del cuestionario dictaminaron poco conocimiento en relación a la procuración de justicia de casos en trámite ante la

CIDH, así como la ausencia de una capacitación constante sobre su área en específico y la adopción de instrumentos internacionales en la práctica para el refuerzo de los conocimientos en la materia. Por consiguiente, se realizará un breve análisis general de las preguntas del sondeo.

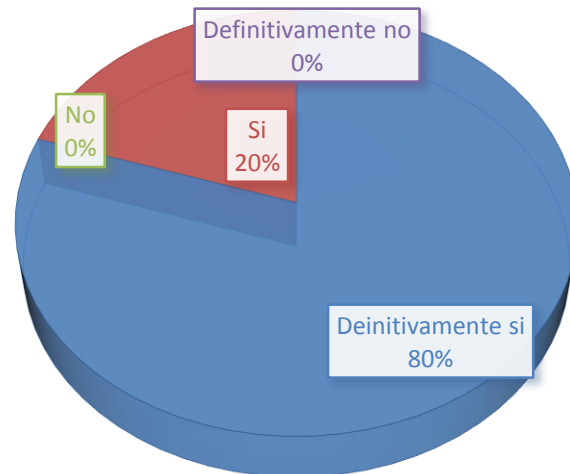


En este grafico se presenta el resultado de una pregunta de encuesta dirigido a peritos, la cual determina la importancia del tema de procuración de justicia en las capacitaciones. Como se observa, el 100% cree que en definitivamente si es necesario este rubro, por lo que demuestra deficiencia en cuanto al conocimiento en el proceso de investigación de delitos.

Cabe mencionar que, en la etapa de investigación del delito, la función primordial del Ministerio Público y de sus auxiliares directos como son los peritos, es encontrar todas las evidencias que se convertirán en medios probatorios, los cuales nos permitirán, no sólo determinar si existe una conducta delictuosa y un probable responsable, sino también dar fundamento a todas las decisiones que se deben tomar durante el proceso.

En relación al caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón, es necesario la intervención del perito debido a que una de las víctimas presentaba indicios de tortura cuando estuvo detenido por policías estatales. Por ende, la presentación de su dictamen pericial es transcendental en la determinación de las violaciones a los derechos Humanos.

EL PROBLEMA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA RADICA EN ERRORES ESTRUCTURALES Y FUNCIONALES DE INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS

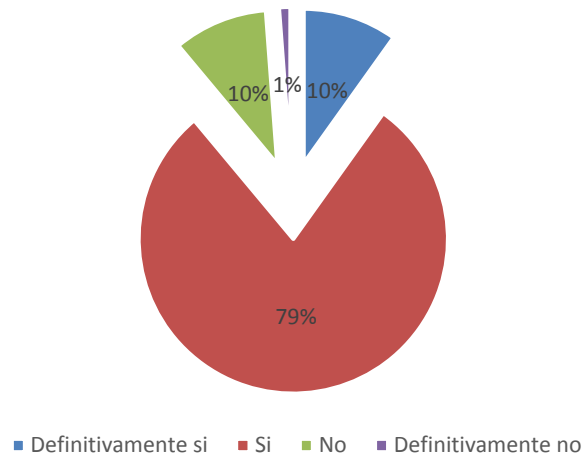


En este contexto, el 80% de los encuestados, indicó que la problemática de la procuración de justicia radica principalmente en errores estructurales y funcionales de la investigación de los delitos. De lo anterior, refiere en el insuficiente equipo, material y carencia de laboratorios e instalaciones para las investigaciones criminales. Asimismo, la mínima coordinación con las áreas de prevención del delito y ejecución penal, principalmente en los temas relacionados con investigación criminológica e investigación criminal en delitos cometidos en flagrancia.

Esta situación, se han realizado diversas acciones y programas por los poderes Ejecutivo y Judicial para enfrentar con eficacia del problema estructural y funcional de la procuración y administración de justicia. Pese a ello, se siguen observando errores y fallas que contribuyen.

En este sentido, en el caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón es evidente la ausencia de coordinación con el área de investigación criminológica, la cual las víctimas fueron detenidos por presuntamente robar una escalara, sin esclarecerse en la actualidad los hechos acontecidos.

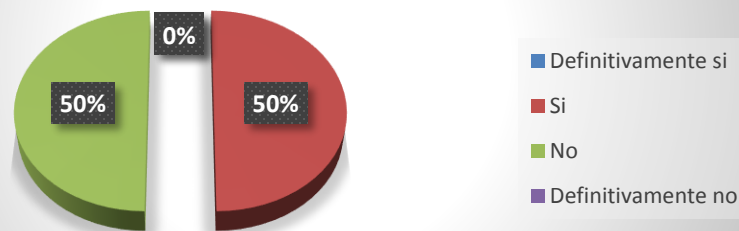
¿Conoce el Protocolo de Estambul?



De acuerdo con la gráfica anterior, el 79% de los peritos encuestados determinaron un “sí” en cuestión de conocer de la existencia del Manual para la investigación y documentación

eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, mejor conocido como el Protocolo de Estambul.

¿Han aplicado el Protocolo de Estambul?

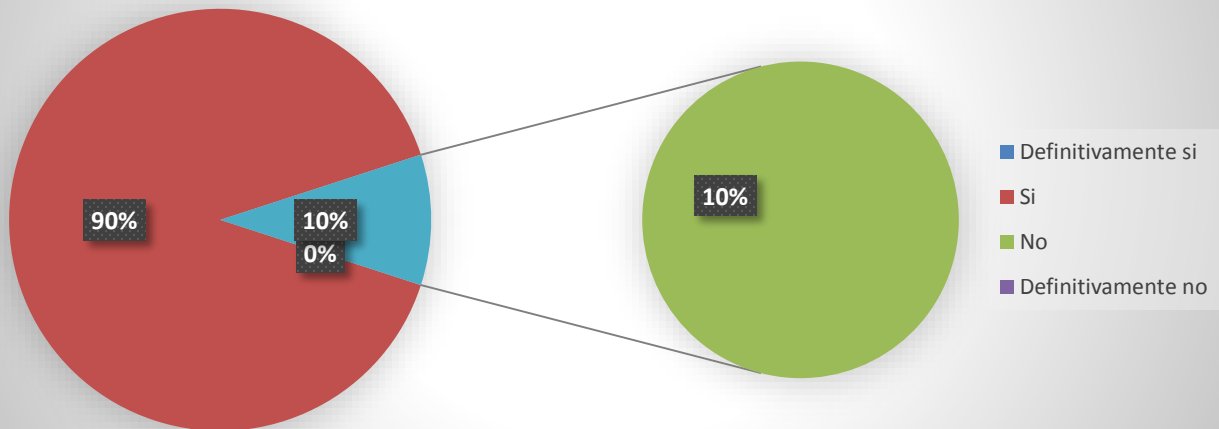


En este mismo tenor en el grafico siguiente, indica un “sí” en un 50% y en un “no” el otro 50% en la aplicación de este protocolo, lo que determina que la

aplicabilidad de este manual sigue siendo escaso. Por lo que es necesario implementar medidas para el uso obligatorio de este instrumento, debido que se ha realizado con el fin de contribuir en la protección de los individuos contra la tortura.

Cabe señalar que, el Protocolo de Estambul es un conjunto de reglas donde documenta pruebas de torturas y malos tratos. De manera que se pueda exigir a las autoridades que proporcionen información de sus actos y permitan la realización de procuración de justicia.

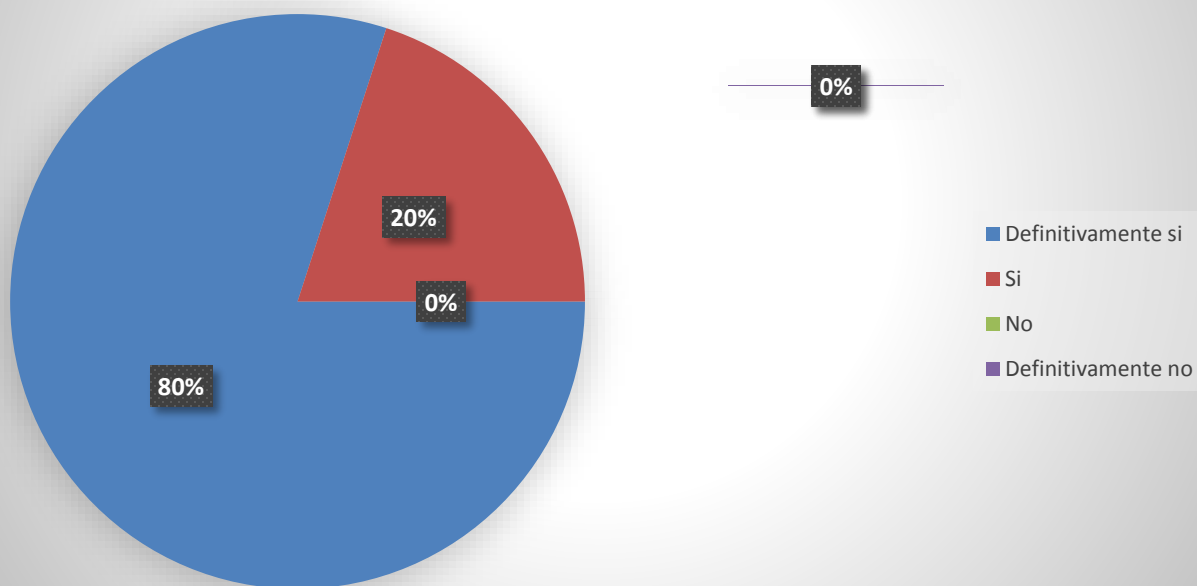
¿Conoce el Sistema Interamericano en la Protección de los Derechos Humanos?



En esta grafica se muestra que el 90% de los encuestados refieren que “si” conocen el sistema interamericano en la protección de los Derechos Humanos, un 10% aseguran un “definitivamente si” y el otro 10% indican un “no”. De lo anterior, refleja el avance en la promoción de este sistema.

El sistema interamericano se desarrolló en el marco de la Organización de los Estados Americanos, llevando una réplica regional del sistema universal y el europeo en la cuestión de generar mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Se basa en la labor de dos órganos: la Comisión y la Corte interamericana.

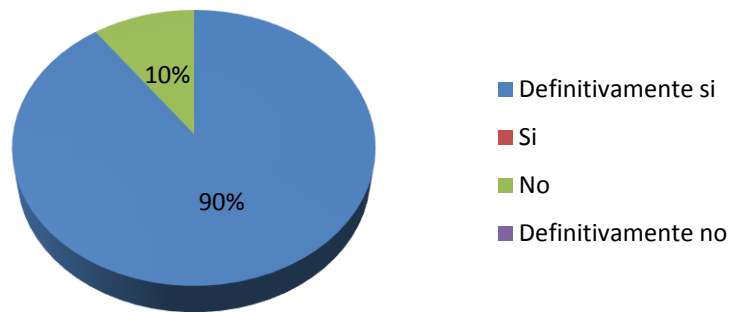
¿Conoce la admisibilidad de los Casos ante la CIDH, cuando este haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna?



En relación de la admisibilidad de los casos ante la Comisión Interamericana refiere que un 80% asegura un “definitivamente si” en cuestión del agotamiento en los recursos internos. En el proceso de la investigación del caso, refiere que la víctima de delito podrá solicitar una petición de admisibilidad siempre y cuando termine con el procedimiento interno. La primera instancia internacional recurren es ante la CIDH donde analizara la situación y determinara una serie de recomendaciones al Estado en conflicto.

En relación al caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón, las víctimas solicitaron su petición de admisibilidad ante la CIDH. Sin embargo, no habían agotado los recursos internos debido a que el caso se encontraba en el proceso estatal sin haberlo concluido en una instancia federal. Lo anterior, el Estado mexicano declaró inadmisibile el caso por esa falta. Por lo que, el órgano interamericano determinó que en relación a las excepciones establecidas en la Carta de la OEA, acerca del retardo injustificado en la decisión de los órganos jurisdiccionales mexicanos respecto a los hechos denunciados es causa de admisibilidad del caso.

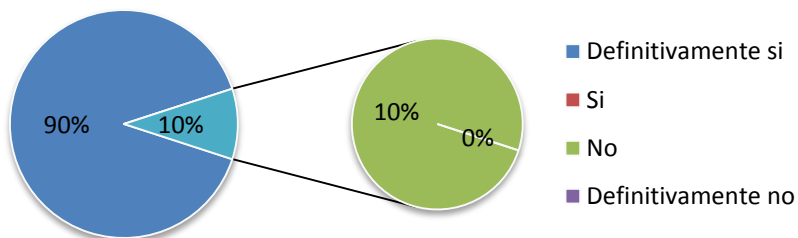
¿Considera importante las recomendaciones que emite la CIDH?



En cuestión a la admisibilidad del caso, la Comisión Interamericana emite recomendaciones con el fin de proporcionar vías expeditas en la solución de los casos. En relación al gráfico anterior, el 90% de los encuestados aseguran

un “definitivamente sí”, por lo que, es necesario destacar e implementar estas acciones que propone.

¿Las recomendaciones de la CIDH aportan al mejoramiento del sistema penal acusatorio en México?



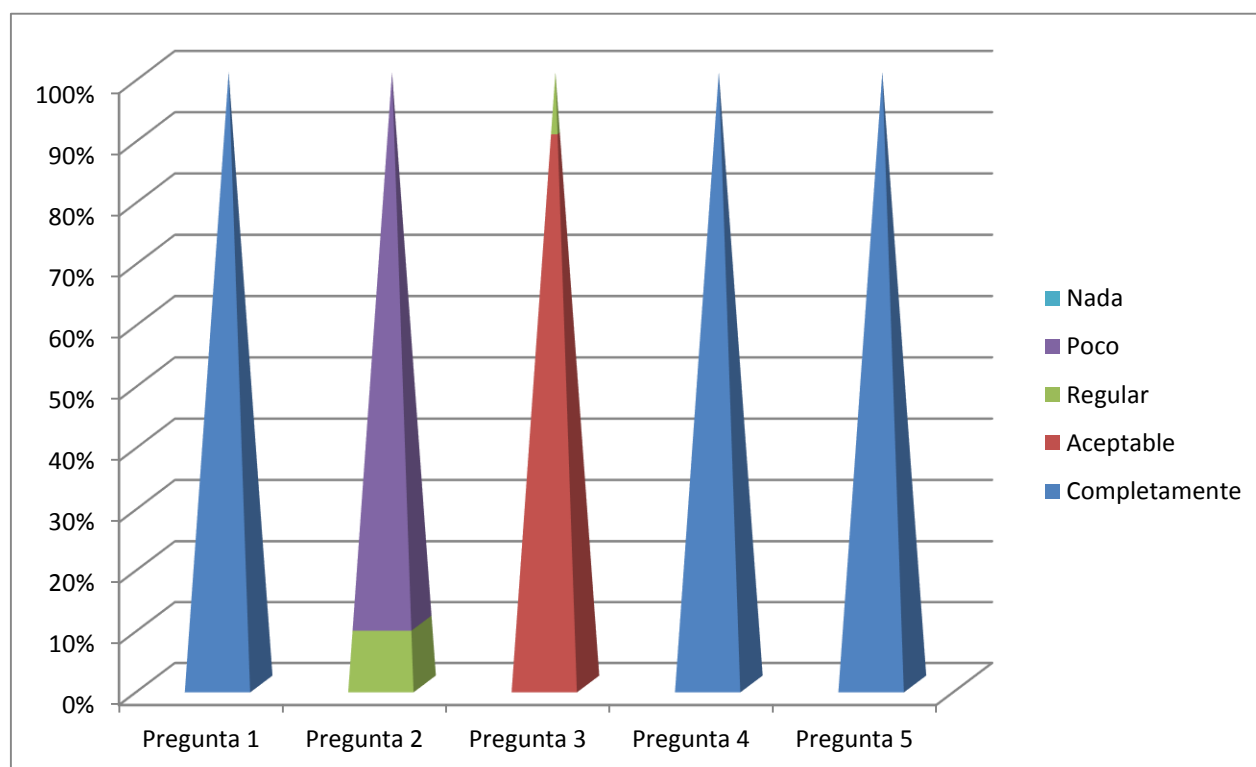
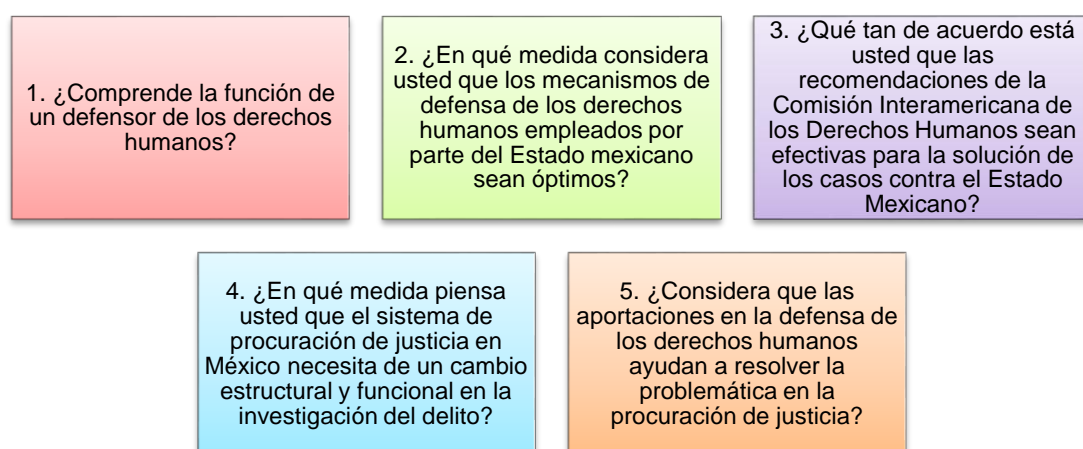
Cabe mencionar que, las recomendaciones emitidas por la CIDH influyen de manera trascendente en el mejoramiento del sistema penal mexicano, esto de acuerdo con la gráfica indican “definitivamente

si” en un 90% de los encuestados. Por lo cual, es importante la labor de este órgano en la procuración de justicia en los casos violatorios a los derechos humanos.

De acuerdo con el caso en estudio, se encuentra actualmente en un acuerdo de solución amistosa. Por lo que, la Comisión Interamericana solo solicite el estado actual del proceso e insta al Estado mexicano a cumplir lo estipulado en el pacto. Sin embargo, desde la firma del documento en el año 2008 no se ha podido consumir en su totalidad, debido a que el punto de esclarecimiento de los hechos sigue sin realizarse ninguna acción.

5.1.2 Cuestionario aplicado a Organizaciones No Gubernamentales en materia de Derechos Humanos

La presente muestra, fue aplicada al sector de las organizaciones no gubernamentales (en adelante ONG) (ver anexo 5), que son: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos y la Organización Interamericana de Derechos Humanos A.C. A continuación se mostrará una gráfica de los resultados obtenidos en el sondeo.



Respecto a la encuesta aplicada a las Organizaciones No Gubernamentales, se obtuvo que las acciones implementadas en la defensa de los derechos humanos de las víctimas así como el cambio estructural y funcional en las investigaciones de delitos, se indican un 100% en “completamente” en las acciones que realizan estas ONG y cambios en el sistema penal mexicano.

Cabe destacar que, el papel desempeñado por las ONG en asegurar un mayor acceso a la justicia a víctimas de abusos a los derechos humanos, ha enriquecido en los trámites tanto de casos contenciosos como en el marco de la función consultiva de la CIDH. El trabajo realizado en el proceso ante el sistema interamericano ha realizado:

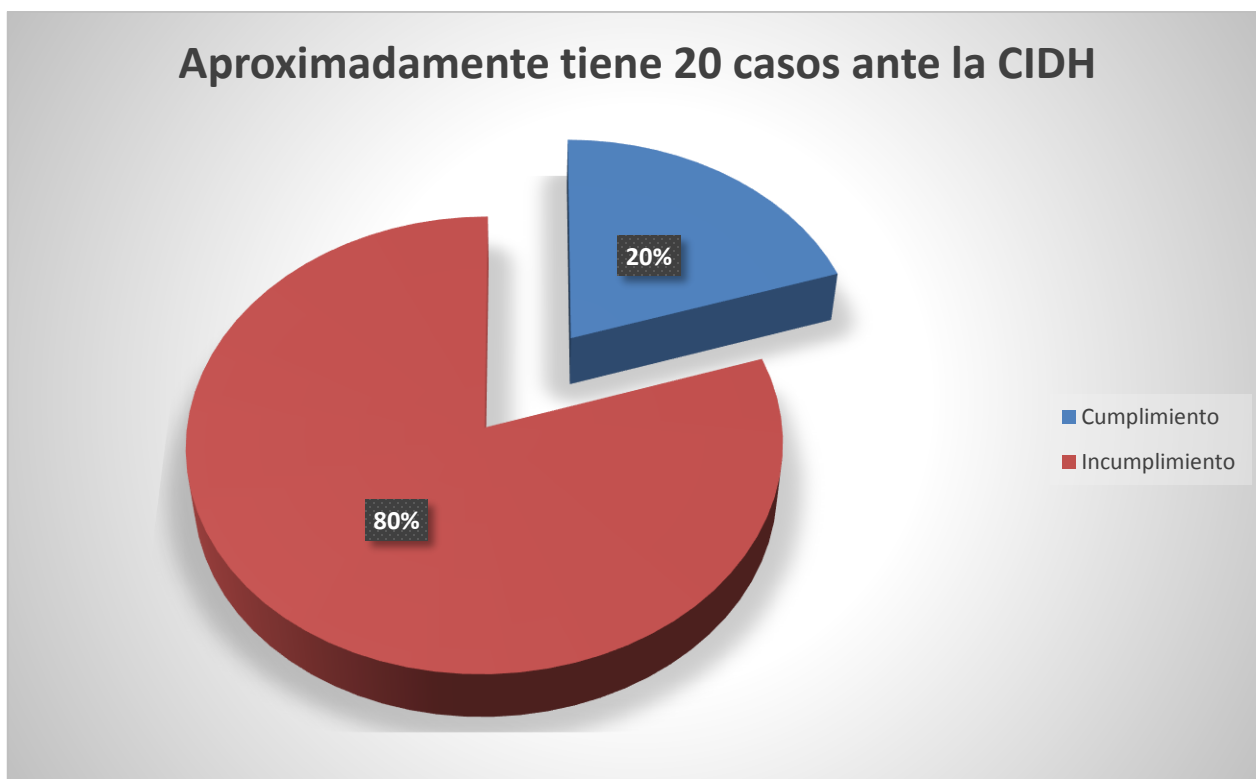
- La identificación de la situación de los derechos humanos de las víctimas
- En el seguimiento del caso ante el órgano interamericano, que pueda comprender la negociación de solución amistosa con los gobiernos.
- La instancia de medidas cautelares en favor de las víctimas.
- La solicitud a la CIDH de un informe final que recoja su pronunciamiento respecto de la responsabilidad del Estado y sus recomendaciones al mismo.
- La promoción del envío del caso a la Corte y la participación en el proceso ante el órgano.

La labor de las ONG ha sido un factor importante en los frecuentes casos similares al estudio de la presente investigación. Con el objetivo de promover el ajuste de la práctica y la legislación interna de los países de la región a las exigencias del derecho internacional de derechos humanos. Asimismo, asegurar la prevención de violaciones futuras.

5.1.3 Entrevista a un Servidor Público de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

Finalmente, el instrumento metodológico aplicado fue una entrevista al servidor público de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (ver anexo 6). Donde se mostró una parte de las funciones que realiza como parte del Estado mexicano, en la procuración de justicia de los casos en trámite ante la CIDH. Cabe señalar que, el presente estudio del Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón se encuentra en un Acuerdo de solución amistosa.

La conversación se enfocó principalmente en el seguimiento de casos en Acuerdos de solución amistosa, la cual expuso que, tiene como objetivo que el Estado concernido y las presuntas víctimas logren alcanzar un acuerdo, fuera de la vía contenciosa, y que permita la solución de la alegada violación de derechos humanos. Además, menciona los casos aproximados que tiene a su cargo y el estado de incumplimiento de los mismos, tal como se muestra en la siguiente gráfica:



Como respuesta a lo anterior, menciona algunas de las medidas entorno a este problema:



Respecto a las observaciones en la procuración de justicia en los casos en trámite ante la CIDH, expuso lo siguiente:

- En la mayoría de los acuerdos de solución amistosa, existe un inciso que refiere al esclarecimiento de los hechos. Es aquí donde el acuerdo no se concluye, debido a que existe deficiencia en la procuración y administración de justicia.
- La práctica de tortura y desaparición forzada en las investigaciones de algún delito.
- Existe falta de compromiso por parte de autoridades estatales y municipales.

En síntesis, el presente capítulo mostro tres ejes fundamentales entorno a la procuración de justicia de los casos en trámite ante la CIDH. Donde los peritos y servidores públicos aun presentan fallas en el sistema de investigación del delito así como en el seguimiento y protección de los derechos humanos de las víctimas. Por su parte, las organizaciones no gubernamentales, participan de manera activa en la defensa de estos derechos.

5.2 Recomendaciones para la Procuración de Justicia en la Violación a los Derechos Humanos del Caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

De acuerdo con el objetivo general de la investigación y el estudio realizado en las áreas que intervienen en el proceso de la procuración de justicia en México de los casos ante la CIDH, se realizarán las siguientes recomendaciones, en particular en el estudio del caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en el que presenta la práctica de tortura y desaparición forzada.

PRIMERA. Hacia los elementos policiales y ministerio público, establecer un plan de acción en cooperación entre autoridades federales y estatales en las investigaciones graves de violaciones a los derechos humanos. Donde tendrán que adoptar criterios técnicos-profesionales, descartando en todo momento el ámbito político.

SEGUNDA. Dirigida a las Organizaciones No Gubernamentales, las cuáles deben de realizar cambios estructurales para combatir sistemáticamente la violencia y la violación de los derechos fundamentales que sufren las víctimas en el proceso de investigación de algún delito.

TERCERA. Dirigida a las procuradurías tanto la general como las estatales para reconocer públicamente el papel que desempeñan las ONG en la protección de los Derechos Humanos.

CUARTA. Hacia los peritos, para asegurar que si existen actos de tortura que resultan documentados del examen médico independiente realizado de acuerdo con el Protocolo de Estambul, sean considerados en el juicio.

QUINTA. De lo anterior, el Estado mexicano deberá crear un Instituto Nacional Autónomo para Servicios Forenses, donde tendría las siguientes funciones:

- Prestar sus servicios a todas las partes, autoridades que intervienen en juicios federales y/o estatales, comisiones de derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales.
- Tener un registro nacional de los peritos en función.

- Capacitar constantemente y de manera obligatoria a todos los peritos en función así como a los elementos policiales, con relación a los protocolos de actuación en servicios forenses bajo estándares internacionales.

SEXTA. Hacia las procuradurías diseñar e implementar un proceso de búsqueda de personas desaparecidas. Planteando diversos supuestos de búsqueda tanto con vida como en muerte, así como desapariciones recientes y anteriores en el tiempo.

SÉPTIMA. Hacia las autoridades en la impartición de justicia deberán que, en los procedimientos de búsqueda, se permita el ingreso a cualquier entidad pública incluyendo a las instalaciones militares y policiales

OCTAVA. Dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública, Procuradurías y la Secretaría de Educación Pública, deberán establecer una Universidad Nacional Autónoma de Servicio Policial, con el fin de que los elementos policiales tengan un servicio profesional de carrera y estén capacitados en realizar sus funciones. Asimismo, esta universidad contará con profesores expertos en la materia, tanto nacionales como internacionales.

NOVENA. Dirigido al Gobierno Federal y Estatal, respecto a la contratación de los elementos policiales, estos deberán de cumplir con los requisitos esenciales para la función pública. Asimismo, el gobierno se deberá comprometa a otorgarles mejores prestaciones así como a su familia, en caso de tener hijos, brindarles becas de estudio.

CONCLUSIONES

La procuración de justicia con relación a las violaciones de los derechos humanos del caso 12.287 Cruz Ávila Mondragón en trámite ante la CIDH se determinó que, el sistema procesal continúa siendo deficiente y omiso en la implementación de protocolos internacionales, sobretodo en la práctica de la tortura y desapariciones forzadas. .

1. La procuración de justicia en la violación de los Derechos Humanos ha sido instaurada después de los conflictos armados, donde se estableció el Sistema Universal de Derechos Humanos, en particular en el Sistema Interamericano. A todos ellos, se crean una serie de instrumentos que garantizan, protegen y promueven estos derechos, formando el corpus iuris internacional.
2. El Nuevo Sistema Penal Acusatorio-Adversarial y Oral en México, es un reto para todos los servidores públicos encargados de investigar, vigilar, proteger y defender los Derechos Humanos. Cabe resaltar que, la comunidad internacional, en particular el sistema interamericano, ha realizado una serie de recomendaciones con base a los informes de las relatorías en ejes temáticos de vulneración de estos derechos, como es la práctica de la tortura y desaparición forzada.
3. La situación actual de la procuración de justicia se refleja tanto en el sistema interamericano como en el sistema mexicano. Donde se observa que, falta aún realizar acciones en la adopción de protocolos, instrumentos, manuales, entre otros, de estándar internacional. Debido a que, es el área donde se registra el mayor número de violaciones a los derechos humanos. Como es el caso del Ministerio Público junto con sus órganos auxiliares (peritos y elementos policiales).
4. De igual manera, para dar cumplimiento al objetivo general de la presente investigación, se realizaron encuestas a peritos y a organizaciones no gubernamentales, así como una entrevista a un servidor público en el área de defensa de los derechos humanos de la Secretaría de Gobernación. Con el fin de obtener los siguientes resultados:

- La falta de conocimiento con relación a la procuración de justicia de casos en trámite ante la CIDH así como la ausencia de una capacitación constante sobre el peritaje y la adopción de instrumentos internacionales en la práctica para el refuerzo de los conocimientos en la materia.
- La participación de las ONG son vitales en la defensa de los derechos de las víctimas, así como en la procuración de justicia en los casos en trámite ante organismos internacionales. De igual manera, observan la ineficiencia de los mecanismos implementados por el Estado mexicano.
- Por su parte, el Estado atiende los procesos que están en trámite ante estos organismos, en su caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y procura trabajar en equipo con los distintos niveles de gobierno con el fin de dar solución y sobretodo esclarecer los hechos de la víctima.

REFERENCIAS

Acuerdo A/057/2003 . (18 de Agosto de 2003). México: DOF.

Aguirre Beltrán, G. (1981). *La actividad del Santo Oficio de la Inquisición en Nueva España 1571-1700*. México: INAH.

Alcaide Fernández, J. (2009). El Sistema Africano de Derechos Humanos. En M. Ollé Sesé, L. Acebal Monfort, N. García Sanz, & e. al., *Derecho Internacional de los derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos*. (págs. 202-206). Madrid: Anthropos.

Amnistía Internacional. (3 de junio de 2015). *Siglos XVII y XVIII Las grandes declaraciones*. Obtenido de Amnistía Internacional, : <http://www.amnistiacatalunya.org/edu/es/historia/inf-s18.html>

Arranz Hernández, F. (29 de septiembre de 2015). *Francisca Arranz*. Obtenido de http://www.franciscaarranz.com/es/que_hacemos.html

Asamblea General de las Naciones Unidas. (17 de diciembre de 1979). *Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 34º período de sesiones*. Obtenido de Resolución 34/179: <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/34/179>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (9 de diciembre de 1975). *Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 30º período de sesiones*. Obtenido de Resolucion 3452 (XXX): [http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3452\(XXX\)](http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/3452(XXX))

Asamblea General de las Naciones Unidas. (20 de 12 de 1978). *Resoluciones Aprobadas por la Asamblea General durante el 33º período de sesiones*. Obtenido de Resolcución 33/173 : <http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/33/173&Lang=S>

Asamblea General de las Naciones Unidas. (10 de diciembre de 1984). *Resoluciones aprobadas por la Asamblea General durante el 39º período de sesiones*.

Obtenido de Resolución 39/46:
<http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/39/46>

Benítez Treviño, V. H. (1994). *Filosofía y Praxis de la Procuración de Justicia*. México: Porrúa.

Bourdieu, P. (2008). *Cuestiones de sociología*. Madrid: Istmo.

Brito, R., & Carbonell, M. (2011). La globalización y los derechos humanos, a la luz de la reforma constitucional de junio de 2011. *Revista de la Facultad de Derecho Mexicano*, 37-45.

Brody, R., & González, F. (1997). Nunca mas: an Analysis of International Instruments on Disappearances. *Human Rights Quarterly*, 19(9), 365-405.

Bustamante, C. M. (1844). *Cuadro Histórico Tomo Tercero*. México: Mariano La María.

Caballero Ochoa, J. L. (2011). La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución). En M. Carbonell, P. Salazar, & e. al, *La reforma constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma* (págs. 108-115). México: IU-UNAM.

Carbonell, M. (2005). *Historia de los Derechos Fundamentales*. México: UNAM-Porrúa_CNDH.

Carta de la Organización de los Estados Americanos. (13 de enero de 1949). México: DOF.

Caso Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia, 213 (Corte Interamericana de los Derechos Humanos 26 de 05 de 2010).

Caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, 912/2010 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 23 de noviembre de 2009).

Caso Velasquez Rodríguez vs Honduras, 24, Serie C (Corte Interamericana de Derechos Humanos 29 de julio de 1988).

- Castilla Juárez, K. (2011). Un nuevo panorama constitucional para el derecho internacional de los derechos humanos en México. *Estudios Constitucionales*, 124-125.
- Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC). (7 de julio de 2016). *Proyecto Justicia El macroproceso del Sistema Penal Acusatorio*. Obtenido de El macroproceso del Sistema Penal Acusatorio: <http://proyectojusticia.org/el-macroproceso-penal-acusatorio/>
- Código Nacional de Procedimientos Penales. (5 de Marzo de 2014). México: DOF.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1987). *Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1986-1987*. Obtenido de Capítulo V: <http://www.cidh.org/annualrep/86.87eng/toc.htm>
- Constantino Rivera, C. (2009). *Proceso Penal Acusatorio para Principiantes*. México: Magister.
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). México: Diario Oficial de la Federación.
- Convención Americana de Derechos Humanos. (7 de Mayo de 1981). México: DOF.
- Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. (1 de Septiembre de 1987). México: DOF.
- Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas . (6 de mayo de 2002). México: DOF.
- Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas . (6 de febrero de 2007). México: DOF.
- Córdova Vianello, L. (2011). La reforma constitucional de derechos humanos: una revolucion copernica. *Revista de la Faculta de Derecho de México*, 70-76.

- Correas, Ó. (2003). *Acerca de los Derechos Humanos. Apuntes para un ensayo*. México: Universidad Nacional Autónoma de México; Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencia y Humanidades; Coyoacán .
- Cruz Barney, O. (2004). *Historia del Derecho Mexicano*. México: Oxford.
- De Pina Vara, R. (2010). *Diccionario de Derecho*. México: Porrúa.
- Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. (26 de agosto de 1789). Francia: Asamblea Nacional Constituyente Francesa.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos. (10 de diciembre de 1948). Estados Unidos de América: Asamblea General.
- Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas. (4 de mayo de 2015). *Declaración Universal de los Derechos Humanos*. Obtenido de Historia de la Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: <http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml>
- Departamento de Información Publica de las Naciones Unidas. (4 de mayo de 2015). *Declaración Universal de los Derechos Humanos* . Obtenido de Historia de la Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: <http://www.un.org/es/documents/udhr/history.shtml>
- Derecho Romano. (10 de mayo de 2015). *Derecho Romano Ucasal*. Obtenido de Ley de las 12 Tablas: <http://derechoromanoucasal.blogspot.es/1210173360/#com>,
- Díaz Ricci, S. (2007). Interpretación Constitucional y Constitución en Konrad Hesse (in memoriam). *Asociación Argentina de Derecho Constitucional*, 65-71.
- Dulitzky, A. E. (2009). El Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En M. Ollé Sesé, L. Acebal Monfort, N. García Sanz, & e. al., *Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos* (págs. 194-201). Madrid: Anthropos.

- Erwin, S. (2004). *Derechos Humanos Historia, Fundamentos y Textos*. Nicaragua: Instituto Martin Luther King UPOLI.
- Fix Zamudio, H. (2004). *Función Constitucional del Ministerio Público, Tres ensayos y un epílogo*. México: Universidad Autónoma de México.
- García Ramírez, S. (2004). Visión Contemporánea de los Derechos Humanos. *Gaceta de la CNDH*, 143-149.
- García Sanz, N., & Acebal Monfort, L. (2009). El Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. En M. Ollé Sesé, L. Acebal Monfort, N. García Sanz, & e. al., *Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos* (págs. 63-71). Madrid: Anthropos.
- Gob.mx. (6 de abril de 2016). *Procuraduría General de la República*. Obtenido de ¿Qué hacemos?: <http://www.gob.mx/pgr/que-hacemos>
- Gómez Cotomer, J. L. (2008). *El sistema de enjuiciamiento criminal propio de un Estado de Derecho*. México: Universitat Jaume-Instituto Nacional de Ciencias Penales.
- González Gilarraz, M. (1996). *La administración de justicia ordinaria en la Edad Moderna en la Corona de Castilla: Procedimientos y tipos documentales*. Guadalajara: La investigación y las fuentes documentales de los Archivos.
- González Obregón, D. C. (2008). *Manual Práctico del Juicio Oral*. México: Ubijus.
- González, H. (11 de febrero de 2016). *Aristegui Noticias*. Obtenido de “La desaparición forzada en México, en nivel de crisis humanitaria”: Paula Mónaco Felipe: <http://aristeguinoticias.com/1102/lomasdestacado/la-desaparicion-forzada-en-mexico-en-nivel-de-crisis-humanitaria-paula-monaco-felipe/>
- González, M., & Castañeda, M. (2011). *La evolución histórica de Los derechos humanos en México*. México: CNDH.

- Grau, L. (2009). *Orígenes del constitucionalismo americano*. Madrid: Dykinson-Universidad Carlos III Madrid.
- Gudiño Pelayo, J. (1995). *El Estado contra sí mismo. Las comisiones de derechos humanos y la deslegitimación de lo Estatal*. México: Noriega.
- Guerrero Zazueta, A. (2015). *¿Existe un bloque de constitucionalidad en México? Reflexiones en torno a la Decisión de la Suprema Corte respecto al nuevo parámetro de control de regularidad?* México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Herrera Ortiz, M. (1993). *Manual de Derechos Humanos*. México: PAC.
- Hitters, J. C. (2009). Control de constitucionalidad y control de convencionalidad, comparación. *Estudios Constitucionales*, 112.
- Hormazábal Malareé, H. (2009). La desaparición forzada de personas. En M. Ollé Sesé, L. Acebal Monfort, N. García Sanz, & e. al., *Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos* (págs. 119-125). Madrid: Anthopos.
- Hormazábal Malarée, H. (2009). La desaparición forzada de personas. En M. Ollé Sesé, L. Acebal Monfort, N. Garía Sanz, & e. al, *Derecho Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos* (págs. 119-125). Madrid: Anthropos.
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía . (2011). *Política y Modelo General de Información de Gobierno Seguridad Pública, Procuración e Impartición de Justicia y Sistema Penitenciario*. Obtenido de [http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/PMGI%202011%20\(18Ene12\)V2.pdf](http://www.inegi.org.mx/inegi/spc/doc/INTERNET/PMGI%202011%20(18Ene12)V2.pdf)
- Lillian Goldman Law Library. (25 de septiembre de 2015). *The Avalon Project Documents Law, History and Diplomacy*. Obtenido de Nuremberg Trial

Proceedings Vol. 1 Charter of the International Military Tribunal:
<http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp>

López Díaz, M. (2007). *La administración de justicia señorial en el antiguo régimen*. Madrid: Anuario de Historia del Derecho Español.

Maldonado Sánchez, I. (2009). *La policía en el sistema penal acusatorio*. México: Palacio de Derecho.

Margadant S., G. F. (1971). *Introducción a la Historia del Derecho Mexicano*. México: UNAM.

Martínez Turcio, L. M., & Burgos Fetzner, E. (2008). *Manual de Derechos Humanos para Docentes de las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales*. Guatemala: Serviprensa, S.A.

Matteucci, N. (1998). *Organización del poder y libertad. Historia del constitucionalismo moderno*. Madrid: Trotta.

Medina Limón, B. (2001). La justicia como el instrumento de equilibrio del Estado de Derecho. En D. Valadés, & R. Gutiérrez Rivas, *Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional Tomo I* (págs. 327-336). México: UNAM-Porrúa.

Méndez, J., & Vivanco, J. M. (1990). Disappearances and the Inter-American Court: Reflections on a Litigation Experience. *Hamline Law Review*, 508-535.

Meneses, A. (2013). *Prohibición de la Tortura*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Molina Theissen, A. L. (3 de octubre de 2015). *La Desaparición Forzada de Personas en América Latina*. Obtenido de Ko'aga Roñe'eta, Serie VII: <http://www.derechos.org/koaga/vii/molina.html>

Muñoz Navarro, J. d. (2011). El Bloque Constitucional como parámetro del Control Constitucionalidad en México. *Revista Debate Social ITESO*, 12.

Museo de las Constituciones. (12 de septiembre de 2015). *Constitución de 1814*.
Obtenido de
<http://museodelasconstituciones.unam.mx/Museo/page14/page4/page4.html>

Museo de las Constituciones. (17 de septiembre de 2015). *Constitución de 1857*.
Obtenido de
<http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/Exposiciones/page14/page8/page8.html>

Museo de las Constituciones. (15 de septiembre de 2015). *Constituciones de 1836 y 1843*.
Obtenido de
<http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/Exposiciones/page14/page5/page5.html>

Museo de las Constituciones. (15 de septiembre de 2015). *La Constitución de 1824*.
Obtenido de
<http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/Exposiciones/page14/page3/page3.html>

Museo de las Constituciones. (17 de septiembre de 2015). *Leyes de Reforma*.
Obtenido de
<http://www.museodelasconstituciones.unam.mx/Exposiciones/page14/page9/page9.html>

Naciones Unidas. (22 de noviembre de 2015). *Derechos Humanos-Oficina del Alto Comisionado*. Obtenido de Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas:
<http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ConventionCED.aspx>

National Archives. (4 de junio de 2015). *La Carta de Derechos*. Obtenido de
<http://www.archives.gov/espanol/declaracion-de-derechos.html>

Oficina del Alto Comisionado. (6 de Julio de 2015). *Naciones Unidas Derechos Humanos*. Obtenido de Sus derechos humanos:
<http://www.ohchr.org/SP/Issues/Pages/WhatAreHumanRights.aspx>

- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2012). *Informe de Misión a México Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias*. México: Expo cuarzo.
- Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. (20 de Abril de 2016). *Protocolo de Estambul*. Obtenido de Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes: <http://www.pgjdf.gob.mx/temas/4-6-1/fuentes/11-A-7.pdf>
- Olivares Alonso, E. (5 de febrero de 2013). *La Jornada*. Obtenido de La guerra de Calderón contra el narco, causa del alza en la violencia y homicidios: <http://www.jornada.unam.mx/2013/02/05/politica/016n1pol>
- Olivares Alonso, E. (14 de febrero de 2014). *Desaparecer Femospf fue un mensaje de impunidad*. Obtenido de La Jornada: <http://www.jornada.unam.mx/2014/02/14/politica/005n2pol>
- Olson, G. (4 de marzo de 2014). *Excelsior*. Obtenido de Peña Nieto promulga el Código Nacional de Procedimientos Penales: <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/03/04/946816>
- Organización de los Estados Americanos. (14 de 12 de 1983). *Actas y Documentos Volumen I*. Obtenido de <http://scm.oas.org/pdfs/agres/ag03797S01.PDF>
- Pacheco Gómez, M. (2000). *Los Derechos Humanos documentos básicos*. Santiago: Jurídica de Chile.
- Pelayo Molle, C. M. (2012). *Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos*. México: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
- Pelayo Moller, C. M. (2012). *La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas*. México: Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
- Perry, A. (2002). *El Estado absolutista*. México: Siglo XXI.

Petition of Rights. (7 de junio de 1628). Reino Unido: Parlamento Inglés.

Pigrau Solé, A. (2009). Introducción al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En M. Ollé Sesé, L. Acebal Monfort, N. García Sanz, & e. al., *Derecho Internacional de los Derechos humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos* (págs. 19-32). Madrid: Athropos.

Presidentes.mx. (22 de octubre de 2015). *Los Presidentes de México*. Obtenido de Antonio López de Santa Anna: <http://presidentes.mx/presidentes/antonio-lopez-de-santa-anna/>

Rabasa, E. (2000). *Historia de las Constituciones Mexicanas*. México: UNAM.

Real Academia de la Lengua Española. (20 de octubre de 2015). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de Definición de estoicos.: <http://dle.rae.es/?w=estoicos&o=h>

Real Academia de la Lengua Española. (20 de octubre de 2015). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de Definición de Patricios: <http://dle.rae.es/?w=patricios&o=h>

Real Academia Española. (28 de 10 de 2015). *Diccionario de la Lengua Española*. Obtenido de Definición de cuneiforme: <http://dle.rae.es/?w=cuneiforme&o=h>

Rousseau, J. J. (1999). *El Contrato Social*. Toronto, Canadá: elaleph.

Santamaría Ibeas, J. (2001). *Los Textos Ingleses: Historia de los Derechos Fundamentales. vol. III*. Madrid: Dykinson-Universidad Carlos III.

Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA. (9 de diciembre de 1985). *Resoluciones de la Asamblea General (Períodos Ordinarios)*. Obtenido de AG/RES. 783 (XV-O/85): <http://www.oas.org/es/sla/docs/ag03799S01.pdf>

Sepúlveda, C. (2006). *Derecho Internacional*. México: Porrúa.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2006). *Sistema Jurídico Mexicano*. México: Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la SCJN.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. (2011). *Contradicción de Tesis 293/2011*. México: SCJN.

Taylor, M. (2009). Protección jurisdiccional de los DD HH en el Sistema Europeo. En M. Ollé Sesé, L. Acebal Monfort, N. García Sanz, & e. al., *Derechos Internacional de los Derechos Humanos: su vigencia para los Estados y para los ciudadanos* (págs. 179-188). Madrid: Anthropos.

Varios 912/2010, Caso Rosendo Radilla Pacheco (Poder Judicial de la Federación 14 de Julio de 2010).

Virtudes González, A. I. (2005). La representación procesal en el Derecho Romano: Origen y evolución histórica de la figura del Procurador. *Revista del Consejo General de Procuradores*, 42-48.

Anexo 1: Reforma Constitucional en materia Penal (2008)

DOF: 18/06/2008

DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.

FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

"LA COMISIÓN PERMANENTE DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN, EN USO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 135 CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACIÓN DE LAS CÁMARAS DE DIPUTADOS Y DE SENADORES DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASÍ COMO LA MAYORÍA DE LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS,

DECRETA:

SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querrela de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculcado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención.

Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley.

La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculcado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.

Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia.

Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.

Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido

con su defensor.

Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público y demás autoridades competentes.

Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación será penada por la ley.

En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.

Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.

Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes.

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.

Nadie puede ser aprehendido por deudas de carácter puramente civil.

Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres purgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.

La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente.

Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema, siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves.

Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren purgando penas en países extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá efectuarse con su consentimiento expreso.

Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.

Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculcados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.

Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso.

El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decreta la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.

Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculcado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.

Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

A. De los principios generales:

I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;

II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;

III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;

IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;

V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;

VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución;

VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculcado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculcado cuando acepte su responsabilidad;

VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;

IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y

X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa;

II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio;

III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.

La ley establecerá beneficios a favor del inculcado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;

IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley;

V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo.

En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculcado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibirse declaración o entrevistarlos. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa;

VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y

IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.

En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención.

C. De los derechos de la víctima o del ofendido:

I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;

II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.

Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia;

IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.

La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño;

V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.

El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y

VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.

La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial.

Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.

Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.

Tratándose de trabajadores no asalariados, la multa que se imponga por infracción de los reglamentos gubernativos y de policía, no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los supuestos y condiciones que fije la ley.

El Ejecutivo Federal podrá, con la aprobación del Senado en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

a) La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones.

b) El establecimiento de las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificado y registrado en el sistema.

c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos.

d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito así como de las instituciones de seguridad pública.

e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.

Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.

No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decreta una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:

I. Será jurisdiccional y autónomo del de materia penal;

II. Procederá en los casos de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas, respecto de los bienes siguientes:

a) Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aún cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió.

b) Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o

mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior.

c) Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo.

d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño.

III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la utilización ilícita de sus bienes.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. a XX. ...

XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.

...

...

XXII. ...

XXIII. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.

XXIV. a XXX. ...

Artículo 115. ...

I. a VI. ...

VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. Aquella acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

...

VIII. ...

...

IX. y X. ...

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

Apartado A...

Apartado B...

I. a XII. ...

XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.

XIII bis. y XIV. ...

Transitorios

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.

Segundo. El sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos

tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años, contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

En consecuencia, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de delito.

En el momento en que se publiquen los ordenamientos legales a que se refiere el párrafo anterior, los poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.

Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo.

Cuarto. Los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo sistema procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto.

Quinto. El nuevo sistema de reinserción previsto en el párrafo segundo del artículo 18, así como el régimen de modificación y duración de penas establecido en el párrafo tercero del artículo 21, entrarán en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.

Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de esta Constitución. Los procesos penales iniciados con fundamento en dichas legislaciones, así como las sentencias emitidas con base en las mismas, no serán afectados por la entrada en vigor de la legislación federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes antes de la entrada en vigor de esta última.

Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta materia.

Octavo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los estados y el órgano legislativo del Distrito Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.

Noveno. Dentro de los dos meses siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto se creará una instancia de coordinación integrada por representantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además del sector académico y la sociedad civil, así como de las Conferencias de Seguridad Pública, Procuración de Justicia y de Presidentes de Tribunales, la cual contará con una secretaria técnica, que coadyuvará y apoyará a las autoridades locales y federales, cuando así se lo soliciten.

Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la secretaria técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley.

Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y hasta por un máximo de cuarenta días.

Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculcado se sustraiga a la acción de la justicia.

México, D.F., a 28 de mayo de 2008.- Sen. **Santiago Creel Miranda**, Presidente.- Dip. **Susana Monreal Ávila**, Secretaria.- Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil ocho.- **Felipe de Jesús Calderón Hinojosa**.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, **Juan Camilo Mouriño Terrazo**.- Rúbrica.

Anexo 2: Conclusiones de la Jornada de Diálogo sobre la Efectividad de los Mecanismos de Búsqueda/Localización de Personas Desaparecidas.

**Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos**

CONCLUSIONES DE LA JORNADA DE DIÁLOGO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS MECANISMOS DE BÚSQUEDA/LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE SOLUCIÓN AMISTOSA EN EL “CASO 12.791 JESÚS ÁNGEL GUTIÉRREZ OLVERA”, SEGUIDO ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

ANTECEDENTES

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Grupo de Trabajo) fue el primer mecanismo temático de derechos humanos de las Naciones Unidas que recibió un mandato universal. Mediante la resolución 20 (XXVI) del 29 febrero de 1980, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas decidió establecer un Grupo de Trabajo compuesto por cinco miembros de la Comisión, en calidad de expertos y a título individual para examinar cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias.

Por medio de la resolución 47/133 de la Asamblea General, de 18 de diciembre de 1992, se aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas como conjunto de principios aplicables por todos los Estados.

Adicionalmente, el 23 de diciembre de 2010 entró en vigor la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

En enero de 2013, el número total de casos transmitidos por el Grupo de Trabajo a los gobiernos era de 53,986 y continuaban en estudio 42,889 por no haberse esclarecido o cerrado. En los últimos años el Grupo de Trabajo ha logrado resolver 298 casos.

El Grupo de Trabajo ha transmitido 505 casos al gobierno mexicano de los cuales 162 han sido esclarecidos. De esos 11 fueron enviados bajo procedimiento de urgencia, 6 siguen bajo el procedimiento ordinario, 3 recursos urgentes y 4 comunicaciones de pronta intervención.

En México por medio del Programa especial sobre los Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se publicó en 1990 un informe sobre los casos de presunta desaparición forzada de 532 personas, la mayoría de ellos data de 1970.

En su momento, en noviembre de 2001 se publicó el Acuerdo de creación de la Fiscalía especial para la atención de los hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, el cual fue abrogado mediante Acuerdo del 26 de marzo 2007, desapareciendo la Fiscalía pero no las investigaciones iniciadas con ese motivo, las cuales fueron distribuidas en diversas Mesas de trámite de la Procuraduría General de la República para su seguimiento.

En el ámbito regional, México ratificó en 2002 la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, en octubre 2010 se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, con la intención de ajustar la definición del tipo penal a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

La desaparición forzada de personas atenta contra el respeto universal y efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales, violenta dignidad de la persona y causa dolor e incertidumbre a los familiares y a la propia víctima. Es por ello, que no existe razón alguna que justifique la desaparición de personas.

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

El adecuado tratamiento de este tipo de violaciones implica la garantía y protección del Estado mexicano del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, ya que al tratarse de un acto continuo, este únicamente cesa al momento de encontrar a la persona o sus restos, independientemente de la sanción de los responsables de la violación de los derechos humanos.

En tal virtud México ha emprendido importantes esfuerzos para fortalecer y armonizar el marco jurídico nacional relacionado con personas desaparecidas y atención a sus familiares, con las obligaciones asumidas en tratados internacionales y regionales, así como para cumplir con las decisiones ya tender recomendaciones de organismos y mecanismos de protección de los derechos fundamentales.

II. INTRODUCCIÓN

El 14 de marzo de 2002, Jesús Ángel Olvera fue detenido arbitrariamente, torturado y desaparecido por parte de policías federales adscritos a la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI) y policías Judiciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

El 3 de julio de 2003, Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-México) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una denuncia por la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera cometida por agentes estatales de los Estados Unidos Mexicanos, así como la falta de investigación y reparación de los hechos denunciados, misma que fue registrada como la Petición 497-03.

El 1 de noviembre de 2010, mediante el Informe No. 147/10, la CIDH declaró la admisibilidad del caso registrado como 12.791 para efectos del examen sobre la presunta violación de los derechos consagrados en los artículos 1.1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; I, III y XI de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y, 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En febrero de 2011, la CDHF en calidad de representante de las víctimas conjuntamente con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron las observaciones sobre el fondo del caso por diversas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en perjuicio de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera y sus familiares.

Ya que en la Audiencia, los representantes del Estado mexicano señalaron total apertura para avanzar en el caso, el Relator Especial de la CIDH para México y sobre los derechos de las personas privadas de la libertad, Rodrigo Escobar Gil, planteó la posibilidad de una amigable conciliación que sirviera de paliativo a lo sufrido por los familiares de la víctima y como un modo de resarcir los problemas enfrentados hasta ese momento.

En ese sentido, el 4 de mayo de 2012 se firmó un acuerdo de solución amistosa entre el Gobierno de México, representado por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, y los representantes de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, en el caso “*12.791 Jesús Ángel Olvera vs México*”, seguido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El acuerdo de solución amistosa contempla que el Estado cumpla con las siguientes medidas: i) reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado por hechos establecidos en el Informe de Admisibilidad 147/10 emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 1 de noviembre de 2010; 2) reconocimiento del deber de investigar de forma diligente y efectiva los hechos motivo del caso; 3) reconocimiento del daño

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

causado a la víctima y sus familiares; y 4) realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública.

El Acto Público de Reconocimiento de Responsabilidad del Estado mexicano se llevó a cabo el 1 de octubre de 2012, encabezado por la y los entonces Titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales; el Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Max Diener Sala y del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Manuel Gómez Robledo, en presencia de la familia Gutiérrez Olvera y sus representantes ante el Sistema Interamericano.

Asimismo, y como parte de las garantías de no repetición que comprende el acuerdo de solución amistosa, los días 29 y 30 de agosto de 2012, en el marco del día internacional de las víctimas desapariciones forzadas, se llevó a cabo una *“Jornada de Diálogo sobre la Efectividad de Mecanismos de Búsqueda/Localización de Personas Desaparecidas”*.

La actividad se desarrolló específicamente en cumplimiento al punto 38 que a la letra señala:

“38. Ambas partes consideran necesario abrir el diálogo con la sociedad civil acerca de la efectividad de los mecanismos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada de personas, incluido el amparo, de conformidad con lo señalado por el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI). Por ello, se organizará un encuentro académico con las autoridades del Estado, incluyendo al poder legislativo y la sociedad civil, cuyas conclusiones serán publicadas y enviadas al H. Congreso de la Unión para su estudio en las comisiones competentes”.

El evento se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el propósito de abrir un espacio de debate para el fortalecimiento de los mecanismos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, a la luz de las recientes reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de la Ley de Amparo.

Dicho evento fue coordinado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (CONAVIM), la Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Al encuentro fueron convocadas 23 organizaciones de la sociedad civil, así como a representantes de organismos internacionales residentes en nuestro país, de organismos autónomos de derechos humanos y de dependencias gubernamentales (se anexa lista de invitados).

La jornada de diálogo fue inaugurada por el Emb. Juan Manuel Gómez Robledo; la Mtra. Dileya Samantha García Espinosa de los Monteros, Comisionada para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (coorganizadora y en representación del Lic. Max Alberto Dienes Sala, entonces Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB); Dr. Miguel Ontiveros Alonso, Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR; Dr. Luis Armando González Placencia, Presidente de la CDH-DF; Mtra. Alejandra Nuño, Directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional; y Sra. Leonor Olvera, madre de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera.

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

Los debates se organizaron en tres mesas de diálogo en las que se abordó el tema de la búsqueda de personas desde una perspectiva de derecho internacional e interno y concluyó con un taller sobre “Asignaturas pendientes y estrategias para la búsqueda/localización de personas en México”. La Mesa 1 se denominó “La búsqueda de personas en el derecho internacional y comparado”; Mesa 2 “Inventario de mecanismos de búsqueda y localización de personas desde la perspectiva del derecho mexicano y de las políticas institucionales federales y locales”; y Mesa 3. “El Juicio de Amparo en los casos de desaparición forzada de personas”.

En ese sentido y en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa, se remite al H. Congreso de la Unión el presente documento de conclusiones de la jornada para su estudio por parte de las comisiones competentes.

II. DESARROLLO DE LA JORNADA DE DIÁLOGO.

Mesa 1. “La búsqueda de personas en el derecho internacional y comparado”.

1. En esta mesa se debatió sobre la búsqueda de personas desde una perspectiva de derecho internacional y comparado, así como sobre los instrumentos y buenas prácticas para la búsqueda y localización de personas en diferentes tipos de situaciones.

Las presentaciones estuvieron a cargo del Mtro. Santiago Corcuera, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Barra Mexicana de Abogados; Mtro. Armando Meneses Larios, Asesor jurídico para México, América Central y Cuba del Comité Internacional de la Cruz Roja; y Mtro. Alan García, Oficial Nacional de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

2. El Mtro. Corcuera destacó que al hablar de desapariciones se debe tomar en cuenta la existencia de dos tipos: la desaparición llevada a cabo por un agente del Estado o por particulares que actúan con su autorización o aquiescencia y los actos análogos realizados por agentes no estatales y sin la autorización o aquiescencia del Estado. Reiterando que en cualquiera de los casos el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar a los responsables, de conformidad con los artículos 2 y 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada.
3. En este contexto, el Mtro. Corcuera realizó una exposición del origen humanitario de estas obligaciones, que se remontan al Grupo de Trabajo originado a partir de la Declaración de 1992 sobre desapariciones forzadas y en otros instrumentos jurídicos internacionales. A su vez, externó la necesidad de eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico nacional.
4. Asimismo, puntualizó las obligaciones internacionales que tiene el Estado mexicano en caso de ocurrir una desaparición forzada, a saber:
 - Es obligación del Estado brindar condiciones de seguridad y protección a la persona que denuncia y a no permitir la intimidación de las víctimas. El Estado está obligado a tomar la denuncia de inmediato y proceder a visitar el lugar donde se sospecha puede estar (artículo 12 Convención Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas). Sin embargo, señaló que actualmente no se le da acceso a la víctima a la denuncia, ni a la averiguación previa.
 - Obligación de buscar y localizar a la persona desaparecida (artículo 10 de la Convención).

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

- Comunicar los resultados o hallazgos de la investigación a las víctimas (artículo 24 de la Convención)
 - Considerar atenuantes de responsabilidad a favor de quienes cooperen efectivamente en la búsqueda de los desaparecidos.
 - Prohibición absoluta de realizar detenciones en centros clandestinos (artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos).
5. En cuanto a la búsqueda en México, señaló que es necesaria una cooperación entre los diferentes niveles de gobierno y entre las entidades federativas para la localización de menores y personas, ya que para que sean útiles los protocolos de seguridad para las víctimas deberá existir una efectiva cooperación institucional.
 6. Por otra parte, realizó un exhorto a que nuestro país reconozca la competencia del Comité establecido en el artículo 31 de la convención de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas, para recibir comunicaciones individuales.
 7. Asimismo, reiteró la importancia de la voluntad política para la efectiva búsqueda y localización de las personas desaparecidas de manera forzada.
 8. Finalmente, compartió experiencias de países como Colombia, Guatemala, Honduras, Timor Oriental y Chile.
 9. Por su parte, el Mtro. Armando Meneses Larios Meneses, se refirió a conclusiones en tema de desapariciones realizadas por el CICR las últimas dos décadas, particularmente al documento sobre las desapariciones forzadas y sus familiares y otro documento de la Unión Interparlamentaria en 2006 en el cual el CICR plantea una ley modelo que propone el CICR.
 10. De forma particular, aseguró que tratándose de desaparición forzada no importa, sino la consecuencia. aseguró que los Estados son los primeros responsables cuando hay una desaparición y que la simple ratificación de un instrumento internacional no implica su aplicación. Es necesaria la creación de mecanismos de implementación, a través de los que se capaciten y otorguen medios necesarios para la lucha en contra de las desapariciones forzadas.
 11. Finalmente, se refirió a las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y las reglas aplicables a la desaparición forzada. Evocó la Reunión de expertos en Ginebra en la que se analizaron cinco ámbitos: la prevención, el registro de los detenidos de manera inmediata, la averiguación de lo ocurrido, el derecho a ser informado y tratamiento de la información y restos humanos y el apoyo a familiares.
 12. El Mtro. Alan García enmarcó su exposición en cuatro obligaciones internacionales que tiene el Estado Mexicano en materia de búsquedas de personas desaparecidas: la obligación de adoptar medidas administrativas, legislativas, judiciales u otras para prevenir la desaparición; proceder de inmediato y realizar una investigación exhaustiva imparcial; el derecho a la reparación de las víctimas; y es el derecho a la verdad de las víctimas. Asimismo, se refirió a las recomendaciones del Grupo de Trabajo a partir de su reciente visita.
 13. Sobre la base de estas obligaciones y recomendaciones hizo referencia a algunas “mejoras prácticas” a nivel internacional para potenciar un sistema de búsqueda nacional. Señaló que la búsqueda está ligada al derecho a la justicia: los procesos de búsquedas deben satisfacer los derechos individuales y colectivos. De forma particular, los procesos de búsqueda, las investigaciones forenses, el esclarecimiento, la reparación de las víctimas y la responsabilidad de los autores.
 14. Afirmando que la transparencia es clave en los procesos de búsqueda debe garantizarse este derecho en términos que sean entendidos por los familiares, que los procesos de búsqueda también deben prestar

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

atención al contexto cultural, que en el enfoque de género es indispensable y buscar el interés superior de la víctima.

15. Los ponentes coincidieron en que es obligación del Estado iniciar la búsqueda de personas desaparecidas, independientemente del motivo por el cual hayan desaparecido (por situación de violencia; sea o no cometida por un funcionario público; conflicto armado; catástrofes naturales, entre otras). También que la búsqueda debe hacerse con base en un mecanismo que permita realizar investigaciones expeditas de los casos, toda vez que las primeras horas de desaparición son vitales para la localización, de igual forma, una vez encontrada la víctima, debe propiciar el encuentro inmediato con sus familiares.

Mesa 2. “Inventario de mecanismos de búsqueda y localización de personas desde la perspectiva del derecho mexicano y de las políticas institucionales federales y locales”.

16. En esta mesa, representantes de las instituciones gubernamentales encargadas de la procuración de justicia y de la seguridad pública expusieron los mecanismos respectivos para la búsqueda y localización de personas.
17. Participaron como ponentes: Lic. Víctor Hugo Pérez Hernández, Director General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal; Mtra. Patricia Bugarin, Titular de la Subprocuraduría de personas Desaparecidas o no Localizadas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito (PROVICTIMA); Lic. Francisco Carlos Trujillo Fuentes, Titular del Centro de Atención para personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) de la subprocuraduría de Atención a víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal; Dr. José Zamora Grant, Director General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR; Dra. María Elena Alegría y Escamilla, Directora General de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF); y Primer Oficial Arturo Michelet Hernández Flores, Director de Planeación Operativa de la SSPDF.
18. El Lic. Víctor Hugo Pérez Hernández señaló que el Registro Nacional de Personas Extraviadas (RENPE) es una herramienta que surgió con anterioridad a la “crisis de seguridad” que actualmente vive el país, tuvo originalmente su fundamento en la normatividad interior de la entonces Policía Federal desde su creación en el año 2002, y que se concibió como una herramienta de política criminal. Agregó que la herramienta se ha actualizado hasta nuestros días, según las recomendaciones internacionales.
19. Por otra parte, recordó que la nueva legislación establece que el Registro se transfiere al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que depende de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, señaló que la legislación en materia de violencia de género dio lugar a la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), que cuenta con expedientes electrónicos para cada mujer en situación de violencia salvaguardando la información personal recopilada por las instancias involucradas.
20. En su intervención, Mtra. Patricia Bugarin compartió el trabajo de PROVICTIMA, y se refirió a los tipos de víctimas: de secuestro, desaparición, trata, extorsión y homicidio. Señaló que PROVICTIMA acompaña a las familias de personas extraviadas o desaparecidas, brindando asesoría legal, atención psicológica y médica.
21. Compartió los problemas que PROVICTIMA ha identificado en materia de búsqueda, que se refieren a la efectividad de los mecanismos de búsqueda y al abanico importante y heterogéneo de recursos e instituciones existentes en cada entidad federativa. En este sentido, recomendó la creación de redes de información para compartir las mismas.

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

22. Manifestó que PROVICTIMA prevé la creación de protocolos de procedimientos de diligencias mínimas para Agentes del Ministerio Público en materia de búsqueda.
23. Por su parte, el Dr. José Zamora Grant explicó la nueva estructura de la PGR y algunos mecanismos en materia de búsqueda; precisó que la Subprocuraduría de Derechos Humanos no atiende a víctimas, sino que PROVICTIMA lo hace. Hizo un recuento del origen de los derechos humanos y del lugar central de la persona humana, y las consecuencias jurídicas de la Declaración Universal, particularizo el papel de las víctimas en el derecho penal.
24. Explico que hubo un cambio de paradigma con la reforma constitucional en materia de derechos humanos que pone a la víctima en un lugar primordial y coincidió con otros ponentes sobre el hecho de que las leyes deben ser materializadas en acciones concretas para ser eficaces.
25. El Lic. Francisco Carlos Trujillo Fuentes compartió la experiencia de la PGJDF en materia de búsqueda de personas. Explico que desde el inicio de la averiguación previa, se comienza la búsqueda de la persona ausente y también se proporciona un apoyo a las familias. Preciso que la averiguación se inicia sin necesidad de esperar un término para buscar a la persona. Señalo los mecanismos de difusión de información entre las autoridades y la importancia de la participación de la sociedad.
26. La Dra. María Elena Alegría y Escamilla habló de la parte operativa de la infraestructura de seguridad pública, que tiene presencia en toda la ciudad que va desde los elementos de seguridad hasta las cámaras de seguridad de responsabilidad y de control de manera mucho más cercana a la ciudadanía.
27. Finalmente, el Primer Oficial Arturo Michelet Hernández Flores expuso que, en cuanto la SSP tiene conocimiento del extravío, desaparición o sustracción se activa un músculo de logística que se divide en 5 zonas, 15 regiones, 75 sectores y 865 cuadrantes. 8,000 cámaras y 5,000 para el metro y las cámaras de tránsito en el Distrito Federal. También expuso el proyecto Alerta Amber y el Proyecto de Bicentenario.
28. Se destacó la existencia del RENPE, que forma parte de Plataforma México, que es un conjunto de bases de datos criminales que permite el cruce de información con otros delitos que puedan estar relacionados con el caso en cuestión. Para conocer a la información del RENPE, ingresar información de una nueva desaparición o aportar información sobre el paradero de una persona, se puede ingresar al Programa de Personas Extraviadas *Dar contigo*, situado en la página de la SSP.

Mesa 3. “El Juicio de Amparo en los caso de desaparición forzada de personas”

29. El propósito de esta mesa fue debatir sobre el juicio de amparo y el régimen civil y penal frente a las personas desaparecidas, así como sobre el fortalecimiento del juicio de amparo en caso de desaparición forzada a partir de la reforma constitucional en la materia, de otras reformas y de las implicaciones de la sentencia del caso Rosendo Radilla ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
30. Los ponentes fueron: Dr. Francisco Javier Dondé Matute, Profesor Investigador en el Instituto Nacional de Ciencias Penales; Dr. Fernando Coronado, Consultor Jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; Magistrado Juan Jose Olvera López, Suprema Corte de Justicia de la Nación; y Mtro. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, Director General de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
31. Dr. Francisco Javier Dondé Matute recordó los antecedentes del caso Campo Algodonero en materia de búsqueda de víctimas, destacando el deber que demanda la debida diligencia frente a denuncias de desaparición de mujeres, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días, y particularmente al Artículo 15 de la nueva Ley de Amparo, que permite incluso solicitar la suspensión del acto reclamado en ausencia del agraviado, ya que anteriormente los amparos promovidos contra

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

desapariciones forzadas se sobreseían debido a que se necesitaba la ratificación de la persona afectada de sus garantías individuales para continuar con el procedimiento.

32. Se refirió al derecho de cualquier persona para promover un amparo, los casos de desaparición no son la excepción, por lo que inclusive puede solicitarlo una tercera persona en su nombre. Adicionalmente, se señala como positivo el término de 24 horas para darle trámite al amparo, dictar la suspensión de los actos reclamados y requerir a las autoridades correspondientes toda la información que pueda resultar conducente para la localización y liberación de la probable víctima. Sin embargo, en su opinión se prevén algunos problemas ya que el juez no tiene poder de investigación.
33. Otro punto que critico es la disposición referente a requerir a las autoridades a investigar, recabar toda la información necesaria y liberar a la víctima, ya que en la práctica esto resulta muy difícil.
34. Concluyo que la nueva Ley de Amparo no es un recurso efectivo en los términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
35. Por su parte, el Magistrado Juan José Olvera López afirmó que el Juicio de Amparo puede contribuir de manera directa para los mecanismos de búsqueda, en dos vías: haciendo el ejercicio del amparo y a través del procedimiento penal, donde a pesar de ser una medida correctiva, la víctima participa activamente.
36. Señalo que la reforma ofrece actuar dentro de las 24 horas, lo que representa un retroceso ya que antes decía “de inmediato”. Compartió su experiencia desde la perspectiva del juicio de amparo por incomunicado con finalidad de que lo localicen.
37. Afirmando que el problema en México es que la víctima no tenía acceso al expediente, como en el caso de Radilla, ahora el juicio de Amparo es un recurso para las víctimas. Señalo que la reforma del año 2000, donde se incorporan los derechos de la víctima de manera formal no se llevaba a cabo en la práctica. En conclusión, señalo que la Amparo en el procedimiento penal es un instrumento para la participación de la víctima.
38. Durante su intervención, el Mtro. Juan Carlos Gutiérrez Contreras señalo que, desde la perspectiva jurídica y humana, el tema de la desaparición es muy complejo. Compartió el problema que representa el desconocimiento del número de personas desaparecidas, que en su punto de vista, revela una falta de sensibilidad política, capacidad y voluntad para investigar adecuadamente este tipo de delitos.
39. Insto a México a que se hagan acciones concretas en materia jurídica para que se retire la reserva a la Declaración Interamericana de Desaparición de Personas.
40. Se refirió a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, particularmente al acceso a los expedientes. Concluyo que “el Amparo no sirve para nada en desapariciones forzadas, mientras los jueces de amparo no tengan facultades de investigación”.
41. En la última intervención, el Dr. Fernando Coronado señaló que la desaparición forzada en nuestro país tiene los mismos niveles de impunidad que en la “Guerra Sucia”, recalcó la importancia del respeto al Poder Judicial, a la independencia de los jueces, particularmente los jueces federales.
42. Recomendó que es importante diseñar un procedimiento judicial para los casos en los que está amenazada la integridad de una persona. Se refirió a la necesidad de la existencia de información confiable para ser contrastable en materia de desaparición, así como la de una “comisión de verdad”.
43. Concluyó que es necesario que los jueces de Amparo ordenen la búsqueda de las personas, y que se debe dar potestades de investigación y actuación. La facultad de los jueces de amparo de ordenar la búsqueda de las personas.

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia
Dirección de Casos

III: CONCLUSIONES DE LA JORNADA DE DIÁLOGO

44. En las Jornadas se recordaron las obligaciones del Estado mexicano contenidas en los instrumentos internacionales sobre desapariciones forzadas y derechos humanos de los que México es Parte.
45. Se identificó que la cooperación entre los diferentes de gobierno y entre las entidades federativas es indispensable para la localización y búsqueda de personas.
46. Se reiteró la necesidad de contar con medidas legislativas que hagan mucho más eficaz la lucha del Estado contra la desaparición forzada, así como la búsqueda y localización de personas, al igual que la protección a los familiares de las personas desaparecidas.
47. Se destacó la importancia de contar con bases de datos efectivas como el RENPE y continuar trabajando en su mejora continua.
48. Se resaltaron las aportaciones que contempla la nueva Ley de Amparo en materia de lucha contra las desapariciones forzadas, al tiempo que se hizo un llamamiento a fortalecer las facultades de investigación, para que la Amparo sea un instrumento efectivo en el caso de las desapariciones forzadas.
49. En ese tenor se desarrolló la Jornada de diálogo sobre la efectividad de los mecanismos de búsqueda/localización de personas desaparecidas en cumplimiento del acuerdo de solución amistosa en el caso “12.791 Jesús Ángel Gutiérrez Olvera”. Esperando que las discusiones del evento aporten resultados concretos y sirvan al H. Congreso de la Unión para realizar cambios legislativos y a los ejecutivos tanto federales como estatales para diseñar políticas públicas que refuercen los mecanismos de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.
50. El gobierno de México continuará trabajando de manera incansable en la lucha contra la desaparición forzada de personas, en todos los ámbitos y niveles, y mantendrá un apertura al diálogo y coordinación de esfuerzos con organismos y mecanismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la protección de los derechos humanos y/o a la búsqueda de personas desaparecidas y apoyo a sus familiares.

Anexo 3: Acuerdo A/057/2003

(Segunda Sección)

DIARIO OFICIAL

Lunes 18 de agosto de 2003

ACUERDO número A/057/2003 del Procurador General de la República, mediante el cual se establecen las directrices institucionales que deberán seguir los Agentes del Ministerio Público de la Federación, los peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de la República, para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Procuraduría General de la República.

ACUERDO No. A/057/2003

ACUERDO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS DIRECTRICES INSTITUCIONALES QUE DEBERAN SEGUIR LOS AGENTES DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION, LOS PERITOS MEDICOS LEGISTAS Y/O FORENSES Y DEMAS PERSONAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, PARA LA APLICACION DEL DICTAMEN MEDICO/PSICOLOGICO ESPECIALIZADO PARA CASOS DE POSIBLE TORTURA Y/O MALTRATO.

MARCIAL RAFAEL MACEDO DE LA CONCHA, Procurador General de la República, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21 y 102, apartado "A" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, 9, 10, 11, 20, 22 y 54, fracciones II, IV y IX de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 1, 2, 5, 11, fracción VII, 12, fracción IV, 71 y 78 de su Reglamento, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, una de las políticas del Gobierno es la promoción de una cultura que consolide el respeto a los derechos humanos y repudie cualquier violación a los mismos;

Que dentro del Apartado de Orden y Respeto del instrumento programático antes mencionado se establece como Objetivo Rector 8 garantizar una procuración de justicia pronta, expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos;

Que entre las acciones diseñadas para dar cumplimiento al objetivo antes mencionado se encuentra la de crear un modelo de procuración de justicia que responda plenamente a las exigencias de eficacia y certeza jurídica, profesionalidad en el servicio, calidad en los procesos, plena legalidad en las operaciones y la investigación científica y técnica de los delitos con total respeto a los derechos humanos;

Que los artículos 20, fracción I, inciso b) y 22 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecen que los servicios periciales son auxiliares directos del Ministerio Público de la Federación y que actuarán bajo la autoridad y mando inmediato de aquél, sin perjuicio de la autonomía técnica e independencia de criterio que les corresponde en el estudio de los asuntos que se sometan a su dictamen;

Que el artículo 54, fracciones I, II, IV, IX y último párrafo de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece que los agentes del Ministerio Público de la Federación y los peritos de la Procuraduría General de la República tienen la obligación de prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas de algún delito, abstenerse en todo momento y bajo cualquier circunstancia de infligir, tolerar o permitir actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los cuales denunciarán inmediatamente ante la autoridad competente, y velar por la integridad física de las personas detenidas o puestas a su disposición;

Que de conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales es la encargada de operar y supervisar el funcionamiento de los servicios periciales de la Institución, de auxiliar al Ministerio Público de la Federación en la búsqueda, preservación y obtención de indicios y pruebas tendientes a la acreditación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, así como de emitir los criterios que deben observar los peritajes y realizar los mismos dentro del marco de la autonomía técnica;

Que entre las distintas disciplinas periciales, se encuentra la del médico legista y/o forense, cuyo objeto es practicar los estudios de necropsia, así como dictaminar sobre el estado físico y mental de las personas sujetas a declaración ministerial;

Que independientemente de la práctica de los reconocimientos y dictámenes periciales tradicionales para determinar la existencia de lesiones externas o internas producidas por algún delito diverso a la tortura, que se deben realizar conforme las disposiciones procesales aplicables, para estar en condiciones de distinguir las lesiones físicas y/o psíquicas producidas por tortura o maltrato por parte de las autoridades, es necesaria la

práctica de un dictamen especializado y que trasciende el carácter médico de los anteriores, al tener un enfoque multidisciplinario, que deberá realizarse bajo una metodología específica y más rigurosa que los dictámenes acostumbrados;

Que los peritos médicos legistas y/o forenses de la Institución han sido capacitados en las áreas de psicología y fotografía forense para complementar la información que requiere la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato de acuerdo con lo establecido por el "Protocolo de Estambul";

Que en el marco de la Agenda de Acciones Inmediatas en materia de Derechos Humanos del Gobierno Federal, la acción 34 señala como compromiso del Ejecutivo de la Federación, la expedición del Acuerdo por el cual el C. Procurador General de la República establece directrices y/o lineamientos institucionales de actuación, para la aplicación obligatoria, por parte del personal ministerial y pericial, del "Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato";

Que la Procuraduría General de la República, en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano en materia de Derechos Humanos, ha determinado implantar en forma obligatoria el "Protocolo de Estambul", mismo que fue adoptado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Lo anterior, en la inteligencia de consolidar acciones encaminadas a proteger la integridad psicofísica de las personas, en consonancia con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas y demás normativas del Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, ratificados por el Senado de la República;

Que para los efectos de garantizar la seguridad jurídica que demanda la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, así como para asegurar que la información ahí recabada no sea objeto de alteraciones o cualquier acción destinadas a tal propósito, es indispensable contar con formatos preestablecidos que incorporen medidas de seguridad que hoy ofrece la tecnología disponible;

Que de conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura se considera como tortura a los dolores o sufrimientos graves, sean físicos o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un tercero, información o una confesión, o castigarla por un acto que haya cometido o se sospecha ha cometido, o coaccionarla para que realice una conducta determinada;

Que el artículo 11 de la Ley mencionada en el párrafo anterior, impone al servidor público la obligación de denunciar un hecho de tortura del cual tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones;

Que los principios de inviolabilidad, autonomía y dignidad en que se sustenta el concepto de persona protegida por derechos humanos fundamentales contenidos en el orden jurídico mexicano, imponen un respeto absoluto a la integridad corporal y psíquica de todas las personas, por lo que se requiere adoptar las medidas necesarias para asegurar que los hechos que pudieran constituir tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sean identificados y erradicados, y

Que en cumplimiento de diversos instrumentos internacionales entre los que se encuentran las resoluciones 2000/32 y 2000/43 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, respecto del documento "25 acciones para combatir la tortura, derivadas de las recomendaciones dirigidas a México por los mecanismos Internacionales de Derechos Humanos", he tenido a bien expedir el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto instruir a los agentes del Ministerio Público de la Federación, a los peritos médicos legistas y/o forenses y demás personal de la Procuraduría General de la República, respecto de la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, en cualquier persona que alegue dichos abusos, así como establecer las directrices institucionales que rigen su implementación.

SEGUNDO.- Por Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato se entiende, el documento suscrito por peritos médicos legistas y/o forenses de la Procuraduría General de la República, a través del cual se rendirá al Ministerio Público de la Federación el resultado del examen médico/psicológico que se practique a cualquier persona que alegue dichos abusos, a efecto de documentar y correlacionar, en su caso, las manifestaciones de tortura y/o malos tratos con los hallazgos físicos y/o psicológicos.

TERCERO.- El agente del Ministerio Público de la Federación ordenará a los peritos médicos legistas y/o forenses la práctica del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando así lo denuncie cualquier persona que alegue haber sido objeto de tortura y/o maltrato; su representante legal o un tercero;
- b) Cuando a juicio del perito médico legista y/o forense que lleve a cabo el examen del detenido, existan signos o indicios de posible tortura y/o maltrato, y
- c) Cuando lo instruya el Procurador General de la República.

CUARTO.- El Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato se practicará con el consentimiento, expreso e informado, de la persona que alegue haber sido objeto de dichos abusos, para que sea revisada en su integridad psicofísica, de lo contrario, se hará constar su negativa en actuaciones de conformidad con las directrices establecidas por el "Protocolo de Estambul" en materia de examen y documentación de la tortura y/o maltrato.

QUINTO.- Para dar cumplimiento al artículo anterior, a la persona que alegue haber sido objeto de tortura y/o maltrato, a efecto de que otorgue su consentimiento expreso e informado al inicio del examen médico/psicológico, se le hará saber lo siguiente:

- a) El propósito del examen;
- b) La naturaleza de la evaluación, incluyendo una valoración de evidencia física y/o psicológica de posible abuso;
- c) La manera como será utilizada la información;
- d) La posibilidad de otorgar o negar su consentimiento para la práctica de la entrevista y el examen médico, y
- e) Del derecho a ser reconocido por un perito médico legista y/o forense y, a falta de éste o si lo requiere además, por un facultativo de su elección en los términos del artículo 7 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Dichos facultativos deberán contar con los conocimientos necesarios para la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.

SEXTO.- Cuando se lleve a cabo la práctica del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, deberán respetarse las siguientes salvaguardas:

- a) La persona deberá ser examinada en forma individual y privada. Los agentes del Ministerio Público de la Federación, policías federales investigadores o de cualquier otra corporación policial o de custodia no podrán estar presentes en la habitación donde se practique el examen médico/psicológico, salvo cuando a juicio del perito médico legista y/o forense examinador, la persona represente un riesgo para la seguridad del personal que realice dicho examen, en cuyo caso, no deberá ser el personal a quien se impute la tortura o el maltrato; dicha presencia deberá asentarse por el perito médico legista y/o forense responsable en el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.

En el caso de que el perito opine la existencia de lesiones posiblemente derivadas de tortura y/o maltrato, informará de inmediato al agente del Ministerio Público de la Federación, para que de manera oportuna practique el reconocimiento a que se refieren los artículos 169 y 170 del Código Federal de Procedimientos Penales, siempre que no esté imputado como partícipe de la tortura o maltrato. Si lo estuviere, se abstendrá de estar presente durante el reconocimiento, que realizará el agente de la Institución que asuma la investigación por este nuevo delito, sin que ello releve al agente imputado de la responsabilidad sobre el aseguramiento del detenido o la debida integración de la indagatoria primordial, y

- b) Cuando no haya perito médico legista y/o forense capacitado en el conocimiento y aplicación de la normatividad internacional contenida en el "Protocolo de Estambul" para la efectiva investigación y documentación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes en la Delegación de la Procuraduría General de la República de la entidad en donde actúe el agente del Ministerio Público de la Federación, éste deberá solicitar a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales o a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad le sea designado, a la brevedad, un médico legista y/o forense especializado en la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato.

SEPTIMO.- El perito médico legista y/o forense, o el perito fotógrafo deberá recabar impresiones de las lesiones visibles y de las áreas del cuerpo donde la persona examinada alegue haber sido torturada y/o maltratada, aun cuando dichas lesiones no sean evidentes. Si lo anterior no fuese posible, así se deberá asentar en el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato. En todos los casos de lesiones visibles, el perito médico legista y/o forense señalará en los gráficos con la silueta corporal contenidos en el Dictamen referido, la ubicación de las lesiones encontradas.

OCTAVO.- En caso de lesiones no evidentes al exterior en que la persona examinada presentara un cuadro clínico compatible con algún padecimiento orgánico o funcional que afecte su salud, los peritos médicos legistas y/o forenses deberán notificarlo inmediatamente al agente del Ministerio Público de la Federación. En su caso, deberán informarle, por escrito y a la brevedad, la necesidad de asistencia médica complementaria, interdisciplinaria u hospitalaria, para los efectos de su competencia.

NOVENO.- El formato del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato deberá reunir las siguientes especificaciones técnicas:

- a) Impresión del formato en papel seguridad;
- b) Impresión del formato con tinta fugitiva;
- c) Folio único seriado para cada formato;
- d) Holograma en tercera dimensión, en cuyo fondo aparecerá el Escudo de los Estados Unidos Mexicanos con el acrónimo PGR, así como el nombre del dictamen médico, y
- e) El Dictamen Médico/Psicológico Especializado estará embalado en sobre especial, sellado con el holograma referido en el anterior inciso d), conteniendo un formato en original impreso en hojas color blanco y cuatro copias impresas en hojas de colores azul, amarillo, rosa y verde, a efecto de que cada una le sea entregada a sus respectivos destinatarios en los términos del artículo Décimo Primero.

Se adjunta el formato autorizado de Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato como anexo único.

DECIMO.- Los formatos del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato deberán ser asignados a los peritos médico legistas y/o forenses para que sea aplicado en los términos del artículo Sexto del presente Acuerdo.

La Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales será responsable de distribuir los formatos de Dictamen Médico/Psicológico Especializado, cuidando que se asiente en el contrarrecibo la firma del perito respectivo, el número de formatos recibidos, así como los folios que correspondan a cada uno de ellos. Copia del registro de los recibos señalados deberá obrar tanto en la Dirección General antes citada como en la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

DECIMO PRIMERO.- La Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales llevará un control de los formatos para el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato utilizados. En dicho control se especificará el número de folio único del Dictamen Médico/Psicológico Especializado, así como los nombres del perito médico legista y/o forense y de la persona a la que se le aplique.

El formato original del Dictamen Médico/Psicológico Especializado deberá agregarse al expediente de la averiguación previa que la Representación Social de la Federación haya de iniciar por hechos de posible tortura y/o maltrato; lo anterior, en la inteligencia de que el resultado que arroje el Dictamen evidencie indicios suficientes para presuponer la existencia de tales ilícitos. De lo contrario, el original del Dictamen de referencia se agregará a las constancias de la indagatoria en que esté actuando la Representación Social de la Federación.

Asimismo, las copias a que se refiere el inciso e), del artículo Noveno del presente Acuerdo se entregarán, respectivamente, a la persona que alegue haber sido objeto de tortura y/o maltrato, su representante legal o quien aquélla designe; a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales; a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad; y, en su caso, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuando expresamente las solicite.

De conformidad con lo señalado por el "Protocolo de Estambul", los agentes de la Policía Federal Investigadora no tendrán acceso ni recibirán copia del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, salvo los designados para la investigación correspondiente o quienes tengan el derecho de consultar la averiguación previa.

DECIMO SEGUNDO.- En caso de que el Dictamen Médico/Psicológico Especializado se llegare a requisitar de forma errónea, éste se deberá cancelar levantando el jefe inmediato del perito la constancia administrativa respectiva, en la cual se especificarán los motivos que dieron lugar a la cancelación del documento. La constancia de cancelación, el formato erróneamente requisitado y sus respectivas copias, se remitirán a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales. Una copia de la constancia señalada se enviará a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad para el control y registro correspondientes.

DECIMO TERCERO.- Se crea el Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, el cual estará conformado de la siguiente manera:

- I. El Procurador General de la República;
- II. Los titulares de las Subprocuradurías;
- III. Los titulares de los órganos de control y vigilancia en la Institución;
- IV. El Director General de Coordinación de Servicios Periciales;
- V. Un representante del Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, y
- VI. Un representante del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, A.C., avalado por la Academia Nacional de Medicina.

Los suplentes de los servidores públicos que conforman el Comité, deberán ser del nivel jerárquico inmediato inferior al suplido.

Los miembros del Comité de origen externo deberán ser de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño ejemplar en el ámbito profesional y, fungirán honorariamente durante un año, pudiendo ser ratificados por otro año más.

DECIMO CUARTO.- Se crea el Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, el cual estará conformado de la siguiente manera:

- I. El Director Médico de Servicios Periciales;
- II. Dos médicos forenses representantes de instituciones académicas;
- III. Dos médicos forenses provenientes de instituciones forenses públicas;
- IV. Un médico forense del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense, A.C.;
- V. Dos médicos forenses de organizaciones no-gubernamentales, y
- VI. Un representante de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

Los miembros del Grupo Consultivo de origen externo deberán ser de reconocido prestigio, buena reputación y desempeño ejemplar en el ámbito profesional; dichos miembros serán propuestos por el presidente del Comité y aprobados por la mayoría del mismo y, fungirán honorariamente durante un año, pudiendo ser ratificados por otro año más.

DECIMO QUINTO.- El Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato será la instancia normativa de operación, control, supervisión, así como evaluación de dicho documento, teniendo al efecto las siguientes atribuciones:

- I. Verificar que el proceso de aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato se ajuste a las directrices institucionales establecidas en el presente Acuerdo;
- II. Crear mecanismos que permitan el eficaz monitoreo de aplicación y evaluación de todos los casos en que se emplee el Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato;
- III. Emitir directrices que permitan a las áreas administrativas y de profesionalización de la Institución, la capacitación continua del personal involucrado en la aplicación del Dictamen Médico/Especializado;

- IV. Elaborar reportes relacionados con las dificultades, obstáculos y deficiencias que haya implicado la documentación e investigación de casos de supuesta tortura y/o maltrato en la Institución, haciendo las sugerencias que resulten necesarias para resolver y enfrentar aquéllos;
- V. Diseñar, conjuntamente con la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales y la Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección, programas de difusión y educación para promover entre el personal de la Institución y la sociedad en general, el conocimiento del Dictamen Médico/Psicológico Especializado y su utilidad, así como promover la generación de una cultura en favor del respeto a los derechos humanos que permita erradicar la tortura y el maltrato;
- VI. Adoptar las acciones necesarias para formalizar ante los órganos de control y vigilancia de la Institución, las denuncias de los casos de irregularidad detectadas por el Comité en su labor de verificación del proceso de aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado;
- VII. Conocer de los informes que, en el ámbito de su competencia, le remita el Grupo Consultivo;
- VIII. Elegir a los miembros externos del Grupo Consultivo que le sean propuestos por el Presidente del Comité, y
- IX. Publicar un informe anual que dé cuenta de sus actividades, las acciones y resoluciones adoptadas.

DECIMO SEXTO.- El Grupo Consultivo del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato se constituye como un órgano auxiliar de naturaleza técnica dirigido a:

- I. Evaluar la calidad de la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato en cada uno de los casos en que hayan intervenido tanto los peritos legistas y/o forenses de la Institución como los facultativos convocados en términos del inciso e), del artículo Quinto del presente Acuerdo. Para tal evaluación, el Grupo Consultivo empleará como parámetros el "Protocolo de Estambul" y las directrices y principios establecidos en este Acuerdo;
- II. Reportar al Comité los resultados que arroje la evaluación de los expedientes analizados y, de ser el caso, de las irregularidades detectadas, y
- III. Asesorar al Comité sobre los aspectos técnicos, científicos y profesionales del área forense relacionados con los distintos aspectos que conlleva la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado.

DECIMO SEPTIMO.- El funcionamiento del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato, se sujetará a las bases siguientes:

- I. El Comité será presidido por el Procurador General de la República o en sus ausencias por quien éste designe. El Presidente del Comité tendrá las siguientes facultades:
 - a. Presidir y dirigir las sesiones del Comité;
 - b. Acordar la convocatoria a sesiones del Comité, que serán notificadas cuando menos con 48 horas de anticipación a sus integrantes;
 - c. Someter a consideración del Comité los nombres de los miembros externos que habrán de formar parte del Grupo Consultivo, y
 - d. Las demás que sean necesarias para el buen funcionamiento del Comité.
- II. El Secretario Técnico del Comité será el Director General de Coordinación de Servicios Periciales y tendrá las facultades siguientes:
 - a. Representar al Comité ante cualquier autoridad judicial o administrativa para todos los efectos legales a que haya lugar;
 - b. Formular las convocatorias a sesiones del Comité, previo acuerdo de su Presidente;
 - c. Integrar los expedientes de los asuntos que deban ser tratados en el seno del Comité;
 - d. Dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité y del Grupo Consultivo e informar sobre su cumplimiento;
 - e. Registrar los asuntos, acuerdos y resoluciones del Comité, así como conservar su archivo, y
 - f. Las demás que le otorgue el Presidente del Comité.

- III. Para que las sesiones del Comité sean válidas se requiere la presencia de la mitad más uno de sus miembros;
- IV. El Comité sesionará cada seis meses, o bien las veces que resulte necesario a petición de cualquier miembro del Comité, previo acuerdo de su Presidente;
- V. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad, y
- VI. De las resoluciones del Comité se levantará acta por escrito que será firmada por su Presidente y el Secretario Técnico.

DECIMO OCTAVO.- El Grupo Consultivo ajustará su funcionamiento a las siguientes reglas:

- I. Las sesiones serán presididas por el Director Médico de Servicios Periciales de la Institución o en sus ausencias por quien éste designe;
- II. Los miembros del Grupo Consultivo seleccionarán entre sus miembros a un Secretario quien notificará de las convocatorias, elaborará el orden del día de las sesiones; registrará y dará seguimiento a los acuerdos adoptados;
- III. El Grupo Consultivo sesionará cada tres meses, o bien las veces que resulte necesario a petición de cualquiera de sus miembros, o a solicitud del Comité;
- IV. Los informes y los reportes elaborados por el Grupo Consultivo serán firmados por quienes funjan como Presidente y Secretario, respectivamente;
- V. Para que las sesiones del Grupo Consultivo sean válidas se requiere la presencia de la mitad más uno de sus miembros;
- VI. Las decisiones del Grupo Consultivo se adoptarán por mayoría simple de los miembros presentes. En caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad, y
- VII. El Grupo Consultivo se reunirá con el Comité dos veces por año o cuando éste así lo solicite. En una de dichas sesiones, el Grupo Consultivo, a través de su Presidente rendirá un informe de actividades. A esta sesión se invitará a representantes de organismos no gubernamentales nacionales y extranjeros; de los órganos del sistema regional y universal de protección y promoción de los derechos humanos, en especial, a algún miembro del Comité de Tortura de la ONU y al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

DECIMO NOVENO.- Al servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura y no lo denuncie inmediatamente, se le iniciará averiguación previa en términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura. Si el servidor público tuviese conocimiento de un caso de maltrato y no lo denunciare inmediatamente, se dará vista a los órganos de control y vigilancia de la Institución.

VIGESIMO.- Los servidores públicos de la Institución deberán proveer en la esfera de su competencia lo necesario para la estricta observancia, debida difusión y aplicación de este Acuerdo.

VIGESIMO PRIMERO.- Se instruye a los Subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, de Investigación Especializada en Delitos Federales y de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad; al Titular de la Agencia Federal de Investigación; al Director General de Coordinación de Servicios Periciales, así como a los Delegados y Subdelegados de la Procuraduría General de la República en las entidades federativas, para que supervisen la correcta aplicación del presente Acuerdo y, en caso de incumplimiento, tomen las medidas necesarias para que se suspenda la violación al mismo y lo notifiquen a la Visitaduría General de la Institución.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor treinta días naturales después de su publicación en el **Diario Oficial de la Federación**.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D.F., a 14 de agosto de 2003.- El Procurador General de la República, **Marcial Rafael Macedo de la Concha**.- Rúbrica.



PROCURADURÍA GENERAL
DE LA
REPÚBLICA

**DIRECCION GENERAL DE COORDINACION
DE SERVICIOS PERICIALES
DEPARTAMENTO DE MEDICINA FORENSE**

A.P.

No. FOLIO

(Lugar y Fecha)

**DICTAMEN MEDICO/PSICOLOGICO ESPECIALIZADO
PARA CASOS DE POSIBLE TORTURA Y/O MALTRATO**

Lic.: _____

(Nombre del AMPF y su adscripción)

PRESENTE

Los que suscriben, Peritos Médicos Forenses, adscritos a la Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales de esta Procuraduría, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 102 apartado "A" de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 220, 220 bis, 223, 225 y 226 del CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; 20 y 22 de la LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; 71 de su REGLAMENTO; y con base en el Acuerdo A/057/2003 expedido por el C. Procurador General de la República, emiten el presente DICTAMEN, el cual se aplica bajo la supervisión colegiada de la *Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad* de esta Institución, conforme a lo establecido en los artículos 2o., 40 y 41 del REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

En caso de necesitar mayor espacio para requisitar los incisos y numerales del presente dictamen, favor de utilizar las hojas que se anexan al final. Asimismo, deberán cancelarse con una cruz o con la leyenda "cancelado" todos los espacios o incisos que no sean empleados.

1. **SOLICITUD DEL DICTAMEN:** Además de los Agentes del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, cualquier detenido o reo, el defensor de dicha persona o un tercero, también podrán solicitar el reconocimiento médico-psicológico.

Anotar en la línea que está en blanco el nombre, cargo, institución y domicilio particular, oficial y laboral del solicitante examinado.

C. _____

2. **PRESENTACION DE LA PERSONA:**

Quien va a ser examinado se presenta en compañía de las siguientes personas:

Documentar nombre, cargo, institución, número de gafete o identificación de los acompañantes.

- 2.1 _____
- 2.2 _____
- 2.3 _____
- 2.4 _____

3. RESTRICCIONES O LIMITACIONES EXISTENTES DURANTE LA EVALUACION:3.1 Dictamen llevado a cabo en una persona bajo custodia: Sí ☐ No ☐

3.2 Personas presentes durante el examen:

Salvo en casos excepcionales, los peritos forenses, durante la evaluación, solicitarán el retiro de todas las personas presentes así como las que tengan acceso a la persona examinada. Antes de proceder con la evaluación, los peritos forenses documentarán el nombre, cargo, institución, número de gafete o cédula profesional, y la firma de todas aquellas personas que permanezcan presentes durante la evaluación o con acceso a la persona examinada.

Nombre	Cargo/Institución	Número de gafete o cédula profesional	Firma
1.			
2.			
3.			
4.			

4. DATOS GENERALES INFORMATIVOS DE LA PERSONA EXAMINADA:

Los peritos forenses solicitarán una identificación para corroborar la identidad de la persona que va a ser examinada, cuya copia de dicho documento se anexará a este dictamen. De no contar con un documento de identificación, los peritos forenses retratarán a la persona examinada, anexando la fotografía a este dictamen.

A las _____ horas, del día _____ de _____ de _____, tuve a la vista en _____ a una persona que dijo llamarse: _____

4.1 Sexo:	4.2 Fecha de nacimiento (día, mes, año):
4.3 Nacionalidad:	4.4 Estado Civil:
4.5 Originario de:	4.6 Radicado en:
4.7 Escolaridad:	4.8 Ocupación:
4.9 Religión:	4.10 Documento de identificación de la persona examinada: Número:
4.11 De origen étnico minoritario: Sí <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	4.12 Nombre de la etnia:
4.13 Idiomas que habla la persona examinada: Lengua materna: _____ Domina el español: Sí <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4.14 Nombre del intérprete, en caso de que la persona examinada no hable o domine el español.	

5. CALIFICACIONES DE LOS PERITOS MEDICOS:

Marque todos los que le apliquen:

5.1 Primer perito (nombre): _____

Cédula profesional (); credencial de perito oficial ();
otros ();

formación psicológica/psiquiátrica (); experiencia en documentar signos de tortura y/o malos tratos; experiencia regional en materia de derechos humanos en relación con la investigación y documentación (); publicaciones sobre el tema (); presentaciones y cursos de formación sobre el tema ().

5.2 Segundo perito (nombre): _____

Cédula profesional (); credencial de perito oficial ();
otros (); formación psicológica/

psiquiátrica (); experiencia en documentar signos de tortura y/o malos tratos; experiencia regional en materia de derechos humanos en relación con la investigación y documentación (); publicaciones sobre el tema (); presentaciones y cursos de formación sobre el tema ().

6. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA PERSONA EXAMINADA:

LOS PERITOS MÉDICOS EXPLICARÁN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1. Identificación y afiliación laboral de los médicos
2. Propósito de la evaluación médico-psicológica
3. Límites de la confidencialidad
4. Beneficios de la evaluación médico-psicológica
5. Derecho a rehusar la evaluación, a una segunda opinión, o a una evaluación por un médico de su preferencia

Si los peritos médicos consideran que la persona examinada se encuentra en un estado mental que no permite obtener un consentimiento para la evaluación, tales como la intoxicación alcohólica o el delirio, éstos deberán documentar el estado mental de la persona y procederán con el examen físico, así como con la documentación fotográfica y la recolección de muestras para análisis forense. Asimismo, documentarán los hallazgos que puedan ser temporales. Los médicos completarán la evaluación una vez que el individuo se encuentre en condiciones de otorgar su consentimiento.

Acepta la realización de la entrevista y la exploración médico-psicológica:

Sí ☐ No ☐

Si la respuesta es negativa, explique:

7. ANTECEDENTES DE LA PERSONA EXAMINADA:

7.1 Antecedentes médicos, quirúrgicos, ortopédicos y/o gineco-obstétricos (incluir medicamentos que la persona examinada toma actualmente): _____

7.2 Antecedentes psicológicos y sociales previos: (si es el caso, incluir historia de adicciones y/o uso de sustancias): _____

7.3 Análisis del expediente clínico, si éste existiere, de exámenes médicos anteriores, incluidos certificados de integridad física y dictámenes médico-forenses preexistentes: _____

8. HECHOS REFERIDOS POR LA PERSONA EXAMINADA:

8.1 Descripción general de los hechos:

Se deben incluir datos generales de los hechos, tales como tipos de abuso físico, psicológico y/o sexual; los nombres y el número de personas que supuestamente cometieron los abusos (si los sabe); circunstancias asociadas con la presentación o detención tales como orden de comparecencia, de detención o de cateo y si hubo resistencia física durante la detención; cronología y lugares donde los hechos ocurrieron, incluidas fechas y horas aproximadas (si los sabe).

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins or other markings on the paper.

8.2 Descripción detallada de las circunstancias de la presentación y/o detención, así como de los lugares de detención o confinamiento:

Se incluirán datos específicos tales como presencia de otras personas que han sufrido abuso físico-psicológico, descripción de los lugares de detención, descripción de los modos de transporte, acceso a servicios sanitarios, acceso a parientes o abogados, confinamiento solitario, etc.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

8.3 Descripción detallada por la persona examinada de los métodos de abuso físico, psicológico y/o sexual a los que fue sometido, incluyendo instrumentos u objetos empleados:

8.4 Exploración de otros métodos de tortura y/o maltrato:

Después de la narrativa, hacer una exploración de otros métodos de tortura considerando la siguiente lista: trauma contuso, posiciones forzadas, quemaduras, choques eléctricos, asfixia, presión, compresión o machacamiento, heridas penetrantes, maniobras erótico-sexuales o ataque sexual, amputaciones, aplicación, ingesta o introducción de drogas y enervantes, alcohol, etc., confinamiento solitario, condiciones no higiénicas del lugar de detención o confinamiento, negación de alimentos y agua, condiciones extremas de temperatura, sobrestimulación e inhibición sensoriales, humillaciones, amenazas, técnicas psicológicas como la desesperanza aprendida, coerción, violación de valores culturales y forzar a participar en actos de tortura.

9. SÍNTOMAS E INCAPACIDADES (AGUDOS Y CRÓNICOS) RELACIONADOS CON LOS HECHOS DESCRITOS POR LA PERSONA EXAMINADA:

9.1 Exploración de síntomas agudos/inmediatos relacionados con los actos de tortura; incluir una descripción de los tratamientos recibidos:

9.2 Exploración de síntomas crónicos relacionados con los actos de tortura; incluir una descripción de los tratamientos recibidos:

9.3 Incapacidades funcionales después de los actos de tortura:

10. INSPECCION GENERAL Y/O EXAMEN FISICO:

La descripción debe seguir las directrices generalmente aceptadas para exámenes físicos. Toda lesión, reciente o no reciente, secuela, estigma, signo, huella, relacionada o no con los hechos descritos por la persona examinada, será observada y descrita metodológicamente en el dictamen pericial. Si es relevante con el caso, también se dejará constancia de la ausencia de huellas, lesiones o hallazgos. El reporte se hará de la manera o forma descriptiva habitual que incluirá: tipo y número de lesiones, ubicación anatómica, forma, color, planos anatómicos involucrados, dimensiones, dirección, magnitud, consecuencias, cronología de realización y objeto vulnerante de producción. Todo hallazgo físico o característica morfológica, se debe numerar y documentar tanto de manera gráfica así como con fotografías. Dicha numeración se correlacionará con los diagramas respectivos.

10.1 Apariencia general (incluir signos vitales, señas particulares):

10.2 Piel:

10.3 Cara y cabeza:

10.4 Ojos, oídos, nariz y garganta:

10.5 Cavidad oral/dentadura:

10.6 Tórax/espalda/abdomen:

10.7 Sistema genito/urinario (incluyendo examen pélvico, perineo, ano y recto):

10.8 Sistema músculo-esquelético:

10.9 Sistema nervioso (central y periférico):

11. EXAMEN MENTAL Y EVALUACION PSICOLOGICA:**11.1 Estado mental:**

Documentar apariencia; estado de ánimo, afecto, estado de conciencia, orientación en tiempo, espacio y persona, atención, concentración, memoria reciente y remota, razonamiento y contenido lógico, lenguaje y escritura, presencia o ausencia de alucinaciones auditivas o visuales y/o delirio, presencia o ausencia de ideas suicidas/homicidas.

11.2 Padecimientos psicológicos actuales (reportados y/o observados):

Documentar la presencia o ausencia de síntomas comúnmente encontrados en personas que sufrieron tortura y/o maltrato. *Síntomas depresivos* (tomado del *Cuestionario de Síntomas de Hopkins*): 1. Sentirse sin energía o decaído;

2. Culparse a sí mismo por cosas que pasan; 3. Llorar con facilidad; 4. Pérdida del interés o placer sexual; 4. Pérdida del apetito; 5. Dificultad para conciliar el sueño; 6. Desesperanza en el futuro; 7. Sentirse triste; 8. Sentirse solo;

9. Pensando ideas suicidas; 10. Sentirse atrapado, sin salida; 11. Preocuparse mucho; 12. Sentirse sin ánimo para hacer cosas; 13. Sentirse que todo requiere un gran esfuerzo; 14. Sentirse que no vale nada como persona; 15. Pensar que es mejor no seguir viviendo.

Síntomas del Trastorno de Estrés Postraumático y Ansiedad (tomado del *Cuestionario de Trauma de Harvard*): 1. Recordar los acontecimientos terribles y dolorosos; 2. Revivir esos acontecimientos; 3. Tener pesadillas; 4. Sentirse aislado; 5. Incapaz de experimentar emociones; 6. Sentirse inquieto, se sobresalta fácilmente; 7. Problemas para concentrarse; 8. Problemas para dormir; 9. Sentirse amenazado, en guardia; 10. Sentirse irritable o tener episodios de rabia; 11. Evita recordar los acontecimientos terribles y dolorosos; 12. Dificultad para acordarse de los acontecimientos terribles y dolorosos; 13. Sentir menos interés para realizar las actividades diarias; 14. Sentirse como si no tiene futuro, desesperanzado; 15. Evita pensar o sentir cosas relacionadas con los acontecimientos terribles y dolorosos; 16. Experimenta reacciones físicas o emocionales cuando se acuerda de los acontecimientos terribles y dolorosos; 17. Sentirse incomprendido; 18. Tiene dificultades para realizar sus actividades diarias; 19. Sentirse culpable por las cosas que pasaron; 20. Sentirse culpable por haber sobrevivido; 21. Sentirse desesperanzado; 22. Avergonzado por esos acontecimientos terribles y dolorosos; 23. Pensar en el porqué de los eventos sucedidos; 24. Sentirse como si estuviera volviéndose loco; 25. Sentirse como la única persona a la que le han sucedido estos eventos; 26. Siente como si todas las personas están en su contra; 27. Siente que no puede confiar en nadie; 28. La gente le rememora de hechos que vivió pero que no recuerda; 29. Sentirse como dividido en dos entes; 30. Sentirse como que alguien de confianza lo traicionó.

11.3 Antecedentes psicológicos posteriores a los actos de tortura:

Documentar la percepción e interpretación del abuso por la persona examinada, el contexto social antes, durante y después de la tortura y/o maltrato, el apoyo social de amigos y de la comunidad, los valores y actitudes sobre los acontecimientos traumáticos; los factores políticos y culturales, así como la intensidad y duración de los acontecimientos traumáticos.

11.4 Evaluación del funcionamiento social (incluir empleo, relaciones y papel dentro del núcleo familiar, así como relaciones sociales después de los eventos):

11.5 Descripción del cuadro clínico o de hallazgos que sugieran que la persona examinada se encuentra bajo la influencia de alguna sustancia tóxica, enervantes, etc.

12. ESTUDIOS PARACLINICOS: (si están indicados)

12.1 Estudios radiográficos (radiografía simple, escintilografía radio isotópica, tomografía computarizada, resonancia magnética nuclear y/o ultrasonografía).

Describir el resultado del examen, fecha y sitio donde se realizó éste, nombre del radiólogo u otro que interpreta el estudio radiológico (anexar copia oficial del resultado):

12.2 Estudios forenses:

Aunque no limitados a los exámenes médico, químico, histopatológico, patológico, genético, etc., que aquí se enumeran, se podrán practicar estudios forenses que incluyan laboratorios de toxicología; muestras de líquido seminal, vaginal y/o rectal; estudios de ADN; muestras de cabello, piel y uñas; estudios de ropas u otros objetos personales.

Describir el nombre del examen, resultado, rango normal, fecha y sitio donde se realizó el examen, nombre del profesional que lo interpreta (anexar copia oficial del resultado):

12.3 Otros estudios paraclínicos:

Aunque no limitados a los exámenes de laboratorio que aquí se enumeran, se deberán recabar otras ayudas diagnósticas que incluyan laboratorios de análisis de sangre, electroencefalogramas, miografías, biopsias de piel y endoscopías. Aquí se debe recurrir al *Manual para la Aplicación del Dictamen Médico/Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato* de la PGR o bien al *Protocolo de Estambul* para ver las indicaciones clínicas de cada una de estas ayudas diagnósticas.

Detallar el nombre del examen, resultado, rango normal, fecha y sitio donde se realizó el examen, nombre del profesional que lo interpreta (anexar copia oficial del resultado).

13. DOCUMENTACION GRAFICA, FOTOGRAFICA Y AUDIOVISUAL:

Para una presentación gráfica de las lesiones, deberán llenarse los diagramas de siluetas anatómicas que se anexan. De igual manera, se documentarán fotográficamente las lesiones. Las numeraciones del dictamen se correlacionarán con la numeración de los diagramas y las fotografías.

Advertencia: todo material gráfico y/o audiovisual se conservará como evidencia.

- 13.1 Se registraron diagramas: Sí ☐ (Cuántos: _____) NO ☐
- 13.2 Se tomaron fotografías: Sí ☐ (Cuántas: _____) NO ☐
- 13.3 Se tomaron videos: Sí ☐ (Cuántos: _____ Duración: _____ minutos) NO ☐

14. INTERCONSULTAS:

De requerir la intervención de algún médico especialista o de cierta área pericial auxiliar, su resultado se analizará por los peritos médicos firmantes, quienes determinarán y concluirán si existe o no congruencia y correspondencia entre la dinámica de hechos y el resultado lesivo con la versión de la persona examinada, así como con el mecanismo productor de lesiones y su cuadro lesivo observado. (Interpretación de los hallazgos).

14.1 Exámenes psicológicos y/o neuropsicológicos:

Describir el resultado del examen, fecha y sitio donde se realizó, nombre del psicólogo, neuropsicólogo o psiquiatra que interpreta el estudio (anexar copia oficial de los resultados)

14.2 Otras interconsultas:

Describir el resultado del examen, fecha y sitio donde se realizó éste, nombre del profesionista que condujo dicha interconsulta (anexar copia oficial de las mismas)

15. INTERPRETACION DE LOS HALLAZGOS. OPINION SOBRE LA CONGRUENCIA ENTRE TODAS LAS FUENTES DE INFORMACION Y EVIDENCIAS CITADAS: (Testimonios, hallazgos físicos y/o psicológicos, expedientes clínicos, dictámenes, fotografías, estudios paraclínicos, estudios forenses o interconsultas, etc.)

I.- SIGNOS Y SINTOMAS FISICOS:

- A) Correlacionar el grado de concordancia entre los síntomas e incapacidades recientes (agudas) y no recientes (crónicas) con las alegaciones de tortura y/o maltrato.
- B) Correlacionar el grado de concordancia de los hallazgos encontrados durante la exploración física y las alegaciones de tortura y/o maltrato (**la ausencia de signos físicos no excluye la posibilidad de que se haya infligido tortura y/o maltrato**).
- C) Correlacionar el grado de concordancia entre los hallazgos físicos del individuo y su conocimiento de los métodos de tortura y/o maltrato utilizados en una determinada región y sus efectos ulteriores comunes.

II.- SIGNOS Y SINTOMAS PSICOLOGICOS:

- A) Correlacionar el grado de concordancia entre los hallazgos psicológicos y la descripción de la presunta tortura y/o maltrato.
- B) Evaluar si los signos psicológicos hallados son reacciones esperables o típicas al estrés extremo dentro del contexto cultural y social del sujeto.
- C) Señalar el estado que guarda el sujeto en la evolución fluctuante durante el período en que se padecen los trastornos mentales relacionados con los traumas; es decir, cuál sería el marco temporal en relación con los acontecimientos de tortura y en qué punto de la recuperación se encuentra el sujeto.
- D) Identificar todo elemento estresante coexistente que actúe sobre el sujeto, así como el efecto que sobre él esas influencias puedan tener.
- E) Mencionar y correlacionar con las alegaciones de abuso, condiciones físicas tales como daño cerebral orgánico, que pueden contribuir al cuadro clínico.

[illegible][illegible]

--	--

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____

NOTA: SE ESTABLECERÁ PRINCIPALMENTE SI EL CUADRO LESIVO REFERIDO POR LA PERSONA EXAMINADA ES COMPATIBLE O NO CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA: "COMETE EL DELITO DE TORTURA, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE, CON MOTIVO DE SUS ATRIBUCIONES, INFLIJA A UNA PERSONA DOLOROS O SUFRIMIENTOS GRAVES SEAN FÍSICOS O PSÍQUICOS, CON EL FIN DE OBTENER DEL TORTURADO O DE UN TERCERO, INFORMACIÓN O UNA CONFESIÓN, O CASTIGARLA POR UN ACTO QUE HAYA COMETIDO O SE SOSPECHE HA COMETIDO, O COACCIONARLA PARA QUE REALICE O DEJE DE REALIZAR UN CONDUCTA DETERMINADA".

Exponer opinión profesional sobre la concordancia que existe entre todas las fuentes de información, evidencia forense antes mencionada y las alegaciones de tortura y/o maltrato. Emitir la clasificación médico legal de las lesiones físicas y/o psicológicas encontradas. Incluir recomendaciones sobre nuevas evaluaciones y cuidados del sujeto.

18. DECLARACION DE RESTRICCIONES EN LA PRACTICA DEL DICTAMEN:

Los peritos médicos abajo firmantes certifican que les fue permitido trabajar de manera libre e independiente y examinar en privado a la persona mencionada en este dictamen, fuera de alguna restricción o reserva, sin que las autoridades responsables de la custodia utilizaran alguna forma de coacción.

SI ☐ NO ☐

En caso de haber existido restricciones, especificarlas:

19. DECLARACION DE VERACIDAD:

La práctica del examen finalizó a las _____ del _____ de _____ del _____.

Nosotros declaramos, bajo protesta de decir verdad y de acuerdo con el artículo 225 del CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, que estamos dispuestos a emitir opinión técnica basada en el presente dictamen y en nuestro conocimiento especializado, y que este dictamen fue realizado el día de la fecha que se señala en el mismo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

EL PERITO MEDICO LEGISTA O FORENSE

Nombre y firma

Número de cédula profesional

EL PERITO MEDICO LEGISTA O FORENSE

Nombre y firma

Número de cédula profesional

20. PARTE A LAS AUTORIDADES COMPETENTES:

Si la persona responde afirmativamente que sufrió abusos de carácter físico, psicológico y/o sexual, o bien si a juicio del médico hay indicios de éstos, deben hacerlo del conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación a efecto de que se le dé, a la persona examinada, atención especializada en la materia y/o se le ofrezca protección.

Incluir el nombre del agente del Ministerio Público de la Federación al cual se informa:

EN CASO DE QUE LOS PERITOS MÉDICOS LEGISTAS O FORENSES, OFICIALES O HABILITADOS, DESPUÉS DE HACER EL RECONOCIMIENTO CLÍNICO INTEGRAL DE LA PERSONA EXAMINADA, POSEAN INDICIOS O BIEN, INFIERAN QUE PUEDEN HALLARSE ANTE UN CASO DE TORTURA O MALOS TRATOS, DEBERÁN FIRMAR LO QUE SIGUE:

De acuerdo con el artículo 221 del CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, los peritos que dictaminen serán dos o más, pero bastará uno cuando solamente éste pueda ser habido, o cuando el caso sea urgente.

Con fundamento en el artículo 11 de la LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA, hacemos del conocimiento del C. Agente del Ministerio Público de la Federación que, el presente caso, puede encuadrar en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la citada Ley. El numeral 11 mencionado, dice:

"ARTICULO 11. El servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un hecho de tortura, está obligado a denunciarlo de inmediato, si no lo hiciere, se le impondrán de tres meses a tres años de prisión, y de quince a sesenta días multa, sin perjuicio de lo que establezcan otras leyes..."

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."

EL PERITO MEDICO LEGISTA O FORENSE

EL PERITO MEDICO LEGISTA O FORENSE

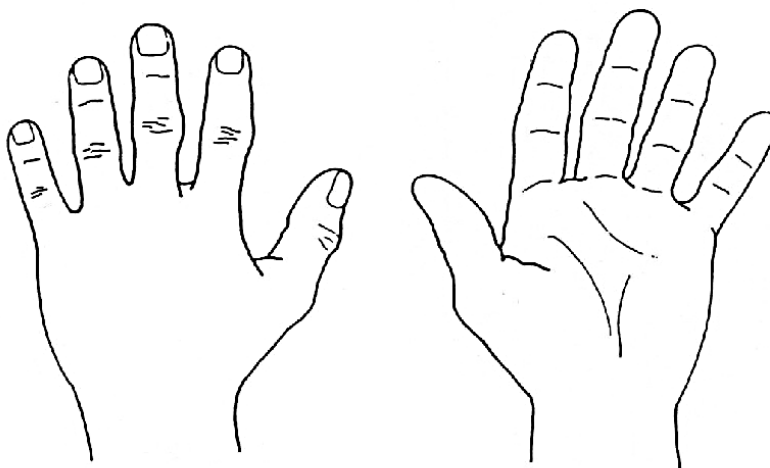
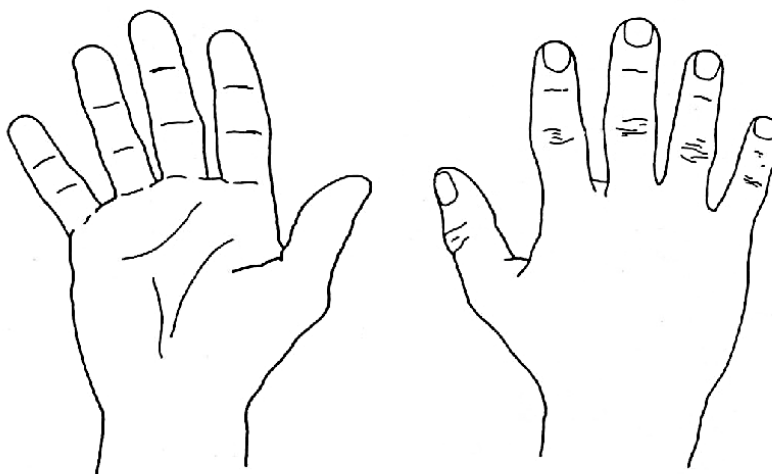
Nombre y firma

Nombre y firma

Nota: En caso de no utilizarse, cancelar el espacio de firmas.

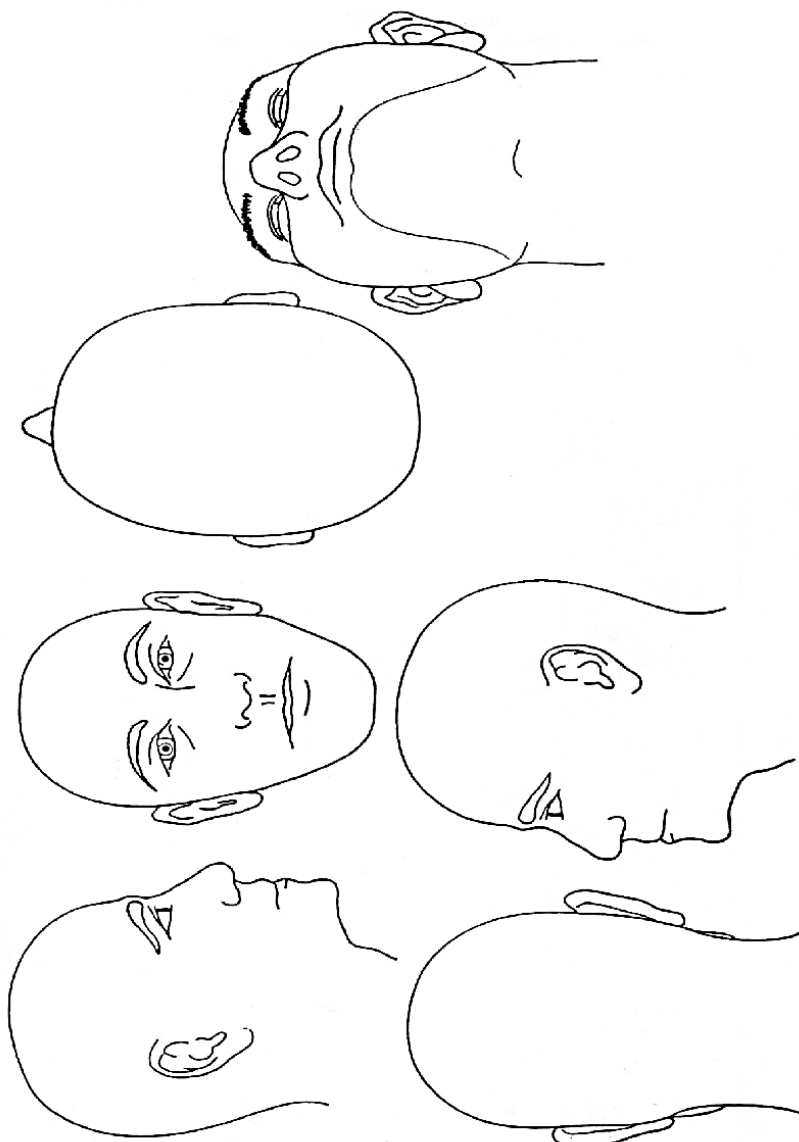
ANEXO
SILUETAS CORPORALES

Nota: Debe existir correspondencia del señalamiento con la descripción de lesiones



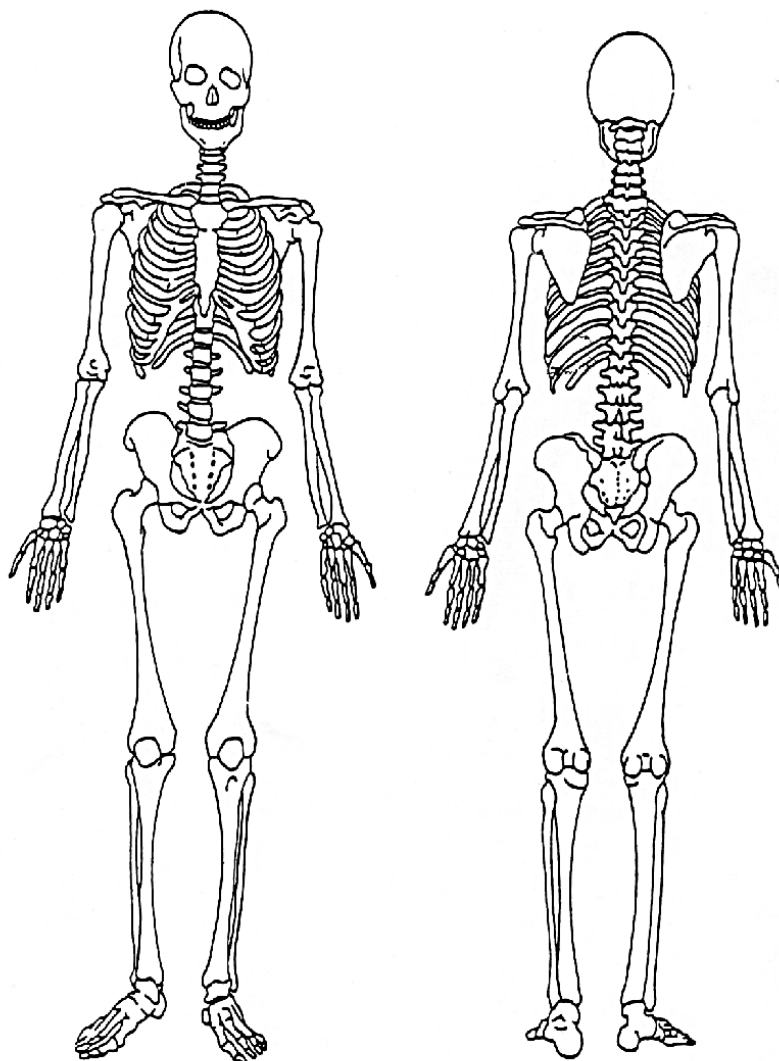
ANEXO
SILUETAS CORPORALES

Nota: Debe existir correspondencia del señalamiento con la descripción de lesiones



ANEXO
SILUETAS CORPORALES

Nota: Debe existir correspondencia del señalamiento con la descripción de lesiones

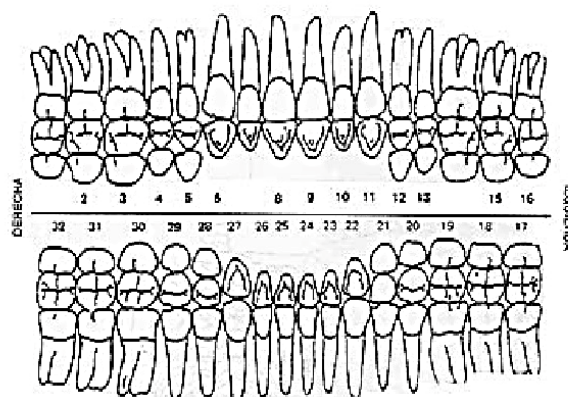


ANEXO SILUETAS CORPORALES

Nota: Debe existir correspondencia del señalamiento con la descripción de lesiones

MÁRQUENSE EN ESTE GRÁFICO TODAS LAS RESTAURACIONES EXISTENTES Y LAS PIEZAS FALTANTES

Estimación Edad
Sexo
Raza



Señalar con un círculo los
términos descriptivos

Prótesis presentes

Maxilar superior

Dentadura completa

Dentadura parcial

Punto fijo

Maxilar inferior

Dentadura completa

Dentadura parcial

Punto fijo

Describir exactamente todos los aparatos prótesis o puentes fijos

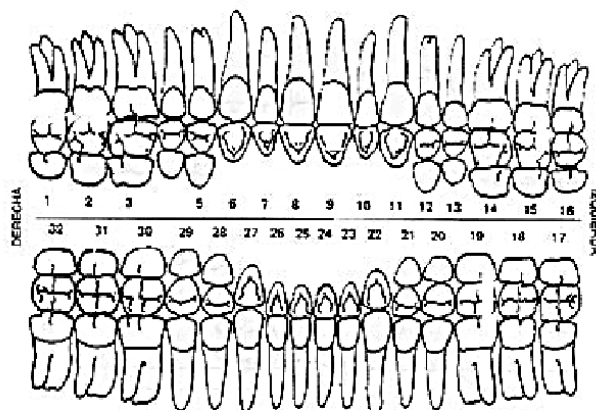
Manchas en los dientes

Ligeras

Moderadas

Puertas

SEÑALAR TODAS LAS CARIES EN ESTE GRÁFICO
Señalar todas las caries y poner "X" en todas las piezas que faltan



Señalar con un círculo
los términos descriptivos

Relación

Normal

Saliente arriba

Saliente abajo

Condición periodontal

Excelente

Mediana

Deficiente

Cálculos

Ligeros

Moderados

Importantes

OBSERVACIONES

Anexo 4: Formato de Encuesta para Peritos

Encuesta para la investigación: “La Procuración de Justicia en las Violaciones de los Derechos Humanos en los Casos En Trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”

INSTRUCCIONES

- Emplee un bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. Las presentes preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas, simplemente reflejan su opinión personal.
- Todas las preguntas tienen 4 (Cuatro) opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa, solamente es una opción.
- Marque con claridad la opción elegida con una cruz o tache. Recuerde NO debe marcar dos opciones.
- Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario.

1. De acuerdo con las funciones que usted realiza, ¿Considera que la procuración de justicia es necesaria la capacitación del Perito en la investigación de los Delitos?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

2. En la actualidad, el problema de la procuración de justicia radica en errores estructurales y funcionales de investigación de los delitos. ¿Usted está de acuerdo?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

3. ¿Usted conoce el “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, mejor conocido como el “Protocolo de Estambul”?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

4. En caso de contestar Definitivamente si o Si. ¿Usted lo ha aplicado?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

5. ¿En qué medida conoce el sistema interamericano en la protección de los derechos humanos?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

En caso de contestar No o Definitivamente no, terminara aquí el cuestionario.
Agradecemos su participación.

6. ¿En qué medida considera usted que la víctima presente una petición de admisibilidad de su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando este haya interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

7. ¿Considera importante las recomendaciones que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

8. ¿Usted está de acuerdo en que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aportan al mejoramiento del sistema penal acusatorio en México?

☐ Definitivamente si ☐ Si ☐ No ☐ Definitivamente no

¡Gracias!

Anexo 5: Formato de Encuesta para Organizaciones No Gubernamentales

Encuesta para la investigación: “La Procuración de Justicia en las Violaciones de los Derechos Humanos en los Casos En Trámite ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos”

INSTRUCCIONES

- Emplee un bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. Las presentes preguntas no tienen respuestas correctas o incorrectas, simplemente reflejan su opinión personal.
- Todas las preguntas tienen 5 (cinco) opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo que piensa, solamente es una opción.
- Marque con claridad la opción elegida con una cruz o tache. Recuerde NO debe marcar dos opciones.
- Si no puede contestar una pregunta o si la pregunta no tiene sentido para usted, por favor pregúntele a la persona que le entregó este cuestionario.

Preguntas	Completamente	Aceptable	Regular	Poco	Nada
1. ¿Comprende la función de un defensor de los derechos humanos?					
2. ¿En qué medida considera usted que los mecanismos de defensa de los derechos humanos empleados por parte del Estado mexicano sean óptimos?					
3. ¿Qué tan de acuerdo está usted que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sean efectivas para la solución de los casos contra el Estado Mexicano?					
4. ¿En qué medida piensa usted que el sistema de procuración de justicia en México necesita de un cambio estructural y funcional en la investigación del delito?					
5. ¿Considera que las aportaciones en la defensa de los derechos humanos ayudan a resolver la problemática en la procuración de justicia?					

¡Gracias!

Anexo 6: Formato de Entrevista para el Servidor Público de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

Entrevista

En las oficinas de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación ubicada en la calle Dinamarca 84, Piso 7, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. Se realizó una entrevista a un servidor público.

1. ¿Cuál es tu función en esta área?

2. Aproximadamente, ¿Cuántos casos en trámite ante la CIDH tienes a tu cargo?

3. ¿Qué porcentaje de los casos presentan incumplimiento por parte del Estado Mexicano en las recomendaciones realizadas por la CIDH?

4. De esos casos ¿Han presentado medidas para una posible solución? Y ¿Cuáles?

5. ¿Qué observaciones has notado en la procuración de justicia de los casos en trámite ante la CIDH?
